

REPÚBLICA DE CHILE

---

# DECRETOS-LEYES Y REGLAMENTOS

EXPEDIDOS POR EL

Ministerio de Justicia



SANTIAGO DE CHILE  
IMPRENTA UNIVERSITARIA

Estado 63

1925

349.83  
C53 dj



349.83-C53dj

etc.  
Lamen-  
nis-

Gaylord Bros.  
Makers  
Syracuse, N. Y.  
PAT. JAN 21, 1908



REPÚBLICA DE CHILE

---

# DECRETOS-LEYES Y REGLAMENTOS

EXPEDIDOS POR EL

Ministerio de Justicia



Santiago de Chile  
IMPRENTA UNIVERSITARIA  
Estado 63  
1925





Este volumen contiene los decretos-leyes y reglamentos de carácter permanente del Ministerio de Justicia, dictados por la Excma. Junta de Gobierno compuesta por los señores don Emilio Bello Codesido, General don Pedro Pablo Dartnell y Almirante don Carlos Ward y el Ministro don José Maza.







## MINISTERIO DE JUSTICIA

### Decreto-Ley N.º 233

(Concede amnistía a todos los procesados por cuestiones sociales, políticas y electorales)

(Publicado en el "Diario Oficial" de 31 de Enero de 1925)

Núm. 233.—Santiago, 30 de Enero de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

### DECRETO-LEY:

Concédese amnistía a todos los que se encuentran actualmente procesados o pudieran ser juzgados con motivo de los sucesos ocurridos en San Gregorio el 3 de Febrero de 1921 y en Puerto Natales el 23 de Enero de 1919.

Se concede también amnistía a todos los que se encuentren comprometidos en los procesos acumulados por asociaciones ilícitas, y de que conoce un Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en los procesos instruidos a consecuencia de movimientos colectivos de carácter social.

Se concede, igualmente, amnistía a todos los que se hallen procesados o pudieran serlo por hechos cometi-



dos con anterioridad a esta fecha, contra las autoridades, contra el orden político y la seguridad interior del Estado.

Declárase, asimismo, amnistiados todos los que fueren responsables por delitos de carácter electoral.

Rija desde su publicación en el **Diario Oficial**.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Emilio Bello C.—Pedro P. Dartnell.—C. Ward.—José Maza.**

---

No tiene exposición de motivos por haberse considerado innecesaria dada la naturaleza de la resolución.



## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL CUERPO DE GEN- DARMERÍA DE PRISIONES**

Organizado en forma definitiva el Cuerpo de Gendarmería de Prisiones por Ley N.º 3815 de 30 de Noviembre de 1921, que rige del 1.º de Enero de 1922, y sometido su personal a las disposiciones de la Ley 3029 de 9 de Septiembre de 1915 que estableció la Caja de Retiro y Montepío del Ejército y Armada, pesan sobre él las mismas cargas por descuentos para formar el fondo de dicha Caja que las que se aplican a los individuos de las otras reparticiones armadas que sirve esa Institución, pero no participaba en iguales condiciones que aquéllos de los beneficios del retiro, invalidez y montepío.

En efecto, en conformidad a las disposiciones en vigencia los jefes y oficiales de la Gendarmería sólo tienen derecho a retiro siempre que se encuentren física o moralmente imposibilitados y hayan prestado quince años de servicio en el Cuerpo y además quince años en otras reparticiones públicas. Las clases y gendarmes tienen derecho a retiro a partir de veinte años de servicio y para todos la pensión se regula con arreglo a las tantas cuarentavas partes del sueldo fijo como años de servicio compruebe el inutilizado.

La invalidez relativa concede derecho a retiro al personal de la Gendarmería con sólo el 50% del sueldo.

El personal de las otras Instituciones armadas que



junto con la Gendarmería y en igual proporción que ésta contribuyen a formar la Caja de Retiro y Montepío gozan de esos beneficios desde que cumplan diez años de servicio. La pensión de retiro se regula para los jefes y oficiales de Ejército sobre la base de treinta y cinco años y para la tropa de veinticinco años, la invalidez relativa les da derecho al 75% de sus sueldos y el montepío, se les concede por el solo hecho de fallecer en servicio activo también con el 75% del sueldo.

La pensión de montepío sólo se concede en la actualidad a las familias de los miembros de la Gendarmería que hayan fallecido en actos del servicio y consiste en el 25% del sueldo de que gozaba el causante.

Esta desigualdad de condiciones es aún mayor si se atiende a los sueldos actualmente asignados al personal de la Gendarmería comparados con los que han sido asignados por las últimas leyes a los Carabineros y Policías que son Instituciones con las cuales el Cuerpo de Gendarmería ofrece mayor similitud por la naturaleza de las funciones que desempeña.

El cuadro adjunto permite establecer con mayor claridad la diferencia de renta asignada al personal de estas tres Instituciones y explica de consiguiente la justicia de conceder a la Gendarmería un aumento proporcional en la forma que se detalla:

Empleos	Carabineros	Policía	Gendarme- ría	Mayor Sueldo
1 Tte. Coronel	\$ 18.000	\$ 15.000	\$ 7.000	\$ 12.000
1 Mayor	14.625	12.000	6.500	10.000
1 Capital	11.625	9.600	6.000	8.000
1 Teniente 1.º	8.250	8.400	4.000	6.000
1 Teniente 2.º	6.600	7.200	3.000	5.000
1 Sargento 1.º	4.500	3.600	2.280	3.000
1 Cabo 1.º	3.000	3.300	2.040	2.760
1 Soldado	2.250	3.000	1.680	2.400

El proyecto que se propone consulta la manera de



equiparar a la Gendarmería a las otras Instituciones armadas en lo que se refiere al retiro, montepío e invalidez, para lo cual contribuye, como se ha dicho, en igual proporción que aquéllas.

El proyecto consulta también diversas otras medidas relativas a la forma de reclutar y ascender el personal y como el escalafón de jefes y oficiales es muy reducido y hay manifiesta conveniencia de dar opción al ascenso al personal subalterno, se establece el retiro forzoso por edad.

Como esta medida crea una situación nueva al personal, parece justo y conveniente conceder una compensación a los que a la fecha de la promulgación del Decreto-Ley afectaría el retiro forzoso, estableciendo que podría hacerlo con la pensión correspondiente computada sobre la base del sueldo asignado al mismo grado en el Cuerpo de Carabineros, ya que el sueldo fijo es superior en aquella Institución al que el proyecto concede a la Gendarmería. Como queda dicho, esta medida es sólo transitoria y tendrá aplicación por una sola vez al promulgarse el Decreto-Ley en proyecto.

Mantiene también el proyecto la asignación para rancho de que hoy goza todo el personal, como asimismo la gratificación de zona para los individuos que presten sus servicios en las provincias de Tacna, Tarapacá, Antofagasta y Atacama y en el Territorio de Magallanes, y fija la gratificación de alojamiento que corresponde a los jefes, oficiales y sub-oficiales, siempre que estos últimos fueren designados para desempeñar las funciones de jefes de establecimientos penales.

En la actualidad se proporciona casa-habitación a los jefes del Cuerpo y algunos oficiales gozan de una asignación para casa que se mantiene desde la época en que estos empleados figuraban en el presupuesto entre el personal civil de las prisiones.

---



El desempeño de las funciones encomendadas a la Gendarmería, que por su propia naturaleza deben ejercerse permanentemente, de día y de noche, con escasísimos descansos, imponen al personal de la Gendarmería una pesadísima labor que justifica sobradamente el mayor desembolso que ha de importarle el aumento de sueldo que consulta el proyecto tanto más si se considera las actuales condiciones de carestía de la vida. Las demás medidas, si bien han de beneficiar al personal, no imponen mayores gastos o son costeadas en parte muy apreciable con los descuentos establecidos para la formación de la Caja de Retiro y Montepío.

---

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de la Junta de Gobierno y de su Consejo de Secretarios de Estado el proyecto de Decreto-Ley que se acompaña.

(Firmado).—**José Maza.**



## Decreto-Ley N.º 301

(Orgánico del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 10 de Marzo de 1925)

Núm. 301.—Santiago, 9 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

### DECRETO-LEY:

Artículo 1.º—El Cuerpo de Gendarmería de Prisiones es una institución militar encargada de la vigilancia y custodia de los reos y detenidos dentro del recinto de los tribunales; de la sujeción de los reclusos en los establecimientos penales y de trasladar a los penados y detenidos de un punto a otro de la República.

Art. 2.º—El Cuerpo de Gendarmería depende directamente del Ministerio de Justicia y las compañías o destacamentos al servicio de una prisión no serán consideradas como parte de la guarnición militar, sino en graves y excepcionales circunstancias relacionadas con el orden público. Las autoridades no podrán, en ningún caso, en época normal, distraerlos de las funciones que le están encomendadas.

Art. 3.º—La denominación y sueldos anuales de los empleados de la Gendarmería, serán los siguientes:

Teniente-coronel y comandante del Cuerpo, doce mil pesos (\$ 12,000).

Mayor-Intendente y 2.º jefe, diez mil pesos (\$ 10,000).

Capitanes, ocho mil pesos (\$ 8,000).

Tenientes 1.<sup>os</sup>, seis mil pesos (\$ 6,000).

Tenientes 2.<sup>os</sup>, cinco mil pesos (\$ 5,000).

Sargentos 1.<sup>os</sup>, tres mil pesos (\$ 3,000).

Cabos 1.<sup>os</sup>, dos mil setecientos sesenta pesos (\$ 2,760); y

Gendarmes, dos mil cuatrocientos pesos (\$ 2,400).

La dotación mínima del Cuerpo será de un teniente-coronel; un mayor, dos capitanes, ocho tenientes 1.<sup>os</sup>, nueve tenientes 2.<sup>os</sup>, treinta sargentos, setenta y dos cabos, mil trescientos cuarenta y seis gendarmes. Esta dotación podrá ser aumentada por la Ley de Presupuestos, conforme a las necesidades del servicio dentro del escalafón de empleos fijados en el inciso anterior.

El personal que preste sus servicios en las provincias de Tacna, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y en el Territorio de Magallanes, gozará de una gratificación de zona de un 20% sobre sus sueldos.

Art. 4.º—El personal del Cuerpo de Gendarmería gozará de una asignación mensual para rancho que será fijada anualmente por la Ley de Presupuestos.

Art. 5.º—El Cuerpo de Gendarmería queda sometido a las leyes y ordenanzas militares del Ejército en lo relativo a la disciplina y castigo de los delitos que se cometan por su personal. En cuanto a la instrucción de éste, a los ascensos, detalles de organización y distribución de sus servicios, quedará sometido a los Reglamentos y decretos que dictare el Presidente de la República.

Art. 6.º—El personal de jefes y oficiales de la Gendarmería será nombrado por el Presidente de la República y se elegirá en el siguiente orden:

Jefes: a) Entre los del grado inmediatamente inferior; y

b) Entre los jefes y oficiales del Ejército, Armada,



Carabineros y Policías, retirados con más de diez años de servicio.

Oficiales: a) Entre los del grado inmediatamente inferior y los sargentos Los del Cuerpo con nota de buenos servicios y no más de cuarenta y cinco años de edad; y

b) Entre los oficiales y sub-oficiales del Ejército, Armada, Carabineros y Policías, retirados con buena licencia.

Los jefes, oficiales y sub-oficiales del Ejército, Armada, Carabineros y Policías, que fueren nombrados para la Gendarmería percibirán como única retribución el 50% del sueldo asignado al empleo a más de su pensión de retiro.

Art. 7.º—El reclutamiento de los individuos de tropa se hará entre los que hayan hecho su servicio militar y entre los individuos licenciados del Ejército, Armada, Carabineros y Policías Fiscales, con buena licencia.

Art. 8.º—Los miembros del Cuerpo de Gendarmería que se ausentaren incidentalmente en comisión del servicio del lugar de su residencia que les está designada o custodiaren reos en viajes, tendrán el siguiente viático por día:

Jefes, veinte pesos (\$ 20).

Oficiales, doce pesos (\$ 12).

Clases y gendarmes, siete pesos (\$ 7).

Art. 9.º—El personal del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones tendrá derecho a retiro, invalidez y montepío, en conformidad a las reglas que se determinan en los artículos siguientes:

Art. 10.—Para que un miembro del personal de la Gendarmería tenga derecho a pensión de retiro, y a dejar montepío a su familia, deberá comprobar, a lo menos, diez años de servicios.

Sin embargo, si los jefes, oficiales y tropas de la

gendarmería se inutilizaren a consecuencia de actos del servicio, tendrán derecho a retiro y a dejar montepío a sus familias aunque no tengan diez años.

En tal caso, si la inutilidad fuere parcial, la pensión de retiro y montepío será la que corresponda a diez años de servicio, y si fuere total, la pensión de retiro consistirá en el sueldo íntegro asignado al empleo, y la de montepío en el setenta y cinco por ciento de esta pensión de retiro.

Se entenderá por inutilidad parcial, la que imposibilita para continuar en el servicio, y por total, la que además incapacite para ganar el sustento en ocupaciones usuales o propia de la condición u oficio del individuo.

Art. 11.—El personal de tropa, con más de diez años de servicio, que se incapacitare parcialmente en actos del servicio o que se inutilizare física o moralmente, tendrá derecho a ser licenciado con pensión de retiro en conformidad a la siguiente escala:

Años	%
10	25
11	30
12	35
13	40
14	45
15	50
16	55
17	60
18	65
19	70
20	75
21	80



Años	%
22 .....	85
23 .....	90
24 .....	95
25 .....	100

Art. 12.—La pensión de retiro del personal de jefes u oficiales de la Gendarmería que se conceda por imposibilidad física o moral, o por edad se decretará tomando por base el sueldo íntegro correspondiente a sus respectivos empleos asignándoles tantas treinta y cinco avas partes de ese sueldo como años de servicios hubiere prestado a la Nación en empleos militares o que hayan permanecido como alumnos en los institutos de instrucción militar y empleos civiles que den derecho a jubilar, anteriores a la fecha del retiro.

Art. 13.—La pensión de montepío a las familias de los miembros de la Gendarmería que tengan derecho a ella consistirá en el setenta y cinco por ciento de la pensión de retiro de que esté en posesión el empleado fallecido o de la que le corresponda el día de su fallecimiento si éste ocurre en servicio activo.

La pensión de montepío de la familia de los que estando en servicio activo fallecieren a consecuencia de actos del servicio, será el setenta y cinco por ciento del sueldo asignado al empleo del funcionario fallecido.

Art. 14.—Tendrán derecho a montepío, las viudas, los hijos legítimos y las madres viudas legítimas de los jefes y oficiales, clases y gendarmes del Cuerpo de Gendarmería y este derecho y su concesión se sujetará a las prescripciones de la ley número 2,406 de 9 de Septiembre de 1910.

Art. 15.—Es forzoso el retiro para los jefes y oficiales de la Gendarmería, que cumplan las siguientes edades:

Comandante .....	64 años
Mayor .....	60 „
Capitán .....	55 „
Teniente 1.º .....	50 „
Teniente 2.º .....	45 „

Art. 16.—El personal de jefes y oficiales y tropa del Cuerpo de Gendarmería, quedará sometido a los descuentos que establece el art. 2.º de la Ley 3,029 de 9 de Septiembre de 1915.

La Caja de Retiro del Ejército y Armada tendrá a su cargo el pago de las pensiones de retiro y montepío, que se concedan al personal del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones y a sus familias en la forma que determina la Ley N.º 4,022, de 8 de Septiembre de 1924.

Art. 17.—El personal de jefes y oficiales que presen sus servicios en reparticiones o establecimientos donde no se les proporcione casa-habitación, tendrán derecho a una gratificación de alojamiento equivalente al treinta por ciento del sueldo. Igual derecho tendrán los sub-oficiales que fueren designados para desempeñar las funciones de jefes de establecimientos penales.

Art. 18.—Los jefes de la Gendarmería tendrán derecho a pasaje libre de primera clase por los Ferrocarriles del Estado, con derecho a cama.

Art. 19.—El Cuerpo de Gendarmería gozará de liberación de porte para su correspondencia oficial, postal y telegráfica que sea timbrada con la insignia del Cuerpo.

Art. 20.—Los actuales jefes y oficiales a quienes afecta el retiro forzoso a la fecha de la promulgación del presente Decreto-Ley tendrán derecho a la pensión correspondiente computada sobre la base del sueldo asignado al mismo grado en el Cuerpo de Carabineros.

Art. 21.—Derógase la Ley N.º 3,815, de 30 de Noviembre de 1921.



Art. 22.—Este Decreto-Ley comenzará a regir desde el 1.º de Marzo del año 1925.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—  
(Fdo.)—**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SOBRE EL PROYECTO DE GRATIFICACIÓN AL PERSONAL CIVIL DE LAS PRISIONES**

En razón de que los sueldos del personal civil de las Prisiones son generalmente reducidos y muchos de ellos verdaderamente exigüos, la Ley N.º 3,815, de 30 de Noviembre de 1921, concedió a estos empleados una gratificación gradual que varía entre un diez y un cuarenta por ciento.

Esta gratificación fué consultada en la Ley referida, que es la que dió existencia legal al Cuerpo de Gendarmería de Prisiones, porque al fijar la renta del personal militar que guarnece los establecimientos penales, pareció también justo atender a la situación del personal civil de esos mismos planteles.

En el proyecto sobre mejoramiento de la condición del personal de la Gendarmería se ha excluído deliberadamente el artículo que consulta la gratificación en referencia, con el propósito de no mezclar materias que por su naturaleza deben ser establecidas por separado. El personal militar de las Prisiones, o sea, la Gendarmería, está sometido a la ordenanza y comprendido en las disposiciones que rigen la Caja de Retiro del Ejército y Armada, para la formación de cuyo fondo contribuye con el descuento mensual sobre los sueldos fijados al efecto. Parece, pues, conveniente, que la renta del personal civil de los establecimientos penales sea establecida separadamente.



Esto, no obstante, subsisten las razones que aconsejaron conceder a estos últimos una gratificación sobre sus sueldos y, atendidas las condiciones de carestía de la vida y las circunstancias de que la Gendarmería obtendrá un mejoramiento de su sueldo, no sería equitativo limitarse a mantener por separado la gratificación de que hasta hoy goza ese personal, sin otorgarles un aumento proporcional que atienda de preferencia a los empleados que gozan de menor sueldo y los coloque en condición de poder atender a sus más urgentes necesidades.

El proyecto que se ha confeccionado mantiene la clasificación de los sueldos fijada en la escala con que se concedió la gratificación actual y conforme a las ideas anteriormente expuestas aumenta el primer grado en un 5%, el segundo en un 10%, el tercero en un 20% y el cuarto en un 60%.

Debe tenerse presente que el mayor gasto que este aumento de gratificación signifique ha de ir paulatinamente disminuyendo con la aplicación de la medida consultada en el artículo 3.º del proyecto, en orden a que las vacantes de jefes de establecimientos penales, exceptuados solo unos pocos por su categoría e importancia, habrán de ser llenados con oficiales y sub-oficiales de la Gendarmería sin mayor remuneración.

Esta medida que ha sido ensayada con muy buenos resultados responde no sólo al propósito de economía sino al de dar mayor unidad al servicio y obtener otras ventajas que se derivan de la circunstancia de que el personal de la Gendarmería depende directamente de su Comandancia, que está en contacto con el Ministerio de Justicia.

Con el propósito de abordar en seguida el estudio definitivo de una reorganización total de los establecimientos penales de la República, ha creído conveniente el infrascrito proponer, por ahora, el aumento en forma de gratificación, estableciendo que para el sólo efecto

de la jubilación, se considerará como sueldo las gratificaciones que se proyectan a fin de atender así a la situación del personal antiguo que se vea en el caso de acogerse a dicho beneficio.

En mérito de lo expuesto, someto a la resolución de la Junta y de su Consejo de Secretarios de Estado el proyecto de Decreto-Ley que se acompaña.

Santiago, 9 de Marzo de 1925.—(Fdo.)—**José Maza.**

### **Decreto-Ley N.º 302**

(Gratificación al personal civil de las prisiones)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 9 de Marzo de 1925)

Núm. 302.—Santiago, 9 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

#### **DECRETO-LEY:**

Artículo 1.º—Los empleados civiles de los establecimientos penales gozarán de las siguientes gratificaciones anuales sobre sus sueldos respectivos:

Un quince por ciento (15%) los que ganen más de \$ 10,000.

Un treinta por ciento (30%) los que ganen de \$ 6,001 a \$ 10,000.

Un cincuenta por ciento (50%) los que ganen de \$ 3,001 a \$ 6,000; y

Un cien por ciento (100%) los que ganen \$ 3,000 o menos.

Art. 2.º—Para el sólo efecto de la jubilación se considerarán como sueldos las gratificaciones establecidas en el artículo anterior.

Art. 3.º—Las vacantes de jefes de establecimientos penales que ocurran en lo sucesivo, serán llenadas con



personal de oficiales o sub-oficiales de la Gendarmería que designe el Presidente de la República, sin que esta designación les dé derecho a los nombrados a mayor remuneración.

Se exceptúan los empleos de Director de Penitenciarías, Alcaldes de las Cárceles de Santiago y Valparaíso y jefe de la Sección de Detenidos de Valparaíso, los cuales podrán continuar servidos en la forma actual o reemplazados por personal de la Gendarmería a opción del Presidente de la República.

Art. 4.º—El presente Decreto-Ley regirá desde el 1.º del actual.

Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Emilio Bello C.**—**Pedro P. Dartnell.**—**C. A. Ward.**—**José Maza.**

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PRO- YECTO DE DECRETO-LEY SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL**

Sabéis que la libertad condicional se encuentra incorporada a todas las legislaciones del mundo y es reconocida como uno de los medios más eficaces que se hayan ideado para estimular la readaptación social del delincuente y prevenir la reincidencia.

La libertad condicional es el complemento indispensable de todo régimen que quiera merecer el nombre de tal. “Pone en manos del condenado la llave de su celda”, dice Garraud. La amenaza del reingreso a la prisión lo mantiene en la buena conducta. Tiene, pues, el doble carácter de un medio de reforma por la esperanza de la libertad. Ningún estímulo es más poderoso en el ánimo del penado para mejorarlo y readaptarlo a la vida social, que la esperanza de su libertad, y entonces parece lo más racional organizar estas aspiraciones de modo que él las vea hacerse efectivas gracias a su propio esfuerzo encauzado y producido dentro de las normas que rigen la conducta del individuo en la sociedad.

La libertad condicional importa una libertad anticipada que se concede al condenado a una pena privativa de libertad, si durante su reclusión ha dado muestras de haberse preparado para una vida honrada y eficiente, por la educación y el trabajo. El que la obtiene, sale de la prisión antes de que expire el tiem-



po de su condena. Pero la libertad condicional no significa el indulto, porque la pena pronunciada queda en pie. El condenado, en situación de libertad condicional, es siempre un condenado que debe sufrir parte de su pena y que la sufre en libertad. El nombre mismo de la institución implica, pues, que la libertad reviste el carácter de condicional. La posibilidad de la vuelta a la prisión del condenado que no cumple las normas de conducta social, es la característica de la libertad condicional. Importa una verdadera prueba de reeducación a que se sujeta al condenado, por un cierto tiempo.

Según el proyecto de Decreto-Ley que os presento, el beneficio de la libertad condicional, es aplicable a todos los condenados a una pena privativa de libertad de más de un año de duración. Se ha fijado este límite, porque la tendencia a concluir con las penas de menor duración, es ya general en todas las legislaciones, y porque en cuanto se implante entre nosotros, la condena condicional, desaparecerán estas penas inútiles y corruptoras. No parece pues práctico poner un plazo menor para la libertad condicional.

Cualquier condenado a prisión por más de un año, podrá solicitar su libertad condicional; pero deberá haber cumplido cierto tiempo de vida carcelaria y especialmente deberá comprobar que se ha preparado para llevar una vida útil en el futuro, tanto por la buena conducta observada en la Cárcel, cuanto por la adquisición de una industria o trabajo. Esta idea que en algunas legislaciones no parece suficientemente clara, será una de las bases del éxito de la Ley entre nosotros, pues la mayoría de los criminales son gente sin educación alguna y carecen también de medios de vida. Por tal motivo, podría decirse que la Ley de libertad condicional será entre nosotros, antes que una institución penal, una institución educativa, y éste es

el criterio que debe presidir su organización y su aplicación.

De aquí se deduce que habrá de revocarse cada vez que se demuestre que el liberado a quien se ha concedido la libertad condicional, no está apto para la vida social, pacífica y eficaz, sea por su mala conducta, sea por su reincidencia en el crimen.

De aquí también, las providencias que han de tomarse sobre la conducta del libertado fuera de la prisión. La libertad condicional sería una institución fracasada, si no estuviera unida al ejercicio de una vigilancia severa y continua sobre el liberado. Dos sistemas han adoptado sobre esto las legislaciones. Uno da a las autoridades la misión de vigilar al liberado e impone a este último ciertas obligaciones que permitan a las primeras tenerlo siempre bajo su tutela. Otro consiste en confiar la vigilancia del condenado a sociedades de patronato, reconocidas por el Estado y dotadas de atribuciones que les dan derecho a ejercer sobre los liberados un control legal. El primero es seguido en Inglaterra y Estados Unidos; el segundo en Francia y otros países latinos. He creído que, entre nosotros, debe adoptarse el primero, por el hecho de que no existen sociedades de patronatos y porque es posible que organizadas, no desempeñarían sus funciones con la constancia y seriedad que se ha menester.

Por último, he de referirme a otros dos puntos que constituirán verdaderos obstáculos para la feliz aplicación de este Decreto-Ley, pero que no son insalvables.

Una es la actual situación de nuestros establecimientos carcelarios. Estos son absolutamente inadecuados para establecer el régimen de educación y de trabajo, base de toda ley de libertad condicional. Es de sobra conocida la situación en que se encuentran las cárceles del país, para insistir en ello. Pero no es una dificultad para dictar la ley, sino que, por el contrario,



su dictación será un motivo más para edificar buenas cárceles y para organizar sobre bases racionales el servicio carcelario.

Otro es el sistema de indultos y la manera de cómo actualmente se conceden. Debo hacer presente a este respecto que si un derecho de gracia, que extingue toda pena por el ejercicio de la clemencia soberana, prevalece sobre una ley que concede una libertad condicional como resultado de la buena conducta, no hay duda de que la presente Ley no dará resultados apreciables, porque siempre será más fácil y habrá más medios de conseguir un indulto que una libertad condicional.

Fundado en estas consideraciones, propongo a vuestra aprobación el proyecto de Decreto-Ley adjunto, sobre libertad condicional.

Santiago, 9 de Marzo de 1925.—(Fdo.)—**José Maza.**

### **Decreto-Ley N.º 321**

(Establece la libertad condicional)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 12 de Marzo de 1925)

Núm. 321.—Santiago, 10 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, ha acordado y dicta el siguiente

#### **DECRETO-LEY:**

Artículo 1.º—Se establece la libertad condicional, como un medio de prueba de que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien se le concede, se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social.

La libertad condicional, salvo lo que dispone el art. 3.º del presente Decreto-Ley, no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por el condenado y según las disposiciones que se dicten en este Decreto-Ley y en el Reglamento respectivo.

Art. 2.º—Todo individuo condenado a una pena privativa de la libertad, de más de un año de duración, tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

1.º—Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará ésta como condena definitiva;

2.º—Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal en que cumple su condena, según el Libro de Vida que se le llevará a cada uno;

3.º—Haber aprendido bien un oficio, si hay talleres donde cumple su condena; y

4.º—Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten, entendiéndose que no reúne este requisito el que no sepa leer y escribir.

Art. 3.º—Los condenados a presidio perpetuo o más de veinte años, tendrán derecho a salir en libertad condicional una vez cumplidos diez años, y por este sólo hecho su pena quedará fijada en veinte años.

Los condenados, por hurto o estafa, a más de seis años, podrán obtener el mismo beneficio, una vez cumplidos tres años.

Art. 4.º—La petición de libertad condicional la harán los miembros que componen la visita semestral de cárceles y establecimientos penales, al hacer cada visita, previo informe del jefe del establecimiento respectivo.

Estos miembros quedan facultados para pedir la li-



bertad condicional en favor de los reos que cumplan la mitad de su condena, hasta tres meses después de la fecha de la visita.

Art. 5.º—La libertad condicional se concederá por decreto supremo, previos los trámites correspondientes y se revocará del mismo modo.

Art. 6.º—Los reos en libertad condicional no podrán salir del lugar que se les fije como residencia, sin autorización del Ministerio de Justicia; estarán obligados a asistir con regularidad a una escuela nocturna y a trabajar en los talleres penitenciarios, mientras no tengan trabajo en otra parte, y deberán presentarse a la prefectura de policía del respectivo departamento, una vez a la semana, con un certificado del jefe del taller donde trabajen y con otro del director de la escuela nocturna donde concurren, en que conste que han asistido con regularidad y han observado buena conducta.

Art. 7.º—El reo en libertad condicional que fuere condenado por ebriedad o por cualquier delito, que se ausentare sin autorización del lugar que se le haya fijado como residencia, que se comportare mal o no asistiere con regularidad al taller donde trabaje y a una escuela nocturna, o no se presentare, sin causa justificada, durante dos semanas consecutivas a la prefectura de policía, ingresará nuevamente al establecimiento penal que corresponda, a cumplir el tiempo que le falte para cumplir su condena; y sólo después de haber cumplido la mitad de este tiempo, volverá a tener derecho a salir en libertad condicional, en las mismas condiciones y con las mismas obligaciones señaladas.

Art. 8.º—Los reos en libertad condicional que hayan cumplido la mitad de esta pena y hubieren observado durante este tiempo muy buena conducta, según se desprenda del Libro de Vidas que se le llevará a cada uno en la prefectura de policía, tendrán derecho a

que, por medio de un decreto supremo, se les conceda la libertad completa.

Art. 9.º—El presente Decreto-Ley regirá desde su publicación en el **Diario Oficial**.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—

**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—  
José Maza.**

## REGLAMENTO DEL DECRETO-LEY N.º 321 SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL

---

Santiago, 19 de Mayo de 1925.

Hoy se decretó lo que sigue:

N.º 1415. He acordado y decreto:

Apruébase el siguiente **Reglamento** para dar cumplimiento al Decreto-Ley N.º 321, de 10 de Marzo de 1925, sobre Libertad Condicional:

### I.—De la Libertad Condicional

Artículo 1.º—La libertad condicional es un modo de cumplir en libertad, bajo determinadas condiciones, y una vez llenados ciertos requisitos, la pena privativa de libertad a que está condenado un delincuente por sentencia ejecutoriada.

Art. 2.º—Se establece la libertad condicional como una recompensa para el delincuente condenado a una pena privativa de libertad por más de un año, que, por su conducta y comportamiento intachables en el establecimiento penal en que cumpla su pena, por su interés en instruirse y por su empeño en adquirir un oficio o los medios de ganarse la vida honradamente, haya



demostrado que se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social.

Art. 3.º—El período de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al penado para cumplir su condena, y la pena se reputará cumplida si obtiene su indulto o si terminare el período de libertad condicional sin que haya sufrido una nueva condena o sin que se haya revocado su libertad condicional.

Art. 4.º—Tiene derecho a salir en libertad condicional todo individuo condenado a pena privativa de libertad de más de un año de duración, que reuna los siguientes requisitos:

1.º—Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará ésta como condena definitiva;

2.º—Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal en que cumple su condena, según el Libro de Vida que se le llevará a cada uno;

3.º—Haber aprendido bien un oficio, si hay talleres donde cumple su condena; y

4.º—Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten, entendiéndose que no reune este requisito el que no sepa leer y escribir.

## II.—Del Tribunal de Conducta

Art. 5.º—En cada establecimiento penal donde cumplan su condena reos rematados, habrá un Consejo, que se denominará Tribunal de Conducta, con las atribuciones y deberes que se detallan en este Reglamento. Será formado por las siguientes autoridades y funcionarios, sin derecho a percibir remuneración especial:

En las Penitenciarías: Por el Director; por el Médico

del Establecimiento; por el Director de la Escuela y en su defecto, por el profesor más antiguo, y por el Jefe de Compañía o Destacamento de Gendarmes;

En los Presidios: Por el Alcaide; por el Médico del Establecimiento y donde no lo haya por el Médico de Ciudad; por el Jefe de Compañía o Destacamento de Gendarmes; por el Director de la Escuela y en su defecto, por el Profesor más antiguo, y por el Secretario de la Intendencia o Gobernación;

En las Casas de Corrección de Mujeres: Por la Superiora; por el Administrador; por el Médico del Establecimiento y donde no lo haya por el Médico de Ciudad, y por la Directora de la Escuela o la profesora más antigua en su defecto.

Art. 6.º—Citará a sesión, las presidirá, comunicará y hará cumplir los acuerdos del Tribunal de Conducta, el jefe del respectivo establecimiento penal o la persona que lo reemplace en virtud de la ley o de decreto supremo. Hará las veces de Secretario del Tribunal, pero sin formar parte de él, el empleado del respectivo establecimiento penal que tenga a su cargo la estadística.

Art. 7.º—Los acuerdos del Tribunal no aceptados por el jefe del respectivo establecimiento penal, se consultarán por éste inmediatamente al Ministerio de Justicia para que resuelva si se cumplen o nó.

Art. 8.º—Para que un Tribunal de Conducta pueda celebrar sesión se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 9.º—Cuando no se lleve a efecto una sesión por falta de número, el jefe del establecimiento dará cuenta del hecho al Ministerio de Justicia indicando los nombres de los inasistentes.

Art. 10.—El Tribunal de Conducta se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo cite el jefe del respectivo establecimiento penal.

Art. 11.—Cada Tribunal de Conducta llevará un Libro de Actas en que dejará constancia de sus acuerdos

con expresión de los votos disidentes, y un Libro de Vidas de los reos privados de libertad en que se estamparán, cada dos meses, la nota media que el Tribunal acuerde fijarle a cada uno en conducta, en aplicación y en aprovechamiento y las observaciones que estime conveniente. Las anotaciones del Libro de Vidas se darán a conocer a los reos por carteles que permanecerán expuestos durante el bimestre de su vigencia.

El Tribunal de Conducta llevará también un Libro de Vidas para los reos en libertad condicional, en el que se dejará constancia de las anotaciones que correspondan de acuerdo con las informaciones que el Tribunal reciba de la Policía o de otros conductos.

### III.—De la educación en los establecimientos penales

Art. 12.—En las cárceles y en los demás establecimientos penales a que se refiere el artículo 5.º de este Reglamento, donde no haya escuela fiscal, se establecerá una escuela cuyo personal será formado por profesores o profesoras, según el caso, para lo cual se destinarán las plazas necesarias de asimilados al fijar anualmente la dotación del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones.

Art. 13.—El Director de la Escuela Superior de la Penitenciaría de Santiago tendrá la supervigilancia de la enseñanza en todas las cárceles y demás establecimientos penales de la República, para lo cual se solicitará la autorización del Consejo de Educación Primaria. Los profesores a que se refiere el artículo anterior serán nombrados y removidos a petición de este funcionario, tendrán las obligaciones que éste les señale y dependerán directa y exclusivamente de él.



#### IV.—Requisitos para obtener la libertad condicional

Art. 14.—Se cumple con lo que dispone el número 1.º del artículo 4.º de este Reglamento, si el reo ha permanecido privado de libertad, en total, durante la mitad del tiempo de su condena. Se entiende por “tiempo de la condena,” el total de las condenas que tenga un reo, incluyendo las que se le impongan mientras cumple éstas, deducidas las rebajas que haya obtenido por gracia.

Art. 15.—Todo individuo condenado a más de veinte años de presidio o reclusión o a pena de duración perpetua, tendrá derecho a salir en libertad condicional después de haber permanecido diez años privado de libertad, siempre que cumpla con los demás requisitos que establece el artículo 4.º de este Reglamento. Quedan incluídos en esta disposición los reos condenados a pena de duración perpétua que deban cumplir, también, una o más penas temporales. El hecho de que un reo comprendido en los casos contemplados en este artículo haya obtenido su libertad condicional, fija en veinte años el término de su condena.

Art. 16.—El reo que por hurtos o estafas deba cumplir más de seis años de presidio o reclusión, tendrá derecho a salir en libertad condicional, siempre que cumpla con los demás requisitos señalados en el artículo 4.º de este Reglamento, después de permanecer tres años privado de libertad. El hecho de que un reo comprendido en el caso contemplado en este artículo haya obtenido su libertad condicional, fija en seis años el término de su condena.

Art. 17.—Para dar por cumplidas las condiciones impuestas por los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 4.º de este Reglamento, se requiere un pronunciamiento

del Tribunal de Conducta respectivo, que deberá ser acordado quince días antes de cada Visita Semestral de Cárceles y Establecimientos Penales, y, en el caso contemplado en el artículo 7.º de este Reglamento, es necesaria una resolución del Ministerio de Justicia.

Art. 18.—Al pronunciarse el Tribunal de Conducta sobre si un reo cumple o nó con las condiciones señaladas en el artículo anterior, tomará en consideración las notas medias que tenga el reo en el Libro de Vidas a que se refiere el inciso 1.º del art. 11 de este Reglamento, durante el semestre iniciado con la anterior Visita Semestral de Cárceles y Establecimientos Penales.

Para fijar las notas medias en conducta, aplicación y aprovechamiento que deben estamparse en el Libro de Vidas, se procederá en la siguiente forma, sin perjuicio de las excepciones que se consultan en este Reglamento en el inciso 2.º del art. 21 y en el Título V.

La nota de conducta de cada reo será el término medio de las notas que, cada mes, pasarán al Tribunal de Conducta el Jefe de Compañía o Destacamento de Gendarmes, el Director de la Escuela y el Jefe del taller respectivo.

Las notas de aplicación y de aprovechamiento se fijarán, cada una, tomando el término medio de las notas que, también cada mes, pasarán al Tribunal el director de la escuela y el jefe del taller que corresponda.

Cuando una nota media resulte fraccionada, se considerará como número entero la fracción 0.5 o superior a ésta y se despreciará la que sea inferior.

Cuando un reo no asista a un taller por causas ajenas a su voluntad, le fijará las notas de aplicación y aprovechamiento en el trabajo el jefe del respectivo establecimiento penal, tomando en consideración los trabajos que haya hecho por su cuenta o a beneficio del establecimiento.

En las casas de corrección para mujeres informará la Superiora sobre la conducta observada en el establecimiento por las reclusas.

Art. 19.—Para establecer la clasificación de la conducta de cada penado, las autoridades que correspondan tomarán en cuenta los siguientes elementos de juicio:

- a) Su conducta en el patio o calle, en el taller y en la escuela;
- b) Su asistencia al taller y a la escuela;
- c) El aseo personal, de su celda y útiles, y
- d) Las manifestaciones de su carácter, sus tendencias, educación y moralidad.

Para pronunciarse sobre la aplicación y el aprovechamiento, tomarán en cuenta especialmente sus progresos como obrero y como alumno y la causa de sus inasistencias al taller y a la escuela.

Art. 20.—El Tribunal de Conducta podrá requerir en todo momento, de los empleados del establecimiento, los informes que considere necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

Art. 21.—Las notas para clasificar la conducta, aplicación y aprovechamiento de los reos serán: pésimo, malo, regular, bueno y muy bueno.

En cada bimestre, el Tribunal sólo podrá aumentar en un grado la nota de conducta que haya obtenido un reo en el bimestre anterior.

No podrá figurar en la lista a que se refiere el art. 24 de este Reglamento, el reo que haya obtenido en conducta y en aplicación una o más notas inferiores a muy bueno durante el semestre correspondiente.



## **V.—Disposiciones especiales para los casos de reincidencia**

Art. 22.—A los reos reincidentes, cualquiera que sea el delito por el cual hayan sido condenados antes, se les rebajará en un grado la nota que les corresponda en conducta durante el tiempo que sea necesario para que, en ningún caso, puedan salir en libertad condicional antes de cumplir las dos terceras partes de su condena.

Art. 23.—A los reos que sean condenados por delitos cometidos mientras cumplen su condena, ya sea en el establecimiento penal respectivo o estando en libertad condicional, se les rebajará la nota de conducta en un grado durante el tiempo que sea necesario para que, en ningún caso, puedan salir en libertad condicional antes de cumplir las dos terceras partes del tiempo que les corresponda estar de nuevo privados de libertad.

## **VI.—De la forma de obtener la libertad condicional**

Art. 24.—Cinco días antes de cada Visita Semestral de Cárceles y Establecimientos Penales, deberá cada Tribunal de Conducta tener hecha una lista de los reos que reúnan los requisitos para obtener su libertad condicional, con indicación del lugar que se les fijará como residencia, que sólo podrá ser una ciudad donde funcione un Tribunal de Conducta.

Se incluirá, también, en esta lista a los que cumplan la mitad de su condena hasta tres meses después de la fecha de la Visita indicada.

Se dejará constancia en la misma lista de las opiniones disidentes que hubiere.

Art. 25.—La lista a que se refiere el artículo anterior será presentada por el jefe del respectivo establecimien-

to penal a la Visita Semestral de Cárceles y Establecimientos Penales, el día de la Visita, la cual solicitará del Supremo Gobierno la libertad condicional de los reos que figuren en la expresada lista y que, en su concepto, manifestado por mayoría de votos, sean acreedores a esta concesión.

Art. 26.—El Supremo Gobierno, una vez recibida la lista enviada por la Visita Semestral de Cárceles y Establecimientos Penales, dictará un decreto, concediendo la libertad condicional a los reos que figuren en ella, que se transcribirá al Tribunal de Conducta y al Prefecto de Policía que correspondan. En el mismo decreto se indicará el lugar que se le designe como residencia a cada uno. Es entendido que, en el caso contemplado en el inciso 2.º del art. 24 de este Reglamento, ningún reo podrá salir en libertad condicional mientras no haya cumplido la mitad del tiempo de su condena.

Art. 27.—Sólo con autorización del Ministerio de Justicia y a petición del Tribunal de Conducta respectivo, se puede cambiar el lugar designado a un reo liberto para cumplir su condena.

## VII.—De las obligaciones a que quedan sujetos los reos libertos

Art. 28.—Todos los reos en libertad condicional quedarán sometidos y dependerán del Tribunal de Conducta que haya en el lugar de su residencia y que les corresponda según su sexo. Donde no haya Casa de Corrección para mujeres, dependerán éstas del Tribunal del establecimiento para hombres.

Art. 29.—El Tribunal de Conducta puede autorizar a un liberto para salir del lugar que se le haya fijado como residencia, durante un tiempo no superior a dos meses en cada año. En este caso y en el contemplado

en el art. 27 de este Reglamento, dará aviso al Prefecto de Policía de la misma ciudad y comunicará el hecho, dando la filiación y demás datos personales del reo y de su condena y las informaciones que sean necesarias, al Tribunal de Conducta y al Prefecto de Policía del lugar donde se traslade el liberto, ante quienes deberá éste presentarse el mismo día de su llegada o al día siguiente a más tardar y, en adelante, una vez a la semana. Estas autoridades acusarán recibo y la primera de ellas avisará al Tribunal de Conducta y al Prefecto de Policía que correspondan cuando el reo con permiso vuelva al lugar de su residencia.

Cuando un reo liberto con permiso se traslade a un lugar donde no haya Tribunal de Conducta o Prefecto de Policía, serán reemplazadas estas autoridades para los efectos que señala este mismo artículo, por cualesquiera de las siguientes: En lugar del Tribunal de Conducta, por la autoridad administrativa de más alta jerarquía, por el juez de subdelegación o por el oficial del Registro Civil; y en lugar del Prefecto, por el Comandante de Policía comunal o por el jefe de algún destacamento o grupo de carabineros.

Art. 30.—Los Tribunales de Conducta que pertenezcan a establecimientos penales donde haya talleres, podrán exigir a los reos libertos que no tengan trabajo al salir, o a los que, estando en libertad condicional se encuentren sin ocupación, que trabajen en los expresados talleres, sometidos a los reglamentos de régimen interno dictados para los reos.

Los demás Tribunales podrán pedir que a los reos que van a salir en libertad condicional y no tengan trabajo, se les fije como residencia un lugar donde haya talleres para penados.

Los reos que estén en las casos a que se refiere el inciso 1.º de este artículo, podrán ser obligados por el Tribunal respectivo a desempeñar trabajos del Estado o municipales.



Art. 31.—Los reos en libertad condicional están obligados de un modo especial:

1.º—A no salir, sin la autorización debida, del lugar que se les haya fijado como residencia;

2.º—A asistir a una escuela o establecimiento de instrucción y a desempeñar el trabajo que se les haya designado, sin que puedan faltar ningún día, ni llegar atrasados o salir antes de la hora, salvo por enfermedad o por alguna causa poderosa que deberán justificar ante la respectiva Prefectura de Policía;

3.º—A presentarse una vez cada semana, el día Domingo antes de las 12 M., a la Prefectura de Policía que corresponda y entregar al Oficial de guardia los certificados a que se refiere el número 4.º del artículo 32 de este Reglamento. Deberán, también, justificar ante éste sus inasistencias al trabajo o a la escuela y los atrasos y salidas anticipadas. Los reos que trabajen por su cuenta obtendrán el certificado de trabajo del Jefe de Compañía o Destacamento de Gendarmes que forme parte del Tribunal de Conducta respectivo, y

4.º—A obedecer todas las órdenes que les dé el Tribunal de Conducta que les corresponda y el Patronato en quien éste haya delegado atribuciones.

### VIII.—De los Patronatos de reos

Art. 32.—El Tribunal de Conducta tendrá, además, los siguientes deberes y atribuciones, que puede delegar, en todo o en parte, en los Patronatos o Sociedades protectoras de reos con personalidad jurídica que estime conveniente:

1.º—Preocuparse de buscar trabajo a los reos que van a salir en libertad condicional, para lo cual enviará oportunamente a la Oficina del Trabajo que corresponda una lista de estos penados con indicación de los ofi-

cios que tienen, a fin de que esta Oficina les busque colocación en cualquiera ciudad en que exista un Tribunal de Conducta. En lo posible, se tratará de que los libertos queden en el lugar donde vive su familia y se les dará facilidades para que establezcan un trabajo por su cuenta con los ahorros que tengan. Con este objeto, el Tribunal puede exigir a los penados, antes de salir en libertad condicional, que adquieran con sus ahorros las herramientas y útiles necesarios;

2.º—Velar constantemente porque los reos libertos cumplan con sus obligaciones y no sean explotados donde trabajen;

3.º—Poder destinar a otra ocupación o trabajo a los reos libertos cuando éstos lo soliciten o estén desocupados;

4.º—Obtener de los jefes de talleres, fábricas, industrias, etc., donde trabajen los reos libertos y de los directores de las escuelas donde los mismos concurren, que guarden la reserva debida sobre la calidad de reos en libertad condicional que tienen dichos individuos. Obtendrán también de ellos que entreguen semanalmente a los expresados reos un certificado, en formularios que les enviará el Tribunal, en que dejen constancia de la conducta que éstos hayan observado, de su aplicación y progresos, de los días y horas que falten al trabajo o a clases y de los atrasos o salidas anticipadas sin permiso, y

5.º—Tratar de conseguir, en las mejoras condiciones posibles, que los propietarios de casitas para obreros, que sean declaradas higiénicas, las den en arriendo a los reos libertos que lo soliciten por escrito y autoricen, también por escrito, al jefe del taller, fábrica, industria, etc., donde trabajen para que les descuenten de sus salarios el valor del arriendo que se haya convenido. Las sumas descontadas por este capítulo las cobrará directamente el respectivo propietario o la persona autorizada por éste.

### **IX.—De las obligaciones de las policías**

Art. 33.—Las Prefecturas de Policía de la República donde haya penitenciarías, presidios y casas de corrección para mujeres, llevarán un Libro de Vidas para reos en libertad condicional. En este Libro dejarán constancia de lo siguiente relacionado con estos reos:

1.º—De las notas en conducta y en aplicación que hayan obtenido en la escuela y donde trabajen, según los certificados que deben presentar semanalmente al oficial de guardia de acuerdo con lo que dispone el número 3.º del art. 31 de este Reglamento;

2.º—De las inasistencias a la escuela y al trabajo, atrasos y salidas anticipadas que no se justifiquen;

3.º—De las infracciones a este Reglamento, y

4.º—De las demás observaciones que estimen conveniente.

Con estos antecedentes, el Prefecto de Policía clasificará mensualmente a los expresados reos con las notas Bueno, Regular o Malo y dará cuenta de ello al Tribunal de Conducta que corresponda. Para clasificar a un reo con las notas Regular o Malo deberá indicar los fundamentos que ha tenido. Junto con las notas se enviarán los certificados semanales traídos por los reos.

Cuando se trate de una falta o delito que merezca la revocación de la libertad condicional, el Prefecto de Policía o la autoridad judicial que corresponda, informará inmediatamente al Tribunal de Conducta respectivo.

### **X.—De la revocación de la libertad condicional**

Art. 34.—La Libertad condicional de un reo sólo podrá ser revocada por medio de un decreto supremo, a petición del Tribunal de Conducta respectivo, en los siguientes casos:



1.º—Haber sido condenado por ebriedad o por cualquier delito;

2.º—Haberse ausentado sin autorización del lugar que se le haya fijado como residencia;

3.º—No haberse presentado, sin causa justificada, durante dos semanas consecutivas a la Prefectura de Policía que le corresponda;

4.º—Haber faltado tres días en un mes a la escuela donde asiste o a la ocupación que tenga, a no ser que justifique sus inasistencias en la forma ordenada en este Reglamento; y

5.º—Haber enterado tres notas de mala conducta en la escuela o donde trabaje, calificadas por la Policía y el Tribunal de Conducta respectivos.

Art. 35.—El Tribunal de Conducta queda autorizado para investigar las faltas de los libertos denunciadas por la Policía o por otros conductos, a fin de que pueda apreciar las causas atenuantes que hubiere. Según el resultado de sus investigaciones, les anotará en el Libro de Vidas para reos en libertad condicional la nota que les corresponda y tomará o nó las medidas señaladas en este Reglamento.

Art. 36.—Cuando se haya revocado la libertad condicional a algún reo, deberá éste cumplir en el establecimiento penal que le corresponda el tiempo que le faltare para terminar su pena, y para tener derecho a salir nuevamente en libertad condicional, deberá cumplir la mitad del tiempo que le corresponda estar de nuevo privado de libertad y reunir los requisitos que se exigen en este Reglamento.

## XI.—Del Indulto

Art. 37.—Cuando un reo en libertad condicional haya cumplido la mitad de esta pena, obteniendo invariablemente las mejores clasificaciones por su conducta, apli-

cación al trabajo y dedicación al estudio, podrá solicitar del Supremo Gobierno, por intermedio del Tribunal de Conducta respectivo, que le indulte la otra mitad.

## **XII.—Sección de Criminología**

Art. 38.—Créase en cada uno de los establecimientos penales a que se refiere el art. 5.º de este Reglamento, una “Sección de Criminología” que será servida, cuando no se designe un personal especial, por, el Médico del respectivo Establecimiento y, donde no lo haya, por el Médico de Ciudad.

Art. 39.—Todo penado, a su ingreso al establecimiento donde debe cumplir su condena, será clasificado por la Sección de Criminología con arreglo a sus antecedentes hereditarios y personales y a los que se relacionen con su condena. Para este efecto se le llevará un prontuario médico-psíquico, según el modelo que elaborará la Sección de Criminología de la Penitenciaría de Santiago.

Art. 40.—Podrán coadyuvar a la labor de las Secciones de Criminología del País, en las épocas que determine la Sección de la Penitenciaría de Santiago, estudiantes del último curso de la Escuela de Medicina designados por el Cuerpo de Profesores de la misma Escuela.

Art. 41.—Cada Sección de Criminología asesorará al jefe del respectivo establecimiento penal en todo lo que se refiera a tratamiento, educación moral e intelectual y trabajo de los penados.

Art. 42.—La Sección de Criminología de la Penitenciaría de Santiago tendrá derecho a ocupar un escribiente que, para los efectos de su remuneración, será contratado como gendarme.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—  
**Arturo Alessandri.—José Maza.**

Santiago, 19 de Marzo de 1925.—

N.º 689.—Hoy se decretó lo que sigue:

Teniendo presente:

Que el decreto-ley N.º 321 de 10 del mes en curso, establece la libertad condicional, entre otras razones, como un medio de premiar el buen comportamiento de los reclusos en los establecimientos penales; y

Que la gracia del indulto, que se otorga con el mismo objeto, debe restringirse a fin de que pueda surtir sus efectos el Decreto-Ley indicado y se consiga con ello la regeneración de los reos, lo que no se obtiene con el indulto,

#### **DECRETO:**

Las solicitudes de indulto, antes de elevarse al conocimiento de la autoridad llamada a concederlos, deberán ser calificadas por el Ministerio de Justicia.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.

Por la Junta de Gobierno.—**Bello C.—José Maza.**



## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PRO- YECTO DE DECRETO-LEY SOBRE CAPACIDAD LEGAL DE LA MUJER**

El admirable monumento de nuestra legislación civil exige modificaciones que lo armonicen con las modernas concepciones del derecho.

Nuestro Código Civil, viejo de setenta años, ha conservado incapacidades o prohibiciones que sólo deben tener el valor de un recuerdo histórico: el de los tiempos lejanos en que era preciso defender a los débiles en singular combate o atestiguar en torneos y juicios de Dios el acto en que se había intervenido como testigo.

La igualdad legal de los sexos exige, correlativamente a iguales deberes, los mismos derechos para los cuales es indispensable acordar igual capacidad jurídica.

Se ha dicho que el siglo actual es el siglo de la mujer, y ha venido ella conquistando paso a paso sus derechos hasta el extremo de haberlos nivelado ya, en muchos países, con los que eran privilegio del hombre.

Las legislaciones de los países latinos y, especialmente, las de los hispanos y lusitano-americanos, marcan un retardo lamentable en estas materias. Y este no es timbre de honor para las Repúblicas de la América.

Las incapacidades que las legislaciones americanas mantienen para la mujer, no tienen su fundamento en los preceptos estatuidos por las Constituciones respectivas que no hacen diferencia de sexos ni de clases para garantizar los derechos que proclaman.

Desde mucho antes de la Guerra Grande, el reconocimiento de los derechos de la mujer se ha venido abriendo paso en las legislaciones.

Las reformas introducidas hace bastantes años, por el Código Civil alemán en la condición jurídica de la mujer, dentro y fuera del matrimonio, y, más que esto, el avance de las ideas feministas, hace imperiosa la reforma. Y es preciso confesar que la intervención de la mujer en las nuevas esferas que le ha abierto la colectividad humana ha sido beneficiosa para las colectividades.

En la Isla de Mann, pequeño promontorio del mar de Irlanda, se otorgó en 1880 voto pleno a las mujeres.

Las mujeres de Zelandia, que obtuvieron en 1866 el voto municipal y en 1887 el voto escolar, lograron en 1893 el voto legislativo.

En Australia, el Sur lo concedió en 1885; el Oeste le siguió en 1890; Nueva Gales del Sur, Tasmania y Queensland de 1902 a 1905; el Estado de Victoria se decidió en 1907.

En Canadá las mujeres tienen voto municipal en ciertas provincias.

Durante la guerra, cuando los estados en lucha requerían el sacrificio del hombre como tributo obligado a esa aún no extinguida enfermedad vergonzosa de la humanidad, la mujer supo reemplazarlo digna y esforzadamente en todas sus actividades ordinarias, llegandose de ellas a decir que eran como en épocas primitivas, los guardianes del hogar y los fecundadores de la tierra, mientras los varones habían partido a luchar con las tribus invasoras.

Esta noble actitud de la mujer precipitó la conquista de sus reivindicaciones y con posterioridad a la guerra, numerosos son los países que se las han reconocido.

En 1918 el gobierno popular de Hungría nombró a la señora Rosika Schwimmer, la escritora pacifista, su representante en Suiza.

El art. 109 de la nueva Constitución alemana de 11 de Agosto de 1919, proclama en principio, para los hombres y mujeres, los mismos derechos y deberes cívicos. Ciento quince mujeres lucía en Septiembre de 1919, la representación nacional alemana.

En ese mismo año las mujeres de Austria influían poderosamente en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

En Finlandia y Noruega, en Estonia y Ucrania, las mujeres gozan de los mismos derechos que el hombre.

La Suecia, la Dinamarca, la Islandia, el Reino Unido, han hecho a su turno concesiones importantes.

En Italia, la mujer tiene voto municipal y el 5 de Septiembre de 1919, por 164 contra 55, la Cámara acordó a las mujeres el derecho al voto político y a la elegibilidad.

Finalmente, antes de que deje de referirme a Europa, oportuno es recordar que también a los puestos de Ministro de Estado han llegado últimamente, con especial lucimiento, las mujeres demostrando capacidad poco común y amplitud de miras envidiable.

En Norte América, los estados de Wyoming, Utah, Colorado, Idaho, Washington, California, Tennessee, han otorgado la igualdad completa. Otros veintiseis estados han concedido ciertos privilegios. En Noviembre de 1917, el estado de Nueva York ha conferido el sufragio integral a las mujeres para todas las elecciones.



Nuestro país fué el primero del hemisferio Sur que, después de reconocer la libertad de vientre, dió libertad a los esclavos. Fué asimismo el primero de los latino-americanos que abrió la era de la emancipación femenina, al permitir que las mujeres pudieran incorporarse a la Universidad por medio del decreto que en 1877 firmó don Miguel Luis Amunátegui.

A propuesta de la delegación de Chile, de pie y en sesión plenaria, la Quinta Conferencia Panamericana, celebrada en Santiago el año 1923, aprobó el voto de ver concedida a la mujer igual capacidad legal que al hombre.

El 11 de Septiembre de 1923 cúpome la honra de presentar a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley en el cual se reconocían a la mujer los derechos a la patria potestad, la capacidad para servir de testigo en actos y contratos y la separada administración, dentro del matrimonio, de sus bienes personales o del producto de su trabajo individual.

Algo, aunque muy poco, se ha avanzado en nuestra legislación positiva. El art. 14 de la Ley de Empleados Particulares, declara que la mujer tiene la libre administración de sus emolumentos, aunque no esté divorciada ni separada de bienes, y el art. 18 da a la madre el derecho, a falta de representante legal, para otorgar el permiso necesario a fin de que los menores de 18 años puedan contratar sus servicios, declarándose, en el art. 19, que a los menores de 14 años que no hayan cumplido la obligación escolar, no puede admitírseles en ninguna clase de trabajo.

Poco o nada más puede decirse de los demás países americanos. El retraso de nuestra legislación en materia de esta índole es manifiesto.

La patria potestad sobre los hijos no emancipados debe ser concedida como derecho inalienable a la madre viuda.

En los viejos regímenes autocráticos se permitía a la mujer llegar hasta el trono para gobernar despóticamente a los súbditos. En las amplias democracias de la América se priva a la mujer del derecho elemental de patria potestad sobre los hijos que amamanta y cría.

Bien merece alcanzar esta conquista la mujer chilena cuya alta cultura es timbre de orgullo, cuya influencia benéfica alcanza a todos los órdenes de la vida y cuya figuración encontramos siempre creciente y bienhechora desde los albores de la independencia hasta nuestros días.

Consecuente con estas ideas, propongo a la consideración de la Excm. Junta de Gobierno un proyecto de Decreto-Ley que contiene el programa mínimo sobre los derechos femeninos y que se refiere a puntos que no pueden ser repudiados por ninguna creencia ni partido, pues tienden a mejorar la situación legal de la mujer en materias tan elementales como las que se relacionan con el ejercicio de la patria potestad, la capacidad para servir de testigo en actos y contratos y la separada administración, dentro del matrimonio, de sus bienes personales o del producto de su trabajo individual.

La Junta de Gobierno, próxima a entregar el mando supremo de la Nación, al Presidente Constitucional de Chile, no puede rendir mejor homenaje a la República, que éste de otorgar a la mujer chilena los medios que la habiliten como persona capaz dentro de la vida del derecho.

En atención a las consideraciones expuestas, someto a la aprobación de la Excm. Junta de Gobierno y de su Consejo de Secretarios de Estado, el proyecto de Decreto-Ley adjunto, sobre capacidad legal de la mujer.

Santiago, 10 de Marzo de mil novecientos veinticinco.—(Firmado).—**José Maza.**

### **Decreto-Ley N.º 328**

(Capacidad legal de la mujer)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 16 de Marzo de 1925) y ordenada su publicación por segunda vez el 29 de Abril, por decreto N.º 1018 de 25 de Abril de 1925).

Núm. 328.—Santiago, 12 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

#### **DECRETO-LEY:**

Artículo 1.º—Modifícanse las disposiciones vigentes sobre la capacidad legal de la mujer, en conformidad a las reglas que establece el presente Decreto-Ley.

Art. 2.º—La patria potestad corresponde a la madre, en las mismas condiciones que al padre, cuando éste muriere natural, civil o presuntivamente; cuando fuere puesto en interdicción y cuando se decretare la emancipación judicial, respecto del mismo, de acuerdo con el art. 267 del Código Civil.

La condena por delito que merezca pena afflictiva es inhabilidad moral.

Art. 3.º—La madre pierde la patria potestad en los mismos casos que el padre y además al contraer nuevo matrimonio.

Art. 4.º—La mujer divorciada por culpa del marido, tiene la patria potestad sobre los hijos que estén a su cargo, según las reglas generales.

Art. 5.º—La mujer puede en las mismas condiciones que el hombre ser tutora o curadora; pero la mujer casada y no divorciada perpetuamente, necesita el consentimiento del marido o de la justicia en subsidio para ejercer estos cargos.



Queda vigente la prohibición del art. 450 del Código Civil, relativa a la curatela del marido disipador.

Art. 6.º—La curaduría de la mujer disipadora o incapaz se deferirá en primer lugar al marido, en conformidad a las reglas generales.

Art. 7.º—Puede, asimismo, la mujer, en iguales condiciones que el hombre servir de testigo en cualquier acto o contrato.

Art. 8.º—En las capitulaciones matrimoniales pueden los esposos acordar la separación total de bienes.

Se aplicará en tales casos lo preceptuado en el párrafo 3.º del título VI del libro I del Código Civil.

Art. 9.º—Se considera a la mujer separada de bienes para la administración de aquéllos que sean fruto de su trabajo profesional o industrial.

Art. 10.—Cuando los cónyuges que administren bienes separadamente colaboren en alguna industria o comercio, se establece entre ellos con relación a esa industria o comercio, una sociedad colectiva en que el marido es el socio administrador y en que las utilidades o cargas se dividen en conformidad a las reglas generales.

Art. 11.—En el régimen de separación de bienes, la mujer casada puede dedicarse libremente al ejercicio de cualquier oficio, empleo, profesión, industria o comercio, a menos que el juez, en juicio sumario, y a petición del marido, se lo prohíba.

Art. 12.—La mujer puede estar en juicio en causas concernientes a su administración separada.

Art. 13.—El presente Decreto-Ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el “**Diario Oficial**”.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—  
**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY QUE MODIFICA UN ARTÍCULO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SOBRE MÉRITO EJECUTIVO DE LA LETRA DE CAMBIO

Desde hace algunos años, los Tribunales de la República vienen negando el mérito ejecutivo de las letras de cambio que no se protestan con la concurrencia personal del aceptante; y esta especial interpretación del N.º 4 del art. 456 (455) del Código de Procedimiento Civil, ha causado serios y graves perjuicios al comercio.

Ha restringido, en primer lugar, el giro de las letras de cambio cuyo empleo resulta peligroso ante la jurisprudencia preindicada, en atención a que la letra de cambio, como es sabido, produce la novación de la anterior obligación.

Ha favorecido, en seguida, a los comerciantes inescrupulosos quienes necesitan sólo ocultarse al momento del protesto para privar de acción ejecutiva a sus acreedores y eludir de este modo las consecuencias legales de la cesación de pagos.

Ha equiparado, por último, a la letra legalmente protestada con la letra perjudicada por falta de dicho protesto, ya que, en el hecho, lo mismo da protestar una letra en ausencia del aceptante que no protestarla.

Con todo lo cual, la letra de cambio ha perdido en gran parte el valor de instrumento de crédito que ha tenido desde su origen y ha continuado teniendo en

todos los países cultos, como lo ha reconocido y consagrado el Convenio Internacional sobre letras de cambio de La Haya en que se hizo representar nuestro Gobierno.

Y todo lo dicho sobre la letra de cambio puede hoy día aplicarse al cheque, no obstante que la Ley N.º 3845 cuidó de darle mérito ejecutivo y llegó hasta declarar de responsabilidad del librador el cheque falsificado si era de la serie usada por este último y la firma no aparecía notoriamente disconforme.

Pues bien, no obstante estas disposiciones, una jurisprudencia reciente, ha rehusado reconocer el mérito ejecutivo de un cheque debidamente protestado, porque su librador le había puesto tacha de falsedad.

Aún cuando no existieran las disposiciones de los arts. 728 y 729 del Código de Comercio, 33 y 34 de la Ley N.º 3845 que reglamentan los protestos de las letras de cambio y de los cheques, nunca sería aceptable que la legislación o la jurisprudencia se basaran en casos de excepción, como es el temor de que dichos documentos puedan ser falsificados.

La falsificación es una excepción que puede oponerse dentro del respectivo juicio; es un delito severamente castigado por el Código Penal y es, por último, un hecho de facilísima comprobación, desde que, en el estado actual de los conocimientos caligráficos, los peritos están en condiciones de dictaminar con absoluta certeza si una firma es o no es de determinada persona.

Es base esencial del comercio la buena fe y la honestidad. Impropio es, por consiguiente, que en la misma ley puedan encontrar acogida interpretaciones judiciales que priven a los más importantes instrumentos mercantiles de la seguridad y respeto que deben llevar en sí.

Por estos motivos, se hace necesario reafirmar el principio de que son títulos ejecutivos toda letra de

cambio y todo cheque debidamente protestado en conformidad a las leyes precitadas; y a este fin tiende la reforma de la ley procesal que os propongo en el adjunto proyecto de Decreto-Ley.

Santiago, 14 de Marzo de 1925.—(Fdo.)—**José Maza.**

### **Decreto-Ley N.º 344**

(Reforma sobre mérito ejecutivo de la letra de cambio)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 17 de Marzo de 1925)

Núm. 344.—Santiago, 16 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

#### **DECRETO-LEY:**

Artículo único.—Reemplázase el número 4.º del art. 456 (455) del Código de Procedimiento Civil, por el siguiente:

“4.º—Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio, protestada con las formalidades legales, o del librador o endosante de un cheque debidamente protestado y siempre que el protesto se oponga en su conocimiento y la acción se entable dentro de los plazos señalados por la Ley”.

El presente Decreto-Ley regirá desde su publicación en el “**Diario Oficial**”.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**



## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PRO- YECTO DE DECRETO-LEY QUE SUPRIME UNA PLAZA DE RELATOR DE LA CORTE DE APELA- CIONES DE TALCA Y LA AGREGA A LA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN**

La Ley N.º 4009, de 9 de Mayo de 1924, entre otras disposiciones relativas al servicio judicial, creó una tercera plaza de Relator para la Corte de Apelaciones de Talca.

Las razones que tuvo en cuenta el legislador al adoptar esta resolución, no se han visto confirmadas en la práctica, pues para atender en condiciones regulares el trabajo del Tribunal, es suficiente el número de dos Relatores. Apreciándolo así la Corte de Apelaciones respectiva en acuerdo extraordinario resolvió representar al Gobierno la conveniencia de no proveer la nueva plaza y la Corte Suprema al transcribirlo, hizo suyo el acuerdo referido expresando que la supresión propuesta en nada entorpecería la expedita administración de justicia.

En cambio los datos estadísticos allegados sobre el creciente movimiento de causas en la Corte de Apelaciones de Concepción, ponen de manifiesto la omisión en que se incurrió al no aumentar en la ley aludida el número de Relatores que prestan sus servicios cerca de ese Tribunal, pues la dotación actual aparece del todo

insuficiente para sus necesidades efectivas. Ya por oficio N.º 201 de 9 de Diciembre de 1918, la Corte de Apelaciones de Concepción hacía presente la manifiesta conveniencia de establecer una tercera plaza de Relator y por nota N.º 147 de Mayo último, reiteraba dicha petición. Por otra parte, la Corte Suprema, requerida para informar al respecto, ha expresado su conformidad con la medida propuesta.

En presencia de esta doble situación y atento a la necesidad de facilitar en lo posible la correcta y expedita administración de justicia, estima el infrascrito que podría suprimirse en la Corte de Apelaciones de Talca la tercera plaza de Relator fijada por Ley N.º 4009 de 9 de Mayo último y agregarla a la Corte de Apelaciones de Concepción.

Como el Presupuesto de Justicia en vigencia consulta la tercera plaza de Relator de la Corte de Apelaciones de Talca, que no ha sido proveída, su anexión a la Corte de Apelaciones de Concepción, no significaría un mayor gasto de ninguna especie.

Con el mérito de las consideraciones expuestas, someto a la consideración de la Junta de Gobierno, y de su Consejo de Secretarios de Estado, el siguiente proyecto de Decreto-Ley.

Santiago, Marzo de mil novecientos veinticinco.—  
(Fdo.)—**José Maza.**

### **Decreto-Ley N.º 361**

(Suprime en la Corte de Apelaciones de Talca la tercera plaza de relator y la agrega a la de Concepción)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 23 de Marzo de 1925)

Núm. 361.—Santiago, 17 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente.

#### **DECRETO-LEY:**

Artículo único.—Suprímese en la Corte de Apelaciones de Talca, la tercera plaza de Relator creada para el servicio de dicho tribunal por el art. 5.º de la ley N.º 4,009, de 9 de Mayo último y agrégase a la Corte de Apelaciones de Concepción.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—

**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DE MENOR CUANTÍA

El Gobierno designó por decreto supremo N.º 1832, de 10 de Octubre de 1924, una comisión especial encargada de presentar un proyecto de **Ley Orgánica de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía**.

La expresada comisión presentó su informe y el proyecto del caso con fecha 26 de Noviembre del mismo año.

El infrascrito, posesionado de la imprescindible necesidad que existe de legislar sobre la materia a que se refería el citado decreto supremo, ha estudiado con especial interés el proyecto elaborado por tan competente comisión.

Después de su estudio detenido y con ligeras modificaciones que la Comisión ha aceptado y que han sido consultadas en el texto mismo del proyecto que someto a vuestra consideración, creo del caso pedirlos que lo aprobéis sin tardanza por medio del Decreto-Ley adjunto.

Santiago, 17 de Marzo de 1925.—(Fdo.)—**José Ma-za.**



**Decreto-Ley N.º 363**

(Aprueba el proyecto de Ley Orgánica de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía)

(Publicado en el 'Diario Oficial' de 21 y 23 de Marzo de 1925 y ordenada su publicación por segunda vez el 2 de Julio, por decreto N.º 1636 de 27 de Junio de 1925).

Núm. 363.—Santiago, 17 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con su Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

**DECRETO-LEY:**

Artículo único.—Apruébase el adjunto proyecto de ley orgánica de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía, confeccionado por la Comisión especial designada por decreto supremo número 1,833, de 10 de Octubre de 1924, que regirá desde la fecha que el mismo proyecto indica en su título final.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Emilio Bello C.**—**C. A. Ward.**—**Pedro P. Dartnell E.**—**José Maza.**

**COPIA DEL INFORME DE LA COMISIÓN NOM-  
BRADA POR EL GOBIERNO PARA EL ESTUDIO  
DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LOS  
JUZGADOS DE LETRAS DE MENOR CUANTÍA**

Santiago, 26 de Noviembre de 1924.

Para cumplir la comisión de formular un Proyecto Orgánico de la Justicia de Menor Cuantía, que, por el decreto supremo N.º 1832, de 10 de Octubre último, se sirvió US. encomendarnos, hemos celebrado treinta y ocho sesiones que se iniciaron con el estudio de las ideas contenidas en el proyecto presentado en 1898 a la Honorable Cámara de Diputados por el señor don Eliodoro Yáñez y en los que formularon la Comisión Reorganizadora de los Servicios Públicos y la que presidió el señor Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Moisés Lazo de la Vega, miembro también de la comisión informante.

No pocas de esas ideas, y especialmente de las del señor Yáñez, encontrará US. en el proyecto que presentamos.

La Comisión ha estimado que lo que el país reclama como la satisfacción de una necesidad imperiosa y lo que el Gobierno desea, es la creación de Tribunales serios, que administren la justicia de los pobres en la misma forma que se distribuye la de los ricos, y, partiendo de este principio fundamental, ha establecido en su Proyecto que sean abogados los que tengan a su cargo esta misión, y desechado, en consecuencia, por la unanimidad de sus miembros, la idea tan antigua

como errónea de confiar el servicio judicial de menor cuantía a los Oficiales del Registro Civil.

Por ser obvio, no será necesario demostrar que estos funcionarios, como los actuales jueces de subdelegación y de distrito, carecen en su inmensa mayoría de los conocimientos especiales que han menester las personas que se dedican al estudio y aplicación del derecho.

Pero como entre los Oficiales del Registro Civil pueden contarse abogados y algunas personas que, sin poseer este título, se hallen en situación de desempeñar las funciones de juez, el Proyecto autoriza para que se llame a unos y otros al servicio judicial, exigiendo respecto de los últimos un examen previo de competencia.

Para que la justicia de menor cuantía desempeñada por abogados retribuidos no cause gastos considerables, que el erario público no se hallaría en situación de soportar, el Proyecto dispone la implantación paulatina del servicio, y consigna preceptos según los cuales no habrá temor alguno de egresos apreciables.

Así, a los Juzgados de Letras de los departamentos de Tocopilla, Combarbalá, Casablanca, La Ligua, Putaendo, Petorca, Vichuquén, Chanco, Puchacai, Cañete, Collipulli, Río Bueno y Quinchao, en que el movimiento judicial es muy escaso, se les encarga gratuitamente la administración de justicia de menor cuantía en las ciudades cabeceras de dichos departamentos; y en la parte urbana de Santiago y Valparaíso se crean Juzgados que además de costearse holgadamente, producirán superávit.

Todos los que de cerca conocen el movimiento que existe en los Juzgados de Letras en lo Civil y en lo Criminal de Santiago y Valparaíso, saben que sobre los jueces que los desempeñan pesa una carga abrumadora que reclama la creación de diez y seis Juzgados más, a lo menos; y la adopción de esta medida,

que es una amenaza seria para las arcas fiscales, se hará por muchos años innecesaria con la implantación del nuevo servicio judicial de menor cuantía.

El territorio jurisdiccional de cada Juzgado de Letras de Menor Cuantía podrá ser, según el proyecto, el que corresponda a los límites de la Comuna o de la Circunscripción del Registro Civil; pero si las necesidades de la administración de justicia exigen que se fije un territorio más extenso o más pequeño que el de aquéllas, éste será el que deba señalarse. Así, por ejemplo, podrá el Presidente de la República crear un Juzgado de esta clase para el servicio exclusivo de la población del Mineral de El Teniente o del de Chuquicamata, sin perjuicio de que a su vez esté habilitado para ensanchar el territorio jurisdiccional de estos Juzgados cuando se informe de que, por una u otra causa, ha disminuído considerablemente la población en esos centros obreros.

Para el nombramiento de los jueces de letras de menor cuantía consigna el Proyecto disposiciones que garantizan la selección del personal, como que ellos serán designados por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Corte Suprema y previa lista de siete personas formada por la Corte de Apelaciones respectiva.

Teniendo presente el valor actual de la moneda y en consideración a la circunstancia de que será letrado el personal que tendrá a su cargo el nuevo servicio, el Proyecto da competencia a los jueces de letras de menor cuantía para fallar en única instancia hasta quinientos pesos y en primera instancia hasta cinco mil pesos; y los habilita, además, para conocer en diversas cuestiones que están actualmente sometidas a los jueces de letras.

En materia criminal conocerán de las faltas y de algunos simples delitos.

La competencia, así señalada a los jueces de letras



de menor cuantía, traerá la ventaja de descongestionar a los Juzgados de Letras haciendo de este modo innecesaria la creación de otros; máxime, si se toma en cuenta que las infracciones penadas por la ley de alcoholes—que son por su naturaleza de orden administrativo—pasan a ser del conocimiento de otras autoridades.

El Proyecto deja subsistentes los Juzgados de Matederos, y donde mientras no se establezcan de menor cuantía, los de subdelegación y de distrito.

Desaparecen los jueces especiales de apelaciones y de comercio de Santiago y de Valparaíso, pasando los que sirven estos cargos, con su personal, a ejercer la jurisdicción de jueces de letras en lo criminal.

Relativamente a las atribuciones, deberes y responsabilidades de los jueces de letras de menor cuantía, consigna el Proyecto numerosas disposiciones, armónicas todas ellas con los preceptos generales que rigen la organización del servicio judicial.

Penetrada la comisión de que muchos de los abusos que hoy se cometen tiene origen en las reglas que gobiernan el procedimiento a que están sometidos los juicios, se ha esmerado en consignar en el Proyecto disposiciones destinadas a simplificar la tramitación y a poner trabas a la mala fe de los litigantes.

Tal es, señor Secretario, en líneas generales, el Proyecto que la Comisión presenta a US., segura de que, aprobándolo, hará el Gobierno una obra de justicia y de paz social.

Dios gue. a US.

(Firmados).—Ricardo Anguita.—Moisés Lazo de la Vega.—Ramón Fernández B.—Alfredo Rondanelli F.—Julio Cordovez.—Jorge Gaete R.—Fco. de Amesti.

# LEY ORGANICA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DE MENOR CUANTÍA

## TÍTULO I

### De los jueces de letras de menor cuantía

Artículo 1.º—Créanse en las ciudades de Valparaíso de Santiago, respectivamente, seis y diez Juzgados de letras de menor cuantía, que conocerán de los negocios que les encomienda la presente ley.

Art. 2.º—El territorio jurisdiccional de cada uno de estos Juzgados se fijará por el Presidente de la República, previo informe de las respectivas Cortes de Apelaciones. Al efecto, estos Tribunales podrán consultar la opinión de los jueces de departamento, de los prefectos de policía y de otras autoridades.

Podrá también el Presidente de la República, a instancia de las mismas Cortes, modificar los límites de la jurisdicción territorial de los Juzgados de letras de menor cuantía.

El decreto que fije o que modifique los límites del territorio jurisdiccional señalará, además, un lugar fijo y conocido que sirva de asiento al Tribunal, dentro de dicho territorio.

Art. 3.º—Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará a los Juzgados de letras de menor cuantía que se establezcan en conformidad al artículo siguiente.

Art. 4.º—Podrá el Presidente de la República, a medida que los recursos fiscales lo permitan, crear uno o más Juzgados de letras de menor cuantía en las ciudades o centros de población que, por el número de sus habitantes, las dificultades de comunicación y el movimiento de las causas civiles y criminales, hagan necesario encomendar a funcionarios especiales la administración de justicia en lo relativo a los negocios a que se refiere la presente ley.

Estos Juzgados se crearán, preferentemente, en los centros industriales o mineros y demás poblaciones obreras que se encuentren fuera de las ciudades cabeceras de provincias o de departamentos.

Art. 5.º—Creado un Juzgado de letras de menor cuantía, no podrá ser suprimido sino por medio de una Ley.

Art. 6.º—Para ser juez de letras de menor cuantía se requiere ciudadanía natural o legal y tener el título de abogado.

El nombramiento se hará por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema, y previas las siguientes formalidades:

Los que se interesen en ocupar estos cargos, deberán presentar a la Corte de Apelaciones respectiva, una solicitud acompañada de los antecedentes que la abonen.

Transcurridos quince días desde la fecha señalada para concurrir a la oposición, el Tribunal, previo estudio de los antecedentes, formará una lista de siete personas elegidas entre las que conceptúe más dignas, y la remitirá a la Corte Suprema para los efectos prevenidos en el inciso segundo de este artículo.

Art. 7.º—Son aplicables a los jueces de letras de menor cuantía las disposiciones de los artículos 101 (110) y 102 (111) de la Constitución Política del Estado.

Les son igualmente aplicables las incapacidades e inhabilidades establecidas para los jueces de letras en

el art. 41 de la Ley orgánica de Tribunales, y las disposiciones de los artículos 42, 45 y 51, número 3.º de la misma Ley. En lo relativo a su amovilidad, se observará lo dispuesto en la ley número 2,445, de 14 de Enero de 1911.

Art. 8.º—Las funciones de juez de letras de menor cuantía son incompatibles con el ejercicio de la profesión de abogado ante los tribunales que establece la presente ley, y con todo otro cargo judicial y empleo o función pública o municipal retribuidos.

Son también incompatibles con el ejercicio de toda representación de origen popular.

Art. 9.º—Los jueces de letras de menor cuantía prestarán el juramento prevenido por el art. 153 de la Constitución Política del Estado, ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, o ante las autoridades que ordene el Presidente de la República, en cuyo caso se observará lo dispuesto en el art. 142 de la ley orgánica de Tribunales.

Art. 10.—A las disposiciones que reglan la responsabilidad civil y criminal de los jueces letrados en el ejercicio de sus cargos, y a las que determinan la competencia de los tribunales llamados a conocer en tales asuntos, quedan igualmente sometidos los jueces de letras de menor cuantía.

De los recursos de queja que contra ellos se interpusieren por faltas o abusos en el ejercicio de sus funciones, conocerá la Corte de Apelaciones respectiva.

Art. 11.—En el desempeño de sus funciones, los jueces de letras de menor cuantía dependerán inmediatamente de la Corte de Apelaciones respectiva, en la forma establecida en los artículos 77 al 81 inclusive de la ley orgánica de Tribunales.

Art. 12.—Los jueces de letras de menor cuantía residirán dentro de los límites urbanos de la ciudad en que tengan el asiento de sus funciones; o dentro de su



territorio jurisdiccional, si las ejercieren en otros centros de población.

Deberán concurrir, en los días hábiles, por lo menos durante dos horas consecutivas a su despacho, y no les será aplicable la parte final del inciso segundo del art. 149 de la ley orgánica de Tribunales.

Art. 13.—Los jueces de letras de menor cuantía están autorizados para reprimir y castigar los abusos que se cometieren dentro de la sala de su despacho y mientras ejercen sus funciones, con alguno de los medios siguientes:

- 1.º—Amonestación verbal e inmediata;
- 2.º—Multa que no exceda de veinte pesos; y
- 3.º—Arresto que no exceda de cuarenta y ocho horas.

No podrán usar de ninguno de los dos últimos medios, sino después de una amonestación que hubiere sido ineficaz.

Están igualmente facultados para reprimir y castigar las faltas de respeto que se cometieren en los escritos que se les presenten, usando de alguno de los medios señalados en los números 1.º, 2.º y 3.º del art. 44 de la ley orgánica de Tribunales.

Art. 14.—Si dentro de la sala del despacho del juez de letras de menor cuantía, y mientras ejerce sus funciones, se cometiere algún hecho calificado de delito por el Código Penal y cuyo conocimiento no le corresponda, hará el juez aprehender al reo o reos y los remitirá al Tribunal competente.

## TÍTULO II

**De la subrogación de los jueces de letras de menor cuantía, de las contiendas de competencia y de sus implicancias y recusaciones.**

Art. 15.—La subrogación de los jueces de letras de menor cuantía se hará según las reglas siguientes:

1.º—En los lugares en que hubiere más de dos jueces de letras de menor cuantía, la falta de uno será suplida por el que tenga el asiento de sus funciones en el local más inmediato; y en defecto de éste, por el que le siga en el orden de proximidad.

2.º—Si en un mismo lugar hubiere dos jueces letrados de menor cuantía, la falta de uno será suplida por el otro; y en defecto de éste, por el juez de letras de turno del departamento.

3.º—En los lugares en que hubiere un solo juez letrado de menor cuantía, le subrogará el juez de letras de turno del departamento; y en defecto de éste, el funcionario a quien corresponda la subrogación de dicho juez de letras de turno.

4.º—En la misma forma se hará la subrogación de los jueces de letras de menor cuantía que ejerzan funciones en los centros industriales o mineros, o en poblaciones obreras que se encuentren fuera de la capital del departamento.

Art. 16.—Requerido un juez de letras de menor cuantía para que se inhiba del conocimiento de un negocio en que otro Tribunal le discute su competencia, oír a la parte que ante él litiga y procederá conforme a lo dispuesto en el art. 108 del Código de Procedimiento Civil.

Si considerare inadmisibile la petición del requirente, lo pondrá en conocimiento de éste y remitirá los antecedentes al Tribunal a quien corresponda resolver la contienda, sin esperar la resolución de aceptación o de insistencia a que se refieren los artículos 110 y 111 del Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal requirente hará análoga remisión tan pronto como reciba del requerido la comunicación de que se habla en el inciso anterior, y no se pronunciará sobre si insiste o no en su competencia.

Si el Tribunal requirente fuere un juez de letras de menor cuantía, se observará el mismo procedimiento.

Art. 17.—Son aplicables a los jueces de letras de menor cuantía las disposiciones sobre implicancias y recusaciones relativas a los jueces de letras de departamento.

### TÍTULO III

#### De la competencia

#### PÁRRAFO I

##### De la competencia en materia civil

Art. 18.—Sin perjuicio del fuero establecido en los artículos 37, inciso sexto del número primero, y 67, número tercero, de la Ley Orgánica de Tribunales, los jueces de letras de menor cuantía conocerán:

1.º—En única instancia, de las causas civiles y de comercio cuyo valor no exceda de quinientos pesos.

2.º—En primera instancia, de las causas civiles y de comercio cuyo valor exceda de quinientos pesos, y no

sea superior a cinco mil. No obstante, la competencia de los Juzgados que se creen en conformidad al artículo 4.º se limitará en la primera instancia a los asuntos cuyo valor no exceda de un mil pesos.

Sin embargo, no conocerán de los juicios sobre alimentos futuros ni sobre censos, ni de los de hacienda, de quiebra o concurso, cualquiera que sea el valor de derecho controvertido.

3.º—No obstante lo dispuesto en los dos números anteriores, en los juicios especiales del contrato de arrendamiento los jueces letrados de menor cuantía conocerán en única instancia hasta la suma de cien pesos, y en primera instancia hasta la suma de mil pesos.

El valor de lo disputado se determinará en los juicios de desahucio o de restitución de la cosa arrendada por el monto de la renta o del salario convenido para cada período de pago; y en los de reconvenções, por el monto de las rentas insolutas.

Art. 19.—Sin perjuicio del fuero a que se alude en el artículo precedente, los Tribunales que establece el artículo 1.º de esta ley, conocerán, además, de las siguientes materias:

1.º—De las cuestiones que se susciten sobre el ejercicio de servidumbres naturales y legales y de las prestaciones a que ellas dieren lugar, siempre que el valor de estas últimas no exceda de cinco mil pesos.

Pero si se promoviere contienda sobre el dominio del predio dominante o sirviente, o sobre la adquisición por prescripción u otro título de una manera especial de ejercer la servidumbre, se inhibirán de todo conocimiento.

La ubicación del predio sirviente determinará el Tribunal que deba conocer de estos juicios; y si abarcaré dos o más jurisdicciones territoriales, quedará al demandante la elección del juez.

2.º—De las acciones posesorias a que se refieren los



artículos 928, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944 y 945 del Código Civil.

Será competente para conocer de estos juicios el juez del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que se reclama.

3.º—De las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la ley número 2,675, de 28 de Agosto de 1912, sobre protección a la infancia desvalida.

4.º—De las infracciones a la ley de cunas, número 3,186, de 13 de Enero de 1917.

5.º—De los reclamos que se interpusieren contra la imposición de multas por infracciones a la ley de caminos, número 3,611, de 5 de Marzo de 1920.

6.º—De las notificaciones de las actas de protesto de cheques por falta de fondos o por orden de no pagarlos, a las personas domiciliadas en la respectiva jurisdicción.

Si el valor del cheque excediere de cinco mil pesos, podrá pedirse la notificación al juez que habrá de conocer del cobro.

8.º—De los denuncios por accidentes del trabajo y de los juicios por indemnizaciones a que ellos dieren lugar, hasta la suma de cinco mil pesos.

9.º—Hasta la misma suma, de los juicios entre patrones y obreros por el ejercicio de las acciones emanadas del contrato de trabajo individual o colectivo, regido por la ley número 4,053, de 8 de Septiembre de 1924, y de los denuncios y aplicación de multas por infracción de sus disposiciones.

10.—De las acciones provenientes del contrato de seguro obligatorio por enfermedad o invalidez, a que se refiere la ley número 4,054, de 8 de Septiembre de 1924, siempre que sean valorizables hasta en cinco mil pesos, y de los reclamos que se dedujeren contra la imposición de multas por infracción de sus disposiciones.

11.—De los denuncios, regulación y aplicación de multas por infracciones de la ley número 4,057, de 8 de Septiembre de 1924, sobre sindicatos profesional e industrial, y de toda contención civil a que dé origen la aplicación de sus preceptos, siempre que sea valorizable hasta en cinco mil pesos.

12.—De las cuestiones civiles, valorizables hasta en la misma suma, que suscite la aplicación de la ley número 4,058, de 8 de Septiembre de 1924, sobre sociedades cooperativas.

13.—Hasta la misma suma de cinco mil pesos, de los juicios que se promovieren entre patrones y asalariados que no sean obreros, por el ejercicio de las acciones emanadas de los actos o contratos regidos por la ley de empleados particulares, e igualmente de las contravenciones y los actos tendientes a burlar sus disposiciones.

Art. 20.—Los jueces de letras de menor cuantía que tengan el asiento de sus funciones en las capitales de departamento, conocerán, en segunda instancia de las causas civiles de que conocieren en primera los jueces de matadero y de subdelegación del respectivo departamento. Conocerán, igualmente, de los recursos de casación que se interpusieren contra las sentencias de los mismos jueces de matadero y de subdelegación, y de las quejas por faltas o abusos en el ejercicio de sus funciones.

Si en la capital del departamento hubiere dos o más jueces letrados de menor cuantía, la Corte de Apelaciones respectiva establecerá entre ellos un turno semanal, y será competente para el conocimiento de estos recursos el juez que estuviere en el ejercicio del turno a la fecha de su interposición.

Art. 21.—En materia de jurisdicción voluntaria, los jueces letrados de menor cuantía conocerán:

1.º—De las autorizaciones para comparecer en los

juicios que se promovieren ante ellos, y del nombramiento de curadores **ad-litem**.

2.º—Del nombramiento de curador especial que acepte o repudie el reconocimiento de hijo natural o la legitimación de incapaces por matrimonio posterior de los padres, y de las gestiones sobre habilitación de edad.

3.º—De las informaciones sobre estado civil, para solicitar pensiones o montepíos.

4.º—De las demandas de detención del padre contra el hijo, en el caso del artículo 233 del Código Civil.

5.º—De las gestiones sobre facción de inventarios y nombramientos de curadores especiales, en los casos de los artículos 111, 124 y 511 del Código Civil.

6.º—De las autorizaciones para alterar las partidas asentadas en los libros del Registro Civil y para proceder a la inscripción de nacimientos y defunciones, en los casos de los artículos 11 y 29 de la ley de 17 de Julio de 1884.

Art. 22.—Será competente para conocer de los negocios de jurisdicción voluntaria, el juez del domicilio de las personas que en ellos intervengan.

Art. 23.—Los Tribunales que establece esta ley conocerán, además, de las cuestiones judiciales que se relacionen con la ley número 1,123, de 24 de Noviembre de 1898, sobre Casas de Préstamos, modificada por la ley número 3,055 de 17 de Enero de 1916.

## PÁRRAFO II

### De la competencia en materia criminal

Art. 24.—Sin perjuicio del fuero establecido en los artículos 15 y 16 del Código de Procedimiento Penal, los jueces de letras de menor cuantía conocerán en

primera instancia, de las faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de la presente ley; salvo las designadas en el número 4.º del artículo 495 del Código de Procedimiento Penal y aquéllas cuyo conocimiento estuviere expresamente encomendado a los alcaldes o a los jueces de policía local.

Art. 25.—Los jueces letrados de menor cuantía que tengan el asiento de sus funciones en los centros industriales o mineros y demás poblaciones obreras que se encuentren fuera de las ciudades cabeceras de provincia o de departamento, conocerán además, en primera instancia y sin perjuicio del fuero a que se alude en el artículo anterior, de los simples delitos que la ley pena a lo más con presidio, reclusión, relegación o extrañamiento menores en su grado mínimo y multa hasta de mil pesos; salvo los delitos castigados por la ley de elecciones, cualquiera que sea la pena.

Los mismos jueces practicarán las primeras diligencias de instrucción del sumario con respecto a los delitos cometidos dentro del territorio de su jurisdicción y que no sean de su competencia, y aquellas otras que les sometan los jueces letrados de departamento para la investigación de los hechos en procesos criminales, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 del Código de Procedimiento Penal.

Art. 26.—Los jueces de letras de menor cuantía que tengan el asiento de sus funciones en las capitales de departamento, conocerán en segunda instancia de las causas sobre faltas de que hubieren conocido en primera los jueces inferiores del mismo departamento, y de los recursos de casación que se interpusieren en contra de sus sentencias.

Si en la capital del departamento hubiere dos o más jueces de letras de menor cuantía, se observará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la presente ley.



### PÁRRAFO III

#### Disposiciones generales

Art. 27.—Para los efectos de determinar la competencia de los jueces de letras de menor cuantía, se reputarán en todo caso como de valor de más de cinco mil pesos los negocios que versen sobre materias no sujetas a determinada apreciación pecuniaria y de que no se haga mención expresa en los artículos precedentes. Tales, son por ejemplo:

1.º—Las contiendas relativas al estado civil de las personas.

2.º—Las que versen sobre nulidad o validez de disposiciones testamentarias, sobre petición de herencias y las demás relacionadas con la apertura de la sucesión.

3.º—Las relativas a la separación de bienes entre marido y mujer y a la crianza y educación de los hijos.

4.º—Las relativas al nombramiento de tutores o curadores, a su administración, responsabilidad, excusas y remoción.

Art. 28.—Para determinar la cuantía de la cosa disputada en los casos de pluralidad de acciones o de partes en materia civil, se estará a las reglas siguientes:

1.º—El valor total de las prestaciones reclamadas en la demanda representará la cuantía de la cosa disputada, cualquiera que sea el número de las acciones deducidas, en los juicios dirigidos por una sola persona en contra de otra.

2.º—Siendo dos o más los demandantes o los deman-

dados, y una o más las acciones deducidas, la cuantía de la cosa disputada se determinará por la parte o cuota que a cada uno corresponda en las prestaciones divisibles, o por la suma total de las obligaciones solidarias o indivisibles que se reclamaren; y

3.º—Si una cualquiera de las partes o cuotas a que se refiere el número anterior, o la suma total de las obligaciones solidarias o indivisibles comprendidas en la demanda, excediere el límite de la competencia del Tribunal, será éste incompetente para conocer en todo el juicio.

Art. 29.—En caso de reconvencción se observará lo dispuesto en el artículo 305, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, no podrá el demandado deducir reconvencción por más de quinientos pesos en juicio cuya cuantía no exceda esta cantidad; a menos que acepte discutir su derecho en conformidad al procedimiento de la demanda primitiva.

En caso contrario, pedirá la reserva de acciones para un juicio separado. El Tribunal acogerá la reserva en definitiva, y la sentencia no producirá la excepción de cosa juzgada si el nuevo juicio se iniciare dentro de los diez días siguientes al de su notificación.

Art. 30.—En los casos de delitos múltiples o conexos, se observarán las reglas establecidas en los artículos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 9.º del Código de Procedimiento Penal; pero si la pena señalada a alguno de dichos delitos excediere el límite de la competencia del juez de letras de menor cuantía, pasará el proceso al Tribunal a quien corresponda el conocimiento del delito más grave.

Art. 31.—Si en el conocimiento de una causa criminal que sea de la competencia del juez letrado de menor cuantía previniere el juez de letras del departamento, será éste competente para fallarla.

Art. 32.—Si el juez estimare que es incompetente

para conocer de la demanda o gestión en razón de la materia, de la cuantía litigiosa o de su jurisdicción territorial, lo declarará así en una resolución que será apelable en ambos efectos.

Si el demandado dijere de incompetencia, se observará lo dispuesto en los artículos 34, número 5.º y 36 número 2.º, de la presente ley.

Art. 33.—De los recursos de apelación y de casación que procedan contra las resoluciones que establece esta ley, conocerá la respectiva Corte de Apelaciones.

## TÍTULO IV

### Del procedimiento en materia civil

#### PÁRRAFO I

##### De los juicios ordinarios de menor cuantía

Art. 34.—A los juicios cuya cuantía exceda de quinientos pesos y que por su naturaleza no tengan señalado en la ley un procedimiento especial, se aplicará el ordinario de que trata el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones siguientes:

1.º—Se omitirán los escritos de réplica y de dúplica. Si se dedujere reconvencción, se dará traslado de ella al demandante por seis días, y con lo que éste expusiere o en rebeldía suya, se recibirá la causa a prueba.

2.º—El término para contestar la demanda será de ocho días, que se aumentará en conformidad a la tabla de emplazamiento. Con todo, este aumento no podrá exceder de diez días, y no regirá en estos juicios la disposición del inciso segundo del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

3.º—El término de prueba será de quince días y podrá aumentarse extraordinariamente, en conformidad a lo dispuesto en el número anterior. El trámite a que se refiere el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, lo cumplirán las partes dentro de los dos días subsiguientes al de la última notificación del auto de prueba.

4.º—Se omitirán los alegatos de bien probado, y la sentencia se dictará dentro de los quince días subsiguientes al de la última notificación del decreto que ordena citar a las partes para oír las.

5.º—Deducida apelación contra resoluciones que no se refieran a la competencia o a la inhabilidad del Tribunal, ni recaiga en incidentes sobre algún vicio que anule el proceso, el juez tendrá por interpuesto el recurso para después de la sentencia que ponga término al juicio. El apelante deberá reproducirlo dentro de los cinco días subsiguientes al de la notificación de la sentencia, y a virtud de esta reiteración, lo concederá el Tribunal.

Si el agraviado lo pidiere dentro de segundo día, podrá el juez exigir a la parte favorecida con la resolución que rinda fianza de resultas para la ejecución de lo fallado. La fianza la calificará el Tribunal sin ulterior recurso.

En los casos de excepción a que se hace referencia en el inciso primero de este número, como también en los incidentes sobre medidas prejudiciales o precautorias, el recurso se concederá al tiempo de su interposición.

Art. 35.—No será oído el Ministerio Público en los juicios y gestiones ante los tribunales que establece la presente ley.



## PÁRRAFO II

### De los juicios especiales de menor cuantía

Art. 36.—A los juicios cuya cuantía no exceda de quinientos pesos y que por su naturaleza no tengan señalado en la ley un procedimiento especial, se aplicará el de que trata el título XV del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones siguientes:

1.º—Se notificarán en la forma establecida en el artículo 862 del Código de Procedimiento Civil, solamente el acta de la demanda, la sentencia definitiva y las resoluciones que dispongan la comparecencia personal de las partes. Las demás notificaciones se practicarán en secretaría, en la forma que determina el artículo 53 de dicho Código, aunque las partes no hayan fijado domicilio al cual deban dirigírseles las cartas a que se refiere el inciso segundo del artículo 49 del mismo Código.

Cualquier lugar será hábil **para notificar** afuera del recinto de la secretaría, salvo la excepción consignada en la parte final del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

2.º—Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, deberán precisamente promoverse en la audiencia de contestación a la demanda, y su resolución, oída la otra parte si estuviere presente, o en su rebeldía en caso contrario, se reservará para definitiva. Esta disposición se aplicará aún a los incidentes dilatorios de incompetencia del Tribunal y de falta de personería del demandante, como asimismo a los que promueva el demandado reclamando del procedimiento, en **razón de** la cuantía que atribuye al juicio. Pero si aparecieren

manifiestamente admisibles, los acogerá desde luego el Tribunal.

3.º—La confesión judicial de las partes podrá pedirse por una sola vez en el juicio y deberá exigirse en la audiencia de contestación a la demanda. El Tribunal interrogará acto continuo al confesante, si estuviere presente, sobre los hechos que se le pregunten verbalmente o en pliego cerrado; o le señalará un día próximo para que absuelva las preguntas.

Si no compareciere el absolvente a la primera citación, se le darán por absueltas las posiciones, en la forma ordinaria.

4.º—Toda diligencia de prueba que no se pidiere en la audiencia de contestación a la demanda, será desestimada; sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 166 y 866, inciso 1.º del Código de Procedimiento Civil.

5.º—Si el demandante o el demandado no concurriere por sí o por apoderado a la audiencia señalada para la contestación de la demanda, se seguirá el juicio en su rebeldía.

6.º—La prueba la apreciará el juez en la forma ordinaria. Pero podrá, en casos calificados, estimarla conforme a conciencia y según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes durante el juicio, y la buena o mala fe con que hayan litigado en él.

### PÁRRAFO III

#### De los trámites de la apelación

Art. 37.—Puesto el proceso en estado de fallarse, el Tribunal de segunda instancia resolverá sobre la apelación, con el mérito que arrojen los antecedentes y por la cuenta que de ellos le dé el relator.

Si juzgare necesario oír a las partes o a sus abogados, dispondrá que la causa se ponga en tabla y señalará en su resolución los puntos sobre qué versarán los alegatos orales.

Art. 38.—Podrá el apelante o el apelado, en el escrito en que se expresen o se contesten los agravios, o dentro de tercero día de recibidos los autos en secretaría, aumentado en el emplazamiento que corresponda, si no hubiere lugar a aquellos trámites, hacer presente al Tribunal las razones que juzgue necesarias a la acertada resolución del recurso pendiente. En la misma solicitud deberá pedir que se practiquen las diligencias probatorias que no hubiere producido en primera instancia, y a acompañar los documentos que hagan a su derecho.

El Tribunal de alzada se pronunciará sobre las peticiones de prueba en la forma establecida en el artículo 230 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 39.—El presidente del Tribunal distribuirá diariamente entre las distintas salas que lo componen, los negocios llegados en apelación y que estuvieren en estado de resolverse.

Art. 40.—Cuando alguno de los miembros del Tribunal necesitare estudiar con más detenimiento el asunto que va a fallarse, se suspenderá la deliberación y se señalará para volver sobre ella, un plazo que no exceda de quince días, si varios miembros hicieren la petición, y de ocho días cuando la hiciere uno sólo.

El relator certificará en el proceso la fecha en que haya dado cuenta de los antecedentes del recurso al Tribunal, aquélla en que se hubiere producido el acuerdo y la en que el Ministro redactor entregue el proyecto de sentencia.

Art. 41. Se observarán, en lo demás, las disposiciones contenidas en los títulos XVII y XVIII del libro primero y en el título XII del libro segundo del Código de Procedimiento Civil.

Art. 42.—Las disposiciones especiales contenidas en el párrafo II, título XXI del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, se aplicarán a los recursos de casación que procedan contra las sentencias dictadas por los jueces de letras de menor cuantía en los juicios de que hubieren conocido en única instancia.

Las disposiciones especiales contenidas en el párrafo III, título XXI, del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, se aplicarán a los recursos de casación que procedan contra las sentencias dictadas por los jueces de letras de menor cuantía en los juicios de que hubieren conocido en primera instancia.

Art. 43.—Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias dictadas por los jueces de letras de menor cuantía, los resolverá la Corte de Apelaciones con el mérito que arrojen los antecedentes y por la cuenta que de ellos les dé el relator.

Son aplicables a los recursos de casación las disposiciones de los artículos 37, inciso segundo, 39 y 40 de la presente ley.

## TÍTULO V

### Del procedimiento en materia criminal

Art. 44.—En las causas criminales que se promueven ante los jueces letrados de menor cuantía se observarán en primera y segunda instancia las reglas procesales que correspondan en conformidad al Código de Procedimiento Penal.

Art. 45.—Las sentencias definitivas de primera instancia que no fueren revisadas por el respectivo Tribunal de Alzada por la vía de la apelación lo serán por la vía de la consulta cuando impongan pena de más



de un año de presidio, reclusión, relegación, extrañamiento o destierro.

## TÍTULO VI

### De los secretarios y receptores y de los oficiales subalternos

Art. 46.—Habrà un secretario en cada uno de los Juzgados de letras de menor cuantía, que desempeñará, en cuanto le sean aplicables, las funciones que se indican en los artículos 336 y 346 de la ley orgánica de Tribunales.

El nombramiento se hará por el Presidente de la República, a propuesta en terna del juez respectivo.

Para ser secretario se requiere tener más de veintiún años, y saber leer y escribir.

Art. 47.—Antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, el secretario prestará juramento ante el juez respectivo, al tenor de la fórmula expresada en el artículo 322 de la ley orgánica de Tribunales.

A satisfacción del mismo juez rendirá fianza por el monto que fije el Presidente de la República, para responder de las multas, costas e indemnizaciones de perjuicios a que pueda ser condenado en razón de los actos concernientes al ejercicio de su ministerio.

Art. 48.—La subrogación de los secretarios se hará en la forma prevenida por el artículo 45, inciso 5.º de la ley orgánica de Tribunales; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 862 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 49.—La recusación de los secretarios deberá hacerse con expresión de causa, calificada por el juez en única instancia y sin forma de procedimiento.

Art. 50.—Los secretarios llevarán un libro de sentencias civiles para anotar las que se dicten en las contiendas entre partes y en los negocios de jurisdicción voluntaria.

Llevarán otro libro para la anotación de las sentencias dictadas en las causas criminales, y un tercer libro en que se estamparán con la firma del juez las resoluciones que miren al régimen económico y disciplinario del Juzgado.

Estos libros serán costeados con fondos fiscales.

Art. 51.—En cada uno de los Juzgados de letras de menor cuantía habrá el número de receptores que nombre el Presidente de la República a propuesta en terna del juez respectivo.

En los lugares en que hubiere dos o más jueces de letras de menor cuantía los receptores de un Juzgado ejercerán jurisdicción en el territorio de los otros; pero sólo en lo relativo a los negocios que sean del conocimiento del juez ante quien ejercen sus funciones.

Es aplicable a los receptores las disposiciones del artículo 49 de la presente ley.

Art. 52.—Los jueces de letras de menor cuantía podrán proponer al Presidente de la República personas para los puestos de escribientes o auxiliares, cuando el movimiento judicial llegue a hacer necesario el servicio de estos empleados.

Art. 53.—Los secretarios, receptores y empleados subalternos, quedan sometidos a la autoridad disciplinaria inmediata del juez de letras de menor cuantía ante quien ejercen sus funciones, en los términos que expresa el artículo 49, inciso 3.º, de la ley orgánica de Tribunales y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 4.º de la misma disposición.

Para estos efectos el juez deberá visitar, por lo menos cada dos meses, el oficio de su secretario para examinar los archivos, libros y procesos que tenga a su cargo, e informarse del modo cómo desempeñan sus

funciones de los receptores y oficiales subalternos. Se levantará acta de la visita en el libro correspondiente.

## TÍTULO VII

### Del impuesto y otras cargas pecuniarias

Art. 54.—En los juicios y gestiones ante los jueces de letras de menor cuantía, se pagará el impuesto que se determina en los números siguientes:

1.º—Los juicios cuyo valor no exceda de veinte pesos, se tramitarán en papel común. Los juicios de más de veinte pesos y que no excedan de ciento, llevarán adheridas a cada hoja del proceso una estampilla de diez centavos.

2.º—Las actas de demanda y de reconvención en los juicios cuyo valor exceda de cien pesos y no pase de quinientos, se levantarán en papel sellado de un peso. En papel del mismo impuesto se escribirá la sentencia definitiva.

Las demás actuaciones del proceso se tramitarán en papel sellado de cincuenta centavos.

3.º—Las solicitudes de demanda y las de reconvención en los juicios cuya cuantía exceda de quinientos pesos y no pase de dos mil se presentarán en papel sellado de tres pesos. Papel del mismo impuesto se usará en la sentencia definitiva.

Las demás solicitudes y actuaciones del proceso se presentarán y tramitarán en papel sellado de cincuenta centavos, salvo los incidentes, que se pondrán y proveerán en papel sellado de dos pesos.

4.º—Las solicitudes de demanda y de reconvención en los juicios cuya cuantía exceda de dos mil pesos, se presentarán en papel sellado de cinco pesos. El mismo papel se empleará en la sentencia definitiva.

Las demás solicitudes y actuaciones del proceso se presentarán y tramitarán en papel sellado de un peso,

excepción hecha de los incidentes, que se propondrán y proveerán en papel de tres pesos.

5.º—Para los efectos del pago del impuesto se considerarán de valor superior a cien pesos y no superior a quinientos, los juicios especiales del contrato de arrendamiento en que la renta o salario no exceda de cien pesos para cada período de pago.

Para los mismos efectos se considerarán de valor superior a dos mil pesos, los juicios de cuantía indeterminada y los especiales del contrato de arrendamiento en que la renta o salario convenido para cada período de pago exceda de cien pesos.

Si se formulare oposición al desahucio o el arrendatario reclamare el pago o reconocimiento de mejoras en la cosa arrendada, serán presentadas estas peticiones en el mismo tipo de papel en que lo haya sido la demanda respectiva.

6.º—Los negocios de jurisdicción voluntaria se tramitarán en papel sellado de cincuenta centavos.

7.º—El impuesto establecido en este artículo se entiende sin perjuicio del privilegio de pobreza, en los casos en que hubiere lugar, y de otras exoneraciones establecidas por leyes especiales.

Art. 55.—Se considerarán costas comunes en los juicios a que se refiere el artículo anterior, aquellas que lo sean por su naturaleza y, además, el valor del impuesto que se hubiere pagado en las solicitudes de demanda y de reconvencción y en la sentencia definitiva.

Art. 56.—Para determinar el papel sellado que deba usarse en los juicios, el juez en la primera presentación, fijará inapelablemente su cuantía en conformidad a las reglas generales.

Si en el curso del juicio se alterare la cuantía por reconvencción u otra causa, se seguirá usando el papel que corresponda a la nueva cuantía.

Art. 57.—No se recibirá por el secretario solicitud alguna que venga en papel incompetente o que no sea



acompañada de las hojas necesarias para la providencia y demás actuaciones.

Si se presentare una demanda en papel que resulte incompetente en conformidad a la cuantía fijada al juicio, el juez ordenará que previamente se integre su valor, en estampillas que se agregarán e inutilizarán en cada hoja de la solicitud.

Art. 58.—En segunda instancia se pagará, según corresponda, el impuesto establecido en los artículos anteriores y regirán, en lo demás, las disposiciones de la ley sobre impuesto de papel sellado, timbres y estampillas.

Art. 59.—Ejecutoriada una sentencia civil o criminal que imponga el pago de una multa, la persona afectada con ella deberá enterar preferentemente, a beneficio fiscal y a título de costas, un valor equivalente al diez por ciento de la multa que se le hubiere impuesto.

Si se impusiere una pena corporal conmutable en multa, no se llevará a efecto la conmutación sin que se paguen las costas a que se hace referencia en el inciso precedente, y la multa.

## TÍTULO VIII

### De los Oficiales del Registro Civil

Art. 60.—Sin perjuicio de la facultad que le confiere el artículo 4.º de la presente ley, podrá el Presidente de la República, en los lugares que no sean cabeceras de departamento, establecer Juzgados de menor cuantía y nombrar para que los desempeñe al correspondiente oficial del Registro Civil que sea abogado o al que, no siéndolo, sea aprobado en un examen de competencia ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Art. 61.—Los jueces de menor cuantía nombrados en conformidad al artículo anterior, conocerán en úni-

ca instancia de las causas civiles y de comercio hasta la suma de doscientos pesos, y en primera instancia de las causas civiles y de comercio cuya cuantía exceda esta cantidad y no pase de quinientos pesos.

En materia criminal conocerán de las causas sobre faltas a que se refiere el artículo 24 y practicarán las diligencias que se mencionan en el artículo 25, inciso 2.º, de la presente ley.

Art. 62.—Los jueces de menor cuantía quedarán sometidos a la autoridad disciplinaria inmediata de los jueces de letras de menor cuantía, a quienes corresponderá el conocimiento de los recursos de apelación y de casación que se interpongan en contra de las resoluciones de aquéllos.

En caso de ausencia o de impedimento de un juez de menor cuantía, le subrogará el juez letrado de menor cuantía que tenga el asiento de sus funciones en la capital del departamento.

Si hubiere en la capital del departamento dos o más jueces letrados de menor cuantía, se observará lo dispuesto en el artículo 20, inciso 2.º, de la presente ley. Si en la capital del departamento no hubiere juez letrado de menor cuantía, hará sus veces el que lo sea de letras de dicho departamento, para los efectos del presente artículo.

Art. 63.—Toda medida disciplinaria, o de otro orden, que lleve consigo la suspensión o la remoción del cargo de oficial del registro civil, se hará igualmente extensiva a las funciones de juez de menor cuantía que ejerza el funcionario afectado con ella, y viceversa.

Art. 64.—Los oficiales del Registro Civil que ejerzan funciones de juez de menor cuantía tendrán él sobresueldo que se les fije en la ley anual de Presupuestos.

Art. 65.—En cuanto sean compatibles con las del presente título, regirán para los Juzgados y los jueces de menor cuantía las demás disposiciones de esta ley.

## TÍTULO IX

### Disposiciones generales

Art. 66.—Los jueces de letras de menor cuantía de Santiago y de Valparaíso tendrán el sueldo de doce mil pesos anuales; y los de los Juzgados que se creen en conformidad al artículo 4.º de la presente ley, el que se les fije en la ley anual de Presupuestos.

Los secretarios de los Juzgados de letras de menor cuantía no percibirán derechos arancelarios y tendrán, por toda remuneración, un sueldo anual de ocho mil pesos en Santiago y Valparaíso; y el que se les fije en la ley anual de Presupuestos, en los demás lugares.

Los oficiales subalternos tendrán los sueldos que se les fije en la misma ley anual de Presupuestos.

Art. 67.—Los Juzgados de subdelegación y de distrito continuarán servidos por los actuales funcionarios mientras en el territorio de su jurisdicción no entren en funciones jueces letrados de menor cuantía. Los procesos pendientes ante aquéllos en esa fecha, pasarán al conocimiento de estos últimos y se distribuirán entre los jueces de letras de menor cuantía que lo sean del domicilio de las personas demandadas, o que ejerzan jurisdicción en el territorio en que se hubiere cometido la falta que se pesquisa.

Los jueces letrados de departamentos seguirán conociendo de los negocios que por la presente ley se encomienda a los jueces de letras de menor cuantía hasta la fecha en que estos últimos entren en funciones, y mantendrán su competencia para fallar los negocios en que hasta entonces hubieren prevenido.

Art. 68.—Desde la fecha en que entren en funciones los jueces de letras de menor cuantía a que se refiere el artículo primero de la presente ley, los Juzgados

Especiales de Apelaciones y de Comercio de Santiago y de Valparaíso ejercerán las funciones que por la ley corresponden a los jueces en lo criminal de dichos departamentos.

Los negocios pendientes ante ellos en esa fecha, se distribuirán entre los jueces de letras de menor cuantía en la forma que se determina en el inciso primero del artículo precedente.

Art. 69.—Los Jueces Letrados de los departamentos de Tocopilla, Loa, Combarbalá, Casablanca, La Ligua, Putaendo, Petorca, Vichuquén, Chanco, Puchacai, Cañete, Collipulli, Río Bueno y Quinchao ejercerán también las funciones de Jueces Letrados de Menor Cuantía dentro de los límites urbanos de la ciudad en que tienen su asiento.

Art. 70.—Desde la fecha de vigencia de la presente ley, se considerará y castigará como falta todo hecho penado en los artículos 494, número 19, y 495, números 21 y 22 del Código Penal, siempre que el delito se refiera a valores que no excedan de sesenta pesos o se trate de daños de igual valor.

Se deroga lo dispuesto en el artículo 2.º de la ley número 2,988, de 16 de Octubre de 1923.

## TÍTULO X

### Disposiciones transitorias

Art. 71.—Los receptores de mayor cuantía de los departamentos de Santiago y Valparaíso ejercerán sus funciones ante los Juzgados de letras de menor cuantía creados en conformidad al artículo primero de la presente ley en los negocios de que conocieren en primera instancia estos Tribunales.

Los actuales receptores de los Juzgados Especiales de Apelaciones y de Comercio de Santiago y de Val-



paraíso pasarán a ejercer sus funciones ante los Juzgados de letras de menor cuantía, en los negocios de que estos Tribunales conozcan en única instancia. La Corte de Apelaciones respectiva les señalará el Juzgado ante el cual deban prestar sus servicios.

Los actuales receptores de las subdelegaciones urbanas de Santiago y de Valparaíso que acrediten buenos antecedentes al juez de letras de menor cuantía ante quien ocurran, serán preferidos en la formación de la terna y en el nombramiento a que se hace referencia en el artículo 51 de la presente ley.

## TÍTULO FINAL

### De la observancia de la presente ley

Artículo final.—La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el **Diario Oficial**, y desde esa fecha quedarán derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias.

Aprobado por Decreto-Ley número 363 de esta fecha.

Santiago, 17 de Marzo de 1925.—**Emilio Bello C.**—**Pedro P. Dartnell E.**—**C. A. Ward.**—**José Maza.**

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PRO- YECTO DE DECRETO-LEY QUE CREA LOS CO- LEGIOS DE ABOGADOS

Ninguna profesión más delicada y pocas tan notables como la del Abogado, ya que de su correcto o abusivo ejercicio dependen el estado civil de las personas, la tranquilidad y honor de las familias, la estabilidad de las fortunas, la conservación y legítima transferencia de la propiedad inmueble, el respeto y cumplimiento de las convenciones y la posibilidad de solucionarlas por medios fáciles y expeditos.

Así lo comprendieron desde los albores de la civilización latina aquellos egregios legisladores y juriconsultos romanos, cuyos principios y doctrinas resisten todavía al embate de los siglos y a la evolución progresista de las instituciones sociales.

Ellos apellidaron honorario la remuneración de los defensores judiciales, derivándola de honor antes que de pecunia, para indicar sin duda que la misión del abogado era más bien de honor que de lucro.

Aún después de derogada la ley Cincia que prohibía a los abogados aceptar un honorario por sus servicios, los emperadores continuaron mostrando gran deferencia por el foro, hasta el cual llegaron muchos de ellos para aprender a administrar justicia.

En tiempo del Bajo Imperio, los ciudadanos que se consagraron a esta profesión recibieron el nombre de "advocati" y formaron colegios a los que se dió la denominación de "orden".

Por eso, escribía hace dos siglos, el célebre canciller d'Aguesseau, que la orden de los abogados era "tan antigua como la magistratura, tan noble como la virtud y tan necesaria como la justicia".

Por eso también cuando no hace muchos años se fundó en Santiago el Instituto de Abogados no sólo se incorporaron a él los más prestigiosos profesionales y todos los catedráticos de derecho, sino que su advenimiento fué acogido con verdadero júbilo por los magistrados, las autoridades, los miembros del foro y la gran masa de los litigantes.

No obstante su carácter de institución privada dicho Instituto ha contribuido eficazmente a muchas reformas y mejoras en la administración de justicia y ha producido una utilísima colaboración entre los jueces y abogados.

Sabemos que en Francia, desde el siglo XIII, a lo menos, los Colegios de Abogados han sido reglamentados por las leyes.

Se trata, en consecuencia, de una institución cuyas raíces centenarias son la mejor prueba de su importancia.

Nuestros tribunales han manifestado oficial y reiteradamente la conveniencia de organizar por medio de una ley los Colegios de Abogados, porque al ilustrado criterio de sus miembros no escapa la estrecha solidaridad que existe entre las funciones del Juez y las del defensor judicial, y por que su experimentada inteligencia les demuestra que no hay mayor peligro para la buena administración de justicia que la de un cuerpo de abogados negligentes o corrompidos, así como existe mejor colaborador de un Juez que un Instituto de Abogados honorable, digno y estudioso.

Los daños incalculables que han causado y siguen causando los rúbulas o tinterillos, cuya intervención funesta aumenta cada día al amparo de la impunidad que les depara nuestra falta de sanciones legales para

el ejercicio sin título de la profesión de abogado constituye un problema gravísimo cuya solución estimo que no es posible retardar por más tiempo.

A consagrar los principios, a dar forma a los anhelos y remediar los males preindicados tiende el proyecto que tengo la honra de someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.

Con escasísimas modificaciones de pequeña o ninguna importancia sus disposiciones corresponden a las redactadas por el Instituto de Abogados de Santiago, con la colaboración de los profesionales más prestigiosos, los profesores más eminentes y los más altos miembros de la magistratura judicial.

El espíritu que lo ha inspirado es el de aprovechar la experiencia de otras naciones más adelantadas, robustecer la colaboración de jueces y abogados, dignificar la profesión de estos últimos, poner atajo a su ejercicio por personas incompetentes, indignas o negligentes, fomentar el estudio del derecho y propender, en suma, a una mejor, más eficaz y más rápida administración de justicia.

(Firmado).—**José Maza.**



## **Decreto-Ley N.º 406**

(Crea los Colegios de Abogados)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 27 de Marzo de 1925)

Núm. 406.—Santiago, 19 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

### **DECRETO-LEY:**

## **DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS**

### **TÍTULO I**

#### **De los Consejos**

Artículo 1.º—El ejercicio de la profesión de abogado está sujeto a las disposiciones de la presente ley.

Art. 2.º—Créase la institución denominada Colegio de Abogados, que será regida por un Consejo General residente en Santiago y por consejos provinciales residentes en los lugares de asiento de las Cortes de Apelaciones.

Art. 3.º—Estos consejos serán compuestos de nueve miembros en el distrito jurisdiccional de una Corte de Apelaciones en que el número de abogados inscritos en el registro del Colegio sea de veinte a treinta; de once miembros si el número de abogados inscritos es de treinta a cincuenta; de quince miembros si el número es superior a cincuenta y de veinticinco en Santiago.

Art. 4.º—Cada uno de estos Consejos tendrá su jurisdicción sobre los abogados que ejerzan su profesión

en el distrito jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva.

El Consejo de Santiago tendrá, además, la supervigilancia de los Censejos provinciales y de la orden de abogados en toda la República.

Art. 5.º—Los Consejeros serán elegidos por votación directa de los abogados inscritos en el Registro de cada Colegio en la forma que establezca el reglamento que se dicte para la aplicación de la presente ley.

Para ser miembro del Consejo se necesita tener la calidad de abogado ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema, y residir en el lugar en que el Consejo ejerza sus funciones.

Podrán ser elegidos los abogados que se hayan retirado del ejercicio de la profesión y residán en el lugar en que el Consejo deba sesionar.

Art. 6.º—El Consejo durará en sus funciones por tres años; y las vacancias que ocurran serán llenadas por el mismo Consejo a propuesta en terna del Presidente y por el tiempo que falte para completar el período.

Art. 7.º—El Consejo se constituirá eligiendo de entre sus miembros un presidente y un 1.º y 2.º vice-presidente. Los cargos de consejeros y presidente del Consejo serán gratuitos.

Elegirá, asimismo, un secretario, tesorero, un bibliotecario y los empleados subalternos para la oficina. Los sueldos de estos empleados serán fijados por el Consejo.

Art. 8.º—En las reuniones generales los abogados podrán someter a la consideración del Consejo todas las medidas que creyeren convenientes para el prestigio de la orden o el ejercicio de la profesión.

## TÍTULO II

### Atribuciones de los consejeros

Art. 9.º—Corresponde al Consejo dentro de su jurisdicción:

a) Prestar protección a los abogados, mantener la disciplina profesional, velar por el prestigio y prerrogativas de la profesión y la regularidad y corrección de su ejercicio.

Las cuestiones que se susciten entre abogados por causas relacionadas con el ejercicio de la profesión, deberán ser sometidas a la resolución del Consejo, que procederá como amigable componedor sin ulterior recurso.

b) Recomendar a las Cortes de Apelaciones a los abogados que consideren aptos para el desempeño de las funciones judiciales.

c) Servir de árbitro en las cuestiones de honorarios entre el abogado y su cliente, cuando este último lo solicite.

d) Correr con la inversión de los fondos provenientes de las patentes profesionales de su distrito jurisdiccional, en conformidad al presupuesto anual que deberá formarse y someterse a la aprobación del Presidente de la República.

e) Informar al Presidente de la República sobre las cuestiones legales en que recabe su opinión.

f) Discernir las recompensas que se acuerden a las obras publicadas en el país sobre materias comprendidas en las asignaturas del curso de Derecho y ciencias políticas y sociales de la Universidad del Estado.

g) Asistir a la sesión de apertura de las Cortes el día que se inicie el año judicial.

h) Llevar en Santiago el registro de los abogados titulados en la República y en cada uno de los conse-

jos provinciales el registro especial de los abogados en ejercicio, dentro de su respectivo distrito jurisdiccional.

i) Hacer presentaciones al Presidente de la República sobre la conducta funcionaria de los miembros del poder judicial para el ejercicio de las facultades que le correspondan por la constitución y la ley.

j) Sesionar una vez al mes, a lo menos, y establecer una sanción para el caso de inasistencia.

Art. 10.—Sin perjuicio de la facultad que corresponde a los tribunales de justicia, el Consejo podrá corregir de oficio todo acto que pueda ser considerado como desdoroso para la profesión o como abusivo de su ejercicio, pudiendo al efecto hacer uso de las medidas siguientes:

Advertencia privada;

Amonestación privada;

Censura; y

Suspensión del abogado por un plazo que no exceda de tres meses, dando cuenta a los tribunales correspondientes.

Podrá, asimismo, acordar con el voto de los dos tercios de sus miembros, la cancelación del título siempre que motivos graves lo aconsejen. La cancelación sólo podrá hacerse efectiva con aprobación de la Corte Suprema. Declarada la cancelación del título, será eliminado el nombre del abogado del registro de la orden.

Art. 11.—Las personas que se creyeren víctimas de los procedimientos incorrectos de algún abogado podrán ocurrir al respectivo Consejo, el cual apreciará privadamente el motivo de la queja, oyendo al inculpado.

Estas reclamaciones y la decisión que sobre ellas recaiga no podrán ser publicadas sin acuerdo expreso del Consejo bajo la multa de \$ 500 a \$ 1,000, que se aplicarán sumariamente por el juez de letras en lo civil que corresponda.



Art. 12.—Toda sentencia ejecutoriada que condene a un abogado a la pena de suspensión del ejercicio profesional o que produzca el efecto de cancelar su título deberá ser comunicada al Presidente del Consejo de Abogados donde está inscrito el reo, y asimismo al Consejo de Santiago.

### TÍTULO III

#### **Del ejercicio de la profesión de abogado**

Art. 13.—El título de abogado será expedido por una comisión compuesta del Presidente de la Corte Suprema, del Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Presidente del Consejo General de Abogados de Santiago.

En caso de falta o imposibilidad de alguno de los miembros de esta comisión será subrogado por el que haga sus veces.

Ante esta comisión se comprobarán los requisitos que las leyes exijan para poder ser abogado y se rendirá un examen en la forma que determine el reglamento.

Servirá de ministro de fe el secretario de la Corte Suprema.

Art. 14.—El título de abogado expedido en la forma indicada en el artículo 13, deberá inscribirse en el registro de abogados de la República, que llevará el Consejo General de Santiago.

Para ejercer la profesión de abogado ante los tribunales de la República, deberá además el abogado hacerse inscribir en el registro especial de los abogados en ejercicio en el distrito jurisdiccional de su residencia que deberá llevar cada uno de los consejos, y pagar la patente que corresponda en conformidad a la ley, según sea el tribunal ante el cual desee ejercer su profesión.

En caso de traslación de un abogado de un distrito jurisdiccional a otro, deberá cancelarse su inscripción antes de proceder a otra.

En el registro se indicará la clase de patente que corresponda, según la declaración que haya hecho el abogado y el lugar en que va a ejercer la profesión. El Consejo pasará una nómina de la sección correspondiente a cada tribunal.

Art. 15.—Los abogados inscritos en un registro tienen la facultad de ejercer la profesión en todos los tribunales de igual o inferior jerarquía.

Un abogado inscrito en un registro deberá pagar previamente, para ejercer la profesión ante otro tribunal de superior jerarquía, la diferencia de valor con la patente más alta y ajustándose a las formalidades que establezca el reglamento.

## TÍTULO IV

### De las patentes

Art. 16.—Las patentes se pagarán anualmente en el mes de Septiembre de cada año y corresponderán a la clasificación que sigue:

Abogados ante la Corte Suprema.

Ante la Corte de Apelaciones de Santiago y Valparaíso.

Ante las demás Cortes de Apelaciones.

Ante los jueces de letras de asiento de Corte con facultad de alegar en incidentes ante la respectiva Corte de Apelaciones.

Ante los jueces de letras en las cabeceras de provincias.

Ante los jueces de letras en las cabeceras de departamentos.

Art. 17.—La falta de pago de la patente importará una suspensión en el ejercicio de la profesión sin per-

juicio de que el abogado pueda pedir rehabilitación exhibiendo el certificado de pago por el año en ejercicio.

Art. 18.—Las patentes de abogados se pagarán en la Tesorería Fiscal del lugar en que el abogado va a residir.

Los Consejos de abogados percibirán del Fisco anualmente el monto de las patentes del distrito jurisdiccional correspondiente, con deducción de un cincuenta por ciento que el Fisco aplicará a la Municipalidad del asiento del tribunal ante el cual se va a ejercer la profesión.

Art 19.—La cuota que deben recibir los consejos se destinará al pago de los gastos de oficina y empleados subalternos.

A la formación y fomento de una biblioteca de ciencias jurídicas, políticas y sociales del Consejo que se hará pública cuando el local y los recursos lo permitan; a formar una reserva destinada a asignar premios de las categorías que fije el reglamento, a las obras o trabajos que se publiquen en el país sobre ciencias jurídicas, políticas y sociales; a fomentar una asociación mutua destinada a socorrer a los abogados, funcionarios y empleados judiciales que se encuentren en estado de indigencia y a las familias de los que fallezcan en ese estado; a fomentar revistas de ciencias jurídicas y sociales o de jurisprudencia anotada; a pagar conferencias sobre temas relacionados con los estudios correspondientes a la profesión de abogado y en general a propender a la realización de todos los fines y atribuciones del Consejo.

Art. 20.—Toda presentación para iniciar un juicio en procedimiento ordinario o extraordinario deberá llevar la firma del abogado que se hace responsable de su patrocinio. Esta responsabilidad subsiste hasta que se haga presente en el juicio que el abogado ha cesado en la defensa.

Esta obligación podrá suspenderse por el Presidente de la República previa audiencia de la Corte de Apelaciones respectiva en los departamentos en que el número de abogados en ejercicio sea inferior a cinco.

Podrá solicitarse para la iniciación y secuela de un juicio en primera instancia, autorización para defenderse personalmente sin necesidad de abogado. El juez podrá concederla atendida la naturaleza y cuantía del asunto o las circunstancias que se hicieren valer, sin perjuicio de exigir la firma o intervención de abogado siempre que la marcha del juicio o la corrección de la defensa así lo aconsejaren. Esta resolución será apelable sólo en el efecto devolutivo.

### Artículos transitorios

Art. 21.—El primer Consejo de cada colegio será nombrado por la respectiva Corte de Apelaciones.

En las ciudades donde haya establecido un colegio o instituto de abogados con personalidad jurídica, será nombrado por la Corte de Apelaciones de una lista de diez abogados que presente el respectivo colegio o instituto. En Santiago el primer Consejo será designado por la Corte Suprema integrada por los presidentes de las salas de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, que elegirá sus miembros de una lista de treinta abogados que le presentará el Instituto de Abogados de Santiago.

Estos consejos durarán por dos años y se compondrán de cinco miembros en las Cortes de Apelaciones de provincia y de diez en Santiago.

En ese plazo deberán: 1.º Formar el registro de los abogados en ejercicio en cada distrito jurisdiccional; 2.º Adoptar las medidas correspondientes a la organización del Consejo; y 3.º Citar a los abogados inscritos en el registro a la primera reunión general para la elección definitiva del Consejo.



El Consejo de Santiago deberá además formar dentro del mismo plazo el registro general de la orden.

Art. 22.—La patente profesional que corresponda en conformidad a esta ley se pagará desde el año siguiente a la formación del registro de los abogados en ejercicio para cuyo efecto deberá publicarse en el “**Diario Oficial**” la nómina de los abogados inscritos con indicación del tribunal ante el cual van a ejercer su profesión. En el tiempo intermedio la patente se pagará computada hasta el primero de Septiembre de ese año.

Art. 23.—Las Cortes de Apelaciones y los jueces de letras harán fijar en secretaría un cartel por el término de treinta días con indicación del nombre de los abogados que están autorizados para ejercer la profesión ante ellos.

Art. 24.—Esta ley empezará a regir desde el primero de Septiembre siguiente a su publicación en el “**Diario Oficial**”, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones transitorias desde la fecha de dicha publicación.

Art. 25.—El Presidente de la República dictará el reglamento necesario para la ejecución de esta ley.

Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PRO- YECTO DE DECRETO-LEY QUE ORGANIZA EL SERVICIO NOTARIAL EN LA REPÚBLICA**

Al promulgar la República de Chile una legislación propia y adecuada a sus peculiares condiciones, equiparó las escrituras públicas a las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, dándoles de este modo la mayor fuerza y valor probatorio que puede concederse a un documento escrito. Pero, por un olvido inexplicable, dejó en el vacío las reglas a que debía sujetarse el otorgamiento, firma y copia autorizada de esos instrumentos auténticos, no obstante haberlos declarado una solemnidad indispensable de los actos y contratos más importantes de la vida civil, como la legitimación de los hijos, los testamentos solemnes o la compra-venta de bienes raíces.

Durante medio siglo, nuestra legislación al respecto ha estado reducida al artículo 1699 del Código Civil, que, en su inciso final, declara que el instrumento auténtico otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama **escritura pública** y este sumario precepto no ha tenido más complemento que el del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil promulgado por la Ley N.º 1552 de 28 de Agosto de 1902, que establece la única forma como puede anularse con prueba de testigos el contenido de una escritura pública.

En el resto, es decir, en todos los requisitos esenciales para crear este instrumento público y señalar las condiciones de su validez, continuamos sometidos a los antiquísimos preceptos de la legislación española aplicada en sus colonias por la Recopilación de Indias.

La evolución del habla castellana en los ocho siglos transcurridos desde el reinado de don Alfonso el Sabio en que vieron la luz las Leyes de Partidas, y el escaso conocimiento actual de sus disposiciones, agravado con la dificultad de procurarse su texto auténtico, han terminado por dejar entregada a la costumbre o a los Autos-Acordados de la Excm. Corte Suprema la interpretación armónica de muchas de sus reglas fundamentales como las Leyes I, LIV y CXI del Título XVIII de la Partida Tercera que respectivamente establecen “Qué cosa es Escritura y qué pro-nace de ella y en cuántas maneras se departe”; “cómo deben ser hechas las notas y las Cartas de los Escribanos Públicos” y “Por cuántas razones los Privilegios y las Cartas pueden deshechar los hombres con derecho que no sean valederas”.

Sabido es que en varias ocasiones el fallecimiento de un notario ha originado gravosos pleitos y perjuicios, sólo porque hoy consideramos atinadamente, que debe ser requisito ineludible que el notario suscriba, junto con las partes, la matriz de toda escritura incorporada en su protocolo mientras que la Ley VI del Título XXIII del Libro X de la Novísima Recopilación lo ordena—al finalizar un año—como una simple medida de buen régimen interno de cada escribanía.

La protocolización de documentos en el registro de un notario, cuya práctica tan generalizada está en nuestros días, es una creación espontánea de la costumbre que apenas podría encontrar un antecedente legal en el vago precepto del artículo 1703 del Código Civil.

Otros vacíos cuya imperiosa urgencia de remediar no es necesario encarecer, porque conocemos sus innumerables daños, son los referentes a la falta de identificación de las personas que otorgan una escritura pública y a la omisión de consignar la hora y el sitio en que se extiende—o se da por extendido—un testamento, a menudo ordenado **in-extremis**.

Deficientísima es también nuestra legislación en cuanto a las condiciones de ejercicio de las funciones de notario, y esta deficiencia, incompatible con el progreso general de nuestras instituciones, es en verdad inexcusable si pensamos que, a partir del momento en que los hombres empezaron a poner por escrito sus convenios, experimentaron la necesidad de tener funcionarios a quienes confiar su guarda y su autenticación.

La Historia nos enseña que, desde los tiempos más remotos, los hebreos, como los egipcios y los griegos, han tenido sus **escribas, escribanos o notarios**, cuya existencia es para Aristóteles uno de los elementos indispensables a la buena administración de la República.

Justiniano, parece innecesario consignarlo, puso término al desorden creado por la sub-división de las funciones de los escribas romanos, organizando el **notariado** con la serena sabiduría que es el sello característico de toda su codificación.

En Chile, sin embargo, apenas diez artículos del Título XVIII de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (aumentados a quince en igual Título del Proyecto de Código Orgánico de Tribunales) han reglamentado las condiciones de ejercicio de las delicadas funciones que hoy incumben a los notarios.

Debo, finalmente, anotar la circunstancia de que los preceptos existentes, a más de anticuados, contradictorios e insuficientes, se encuentran dispersos en varios cuerpos de leyes o reglamentos.

Penetrado el Gobierno de la necesidad de remediar



tal estado de cosas expidió el 27 de Septiembre de 1923 el Decreto Supremo N.º 1927, del Ministerio a mi cargo, por el cual se comisiona al notario de Santiago don Manuel Gaete Fagalde para estudiar la organización y régimen del notariado en las Repúblicas de Argentina y Uruguay y con el objeto de informar al Gobierno a su regreso.

Los resultados de esa comisión, el ejemplo de otros países y las lecciones de la experiencia han inspirado el siguiente proyecto de Código del Notariado que tengo la honra de someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.

Muy pocas novedades contiene dicho proyecto, ya que, su fin primordial es reunir los preceptos dispersos, modernizar las anticuadas reglas de la Partida Tercera o la Novísima Recopilación, dar fuerza de Ley a las costumbres nacidas de la necesidad, dignificar la profesión de los funcionarios a quienes incumbe tan delicadas como importantes actuaciones y castigar, además, a los que por excepción, afortunadamente muy escasa hasta ahora, desatiendan el cargo o lo ejercitan en forma incorrecta o delictuosa.

(Firmado).—**José Maza.**

## **Decreto-Ley N.º 407**

(Organiza el servicio notarial en la República)

(Publicado en el “**Diario Oficial**” de 25 de Marzo y por segunda vez el 18 de Abril de 1925)

Núm. 407.—Santiago, 19 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

### **DECRETO-LEY:**

#### **TÍTULO I**

#### **Del nombramiento, instalación y subrogación de los notarios**

Artículo 1.º—Los notarios son ministros de fe pública, encargados de las funciones que la presente ley establece.

Art. 2.º—En cada departamento de la República habrá, por lo menos, un notario y los demás que el Presidente de la República determine, previo informe favorable de la respectiva Corte de Apelaciones y habida consideración de las necesidades del servicio público y a la población del respectivo departamento.

Para la creación de nuevas notarías, será preciso que el departamento correspondiente tenga una población superior a cuarenta mil habitantes, no pudiendo haber más de un notario por cada porción de dicho número de habitantes.

Ningún notario podrá ejercer funciones de tal fuera del departamento para que hubiere sido nombrado.

Art. 3.º—Para optar al cargo de notario se requiere:

- 1.º Ser chileno;
- 2.º Tener veinticinco años de edad, por lo menos;
- 3.º Ser abogado con dos años de ejercicio de profesión, a lo menos;
- 4.º Ser de reconocida honorabilidad y buenas costumbres.

Art. 4.º—No podrán ser notarios:

- 1.º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad;
- 2.º Los sordos;
- 3.º Los mudos;
- 4.º Los ciegos;
- 5.º Los que se hallaren procesados por crimen o simple delito;
- 6.º Los que estuvieren sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos.

Art. 5.º—Las funciones de notario son incompatibles con las de cualquier otro cargo rentado de nombramiento del Presidente de la República, salvo aquellos que requieran la calidad de notario o los de profesores de instrucción secundaria, especial o superior.

Art. 6.º—Son igualmente incompatibles las funciones de notario con el ejercicio de la profesión de abogado, pero no con las de árbitro o la defensa de causas personales, de sus mujeres, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos.

Art. 7.º—Siempre que se trate de proveer un cargo de notario, la Corte de Apelaciones a cuya jurisdicción corresponda el departamento con notaría vacante, convocará a un concurso público, al que podrán presentarse como opositores, todos los que posean las cualidades requeridas para desempeñarlo.

Art. 8.º—El decreto de convocatoria al concurso fijará el día en que deberá tener lugar el examen de los

oponentes al cargo, y los que deseen concurrir a él, deberán inscribirse con diez días de anticipación al fijado para el examen, en la secretaría de la Corte, acreditando reunir las calidades exigidas en el artículo 3.º, y rendir, además, información de testigos que acrediten las buenas costumbres y honorabilidad del oponente.

Art. 9.º—La Corte someterá a examen público a los opositores al cargo y formará una lista con los tres que considere más dignos.

En caso de empate de votos en la formación de esta terna, prevalecerá el del que presidiere la Corte y, en caso de dispersión, los que hubieren sufragado por los que obtuvieren menor número, deberán optar por uno de los que tuvieren las más altas mayorías relativas. Si hubiere más de dos oponentes que se hallaren en este caso, la Corte decidirá cuál debe ser excluido, debiendo concretarse la votación a los dos restantes.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a su formación, la terna será elevada al Presidente de la República, quien designará de entre los que la formen, al abogado que haya de ocupar el puesto.

Art. 10.—Todo notario antes de entrar en funciones, deberá rendir, a satisfacción del Presidente de la Corte respectiva, una fianza para responder a las multas, costas e indemnizaciones de perjuicios a que pueda ser condenado, en razón de los actos concernientes al desempeño de su cargo.

Esta fianza será de quince mil pesos para los notarios de asiento de Corte, diez mil para los de cabecera de provincia y cinco mil para los demás.

Art. 11.—Aceptada y constituida la fianza a que se refiere el artículo anterior, y antes de asumir su cargo los notarios deberán prestar ante el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, juramento de guardar la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente las funciones de su puesto.



Art. 12.—Cuando un notario faltare o se inhabilitare para el ejercicio de sus funciones, el juez de letras respectivo o de turno, designará al abogado que haya de reemplazarle, mientras dure el impedimento o estuviere sin proveerse el cargo.

Art. 13.—Ningún notario podrá ausentarse del lugar de su residencia ni dejar de asistir diariamente a su oficina, sin permiso del presidente de la Corte, si la notaría tuviere su asiento en el mismo lugar que aquélla, o del juez de letras respectivo o de turno, en los demás casos.

Este permiso no podrá otorgarse por más de dos meses. Pasado este término y no excediendo de un año, el permiso deberá solicitarse por escrito al Presidente de la República, a quien corresponderá, en este caso, la designación del reemplazante.

En los permisos hasta por dos meses, el notario podrá proponer al juez la persona que deba subrogarle, bajo su responsabilidad.

## TÍTULO II

### Atribuciones y obligaciones de los notarios

Art. 14.—Son atribuciones de los notarios:

- 1.º Extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que, de palabra o por escrito, les dieren las partes otorgantes;
- 2.º Levantar inventarios solemnes;
- 3.º Protestar letras de cambio;
- 4.º Notificar los trasposos de acciones y constituciones y notificaciones de prenda que se les solicitaren;
- 5.º Asistir a las juntas generales de accionistas de

sociedades anónimas, para los efectos que la ley o reglamento de ellas lo exigieren;

6.º En general, dar fe de los actos para que fueren requeridos y que no estuvieren expresamente encomendados a otros funcionarios.

Art. 15.—Son obligaciones de los notarios:

1.º Guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos se otorguen, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen;

2.º Dar a las partes interesadas los testimonios o certificados que pidan, de los actos que ante ellos se celebren;

3.º Facilitar a cualquiera persona que lo solicite, el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se otorguen;

4.º Asistir diariamente a su oficina y mantenerla abierta al público, por lo menos, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

### TÍTULO III

#### De las Escrituras públicas

Art. 16.—Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público.

Art. 17.—Las escrituras públicas deben escribirse en idioma castellano y estilo claro y preciso, y en ellas no podrán emplearse abreviaturas, cifras ni otros signos que los caracteres de uso corriente.

Art. 18.—Toda escritura pública debe ser otorgada ante notario y dos testigos, vecinos del departamento,

que sepan leer y escribir y capaces de darse cuenta del acto o contrato que se celebra.

En ella el notario deberá dejar constancia de conocer a los otorgantes, o de habersele acreditado su identidad con la cédula personal respectiva, cuyos datos se insertarán en la escritura; o con la aserción firmada en el mismo registro, de dos testigos honorables, conocidos del notario, vecinos del departamento y hábiles para testificar.

Art. 19.—Los testigos deberán estar presentes con los otorgantes al momento de la firma; y suscribirán la escritura inmediatamente después de aquéllos, autorizándola el notario a continuación.

Art. 20.—Cualquiera de las partes podrá exigir al notario que, previamente, lea la escritura en alta voz; pero, si todos los otorgantes están de acuerdo en omitir esta formalidad, leyéndola ellos mismos, podrá procederse así.

Art. 21.—Si alguno de los comparecientes o todos ellos no supieren o no pudieren firmar, lo hará a su ruego uno de los testigos o de los otorgantes que no tengan un interés contrario, según el texto de la escritura, o una tercera persona, debiendo los que no firmen poner junto a la del que la hubiere firmado a su ruego, la impresión del pulgar de su mano derecha o, en su defecto, del de la izquierda. Si no pudiera hacerlo con ninguno de esos dedos, lo hará con cualquiera de los otros. El notario dejará constancia de este hecho y de la imposibilidad absoluta de efectuarlo.

Art. 22.—Siempre que alguno de los otorgantes lo exija, los firmantes dejarán su impresión digital, en la forma indicada en el artículo anterior.

Art. 23.—Toda escritura pública deberá comenzar expresando el lugar y fecha de su otorgamiento, el nombre del notario que la autoriza y el de los comparecientes, con expresión de su nacionalidad, estado civil, profesión y domicilio.

Art. 24.—Serán nulas las adiciones, apostillas, entre renglonaduras, raspaduras, o enmendaduras en las escrituras matrices, que no aparezcan salvadas al final y antes de las firmas de los que las suscriban.

Art. 25.—Serán, igualmente, nulas las escrituras públicas:

1.º Que contengan disposiciones a favor del notario que la autorice, de su cónyuge, ascendientes o descendientes o hermanos;

2.º En que sean testigos el cónyuge, ascendientes o descendientes de algunos de los otorgantes;

3.º Y aquellas en que el notarió no dé fe del conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia en la forma establecida en el art. 18, o en que no aparezcan las firmas de las partes y testigos que deben hacerlo, y la del notario.

Art. 26.—Se considera que una persona firma una escritura o documento, no sólo cuando lo hace por sí misma, en la forma corriente, sino también en los casos en que no sabiendo o no pudiendo hacerlo supla esta falta en la forma establecida en el art. 21.

Art. 27.—En cuanto al otorgamiento de testamentos, se estará a lo establecido al respecto en el Código Civil, debiendo el notario dejar constancia de la hora y lugar en que se otorguen.

## TÍTULO IV

### De las protocolizaciones

Art. 28.—Protocolización es el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario, a pedido de parte interesada.

Para que la protocolización surta efecto legal, deberá



dejarse constancia en el registro, del día en que se efectúe, con un certificado firmado de los solicitantes, en que especifiquen el contenido del documento que protocolizan, con sus indicaciones más esenciales para individualizarlo, y número de páginas y fecha, certificación que suscribirán también el notario y testigos.

Art. 29.—No pueden protocolizarse, ni su protocolización producirá efecto alguno, los documentos en que se consignen actos o contratos con causa u objeto ilícitos, salvo que lo pidan personas distintas de los otorgantes o beneficiarios de ellos.

Art. 30.—La protocolización de testamentos cerrados, orales o privilegiados ordenada por los jueces y la de los otorgados fuera del registro del notario, deberá hacerse insertando su contenido íntegramente en el registro del día en que se efectúe y agregando su original al fin del protocolo respectivo con todos los antecedentes que lo acompañen.

Art. 31.—El documento protocolizado sólo podrá ser desglosado del protocolo en virtud de decreto judicial, consultado a la Corte respectiva.

Art. 32.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1703 del Código Civil, la fecha de un instrumento privado se contará respecto de terceros desde su protocolización con arreglo a la presente ley.

Art. 33.—Una vez protocolizados valdrán como instrumentos públicos:

1.º Los testamentos cerrados y abiertos en forma legal;

2.º Los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre que su protocolización se haya efectuado a más tardar, dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento;

3.º Los testamentos menos solemnes o privilegiados que no hayan sido autorizados por notario, previo decreto del juez competente;

4.º Los protestos de letras y las actas de ofertas de pago; y

5.º Los instrumentos otorgados en el extranjero, las transcripciones y traducciones efectuadas por el intérprete oficial o por peritos nombrados al efecto por juez competente y debidamente legalizadas que hayan servido para otorgar escrituras en Chile.

## TÍTULO V

### De las copias de escrituras públicas y documentos protocolizados

Art. 34.—Sólo podrán dar copias autorizadas de escrituras públicas o documentos protocolizados el notario autorizante, el que lo subroga o sucede legalmente o el archivero a cuyo cargo esté el protocolo respectivo.

Art. 35.—Las copias podrán ser manuscritas, dactilografiadas, impresas, litografiadas, fotografiadas, o fotograbadas, y en ellas deberá expresarse si son primeras o segundas copias.

Art. 36.—Sólo podrá otorgarse una primera copia u original, que será la única con mérito ejecutivo.

Sin embargo, en los contratos en que dos o más partes tengan derecho a ejercitar acciones recíprocas o diversas para el cumplimiento de obligaciones de la misma índole, el notario deberá dar cuantas primeras copias sean necesarias, expresando en cada una el nombre de la parte a quien la diere como segundo original.

Art. 37.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si una parte hubiere extraviado el original de su escritura, podrá pedir al juez correspondiente que ordene al notario dar un segundo original con el mérito del primero y previa citación de la persona a quien deba

perjudicar o de su causante; y corridos los trámites legales, el juez mandará expedir la copia solicitada en la que el notario dejará constancia de la forma en que ha sido extendida.

Art. 38.—Se prohíbe a los notarios otorgar segundas copias cuando no hubiere sido extendida la primera.

## TÍTULO VI

### De la falta de fuerza legal de las escrituras, copias y testimonios notariales

Art. 39.—No se considerará pública o auténtica la escritura:

1.º Que fuese autorizada por persona que no sea notario, o por notario incompetente, suspendido o inhabilitado en forma legal;

2.º Que no esté en el protocolo o se escriba en alguno que no pertenezca al notario autorizante o al de quien esté subrogando legalmente;

3.º En que no conste la designación exacta y única del día, mes y año; o de la hora y sitio de su otorgamiento si se trata de un testamento;

4.º En que no conste la firma de los comparecientes o no se hubiere salvado este requisito en la forma prescripta en el art. 21;

5.º En que sean testigos personas a quienes afecten las incapacidades establecidas en la presente ley;

6.º En que el notario hubiere omitido suplir el conocimiento de los comparecientes por medio de testigos, o dejar constancia de haberse exhibido la correspondiente cédula de identidad personal;

7.º Que no esté en idioma castellano;

8.º En que aparezcan estipulaciones a favor del nota-

rio autorizante o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

9.º En que el notario no haya usado tinta fija o indeleble o que haya dactilografiado o impreso en su protocolo;

10.º Que no se firme dentro de los sesenta días siguientes a su otorgamiento.

Art. 40.—Los notarios sólo podrán dar copia íntegra de las escrituras o documentos protocolizados, salvo los casos en que la ley ordene otra cosa, o que por decreto judicial se le ordene certificar sobre parte de ellos.

Art. 41.—Las palabras que en cualquier documento notarial aparezcan interlineadas, enmendadas o sobrepasadas, para tener valor deberán ser salvadas antes de las firmas del documento respectivo, y en caso de que no lo sean, se tendrán por no escritas.

## TÍTULO VII

### De los libros que deben llevar los notarios

Art. 42.—Todo notario deberá formar un protocolo en el papel sellado que la correspondiente ley determine, en cuadernillos enteros de cinco pliegos cada uno, metidos un pliego dentro del otro, de manera que la primera foja del cuadernillo sea la mitad del pliego cuya otra mitad corresponda a la décima foja del mismo; y que ordenará por riguroso orden de fecha del otorgamiento de las escrituras que en él se inserten, debiendo numerar cada foja en su parte superior con las letras y números, numerando y rotulando cada escritura al margen y a la altura de su comienzo, no pudiendo dejar entre escritura y escritura más espacio en blanco que el indispensable para las firmas de los otorgantes, notarios y testigos.



Los protocolos deberán empastarse, a lo menos, cada dos meses, no pudiendo formarse con más de quinientas fojas cada uno.

Cada protocolo se iniciará con un certificado del notario en que exprese la fecha en que lo inicie con indicación del contrato o escritura y nombre de los otorgantes de la con quien principia.

Art. 43.—Transcurridos dos meses desde la fecha de la última escritura extendida en el protocolo, el notario dejará sin efecto las que no hubieren sido suscritas por todos los otorgantes, y pondrá un certificado al fin del protocolo indicando el número de escrituras que contiene y la enunciación de las que hayan quedado sin efecto.

Art. 44.—Cada notario llevará un libro índice público, en que anotará por orden alfabético de los apellidos de los otorgantes las escrituras que ante él se otorguen; y otro privado en que anotará los testamentos cerrados con indicación del lugar de su otorgamiento y del nombre y domicilio de sus testigos.

El primero estará a disposición del público, debiendo exhibirlo a quien lo exija, y el último deberá mantenerlo reservado, no teniendo obligación de exhibirlo sino por decreto del juez competente.

Los índices de escritura deberán ser hechos por los nombres de cada uno de los otorgantes, salvo que se trate de contratos de sociedades o que tengan nombre especial, pues en estos casos bastará con enunciarlas por el de la sociedad a que correspondan.

Art. 45.—El notario es responsable de las faltas, defectos o deterioros de los protocolos, mientras los conserve en su poder, bajo las penas que esta ley establece.

Art. 46.—El notario entregará al archivero judicial del departamento a que corresponda, los protocolos a su cargo, que tengan más de un año de fecha, y los ín-

dices de escrituras públicas que tengan más de diez años.

Art. 47.—Los protocolos y documentos protocolizados o agregados a los mismos, deberán guardarse en cajas de fierro o bóvedas contra incendios, y no podrán ser sacados de la oficina del notario, ni aun por orden judicial, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor, sino por el notario en persona.

Art. 48.—Tampoco podrá el notario permitir sacar de su oficina los documentos que se encuentren bajo su custodia, en razón de su oficio.

Art. 49.—En los casos de pérdida, robo o inutilización de los protocolos, o documentos pertenecientes a la notaría, el notario en cuyo poder se encuentran aquéllos al momento de ocurrir el hecho, dará cuenta inmediatamente a la autoridad judicial de que dependa para que instruya el correspondiente proceso.

Art. 50.—Los protocolos o documentos perdidos o inutilizados, deberán reponerse por orden del Ministro de Corte o juez encargado de la visita de la notaría, con citación de los interesados, de los testigos o cuando las partes no estuvieren conforme, e intervención del ministerio público.

Art. 51.—La reposición, en cuanto sea posible, se verificará con las copias autorizadas expedidas por el notario, declaraciones de testigos y demás pruebas que el juzgado estime convenientes.

Art. 52.—Las personas que tengan copias autorizadas de las matrices estarán obligadas a presentarlas al tribunal, y en caso de negarse a ello, podrán ser compelidas por la fuerza.

## TÍTULO VIII

### Del Gobierno y disciplina de los notarios

Art. 53.—La inspección disciplinaria, correccional y económica de los notarios radicará en las Cortes de Apelaciones de la jurisdicción de su respectivo departamento; pudiendo ser delegada en los jueces de letras correspondientes, cuando la notaría no se halle en el mismo lugar del asiento de la Corte.

Art. 54.—Esta inspección se ejercitará:

1.º La Corte de Apelaciones, por intermedio de un miembro de ella, o el juez de letras, en su caso, deberán efectuar visitas por lo menos cada dos meses, a la oficina del notario que se halle bajo su jurisdicción, con el fin de velar por el correcto cumplimiento de la ley.

2.º Los notarios deberán llevar un libro especial de visitas, en el cual se consignará por el funcionario encargado de hacer las observaciones que le merezcan la inspección realizada.

3.º Además de estas visitas ordinarias, la Corte o el juez, en su caso, podrán decretarlas extraordinariamente cuando lo estimen conveniente.

Art. 55.—Si al efectuar una visita, el funcionario encargado de ella comprobare la existencia de faltas o delitos cometidos por el notario, podrá adoptar las medidas urgentes que fueren necesarias, dando cuenta de ellas a la Corte respectiva dentro del término de doce horas.

Art. 56.—Las visitas ordinarias se contraerán exclusivamente a corregir los defectos de forma u omisiones subsanables en la manera de llevar y conservar los protocolos, asegurar el exacto cumplimiento de las obligaciones notariales e imponer las correcciones que los vi-

sitadores conceptúen justas y estén en sus facultades; y en caso contrario, dar cuenta a la Corte correspondiente.

## TÍTULO IX

### De las penas

Art. 57.—El notario que ejerciere funciones de tal fuera del departamento para que hubiere sido nombrado, sufrirá la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Art. 58.—El notario que faltare a las obligaciones que le señalan los números 2.º y 3.º del art. 15, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de ciento a mil pesos.

Art. 59.—En las mismas penas incurrirá el notario por cuya culpa o negligencia deje de tener su calidad de pública o auténtica una escritura, en virtud de cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 39.

Art. 60.—El notario que contraviniere lo dispuesto en los artículos 40 y 41, será castigado con la pena que señala el art. 193 del Código Penal.

Art. 61.—En los casos en que la pérdida de un protocolo se debiera a culpa o negligencia del notario, se aplicará a éste la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Si el hecho fuera imputable a dolo del notario, la pena será presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Art. 62.—Toda pena impuesta a un notario en virtud de esta ley, lleva consigo la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las otras penas accesorias que procedan en conformidad al Código Penal.



## TÍTULO X

### De los aranceles notariales

Art. 63.—Los notarios ganarán en el ejercicio de los actos de su ministerio los derechos que a continuación se expresan:

1.º Por el otorgamiento de toda escritura pública de que no se haga mención especial en esta ley, diez pesos;

2.º Por el otorgamiento de testamento, ya sea abierto o cerrado, veinte pesos;

3.º Por los certificados y anotaciones al pie o al margen de un instrumento público, tres pesos;

4.º Por cada certificación de firmas, dos pesos;

5.º Por la agregación de un testamento o cualquiera pieza en el registro del notario, cinco pesos y un peso más por cada página de que conste la protocolización;

6.º Por las copias autorizadas, ya sean primeras o segundas, dos pesos por la autorización de ellas;

7.º Por asistencia a juntas generales de accionistas de sociedades anónimas, cien pesos;

8.º Por protestos de letras, notificaciones de ofertas de pago y demás diligencias similares no expresamente consideradas en esta ley, veinticinco pesos, si fuere dentro del radio urbano de la ciudad y cinco pesos más por cada diez cuadras de exceso;

9.º Por cada notificación de prenda o cesión, diez pesos;

10. Si el notario fuere llamado para otorgar un instrumento público fuera de su oficina, ganará diez pesos, además de los derechos que corresponden a la diligencia que va a practicar, y si se llamare en horas comprendidas desde la ocho hasta las doce de la noche, cien pesos; y doscientos pesos desde esta hora hasta las siete de la mañana.

Art. 64.—Además de los derechos de otorgamiento, el notario cobrará dos pesos por cada página de escritura.

La página de escritura se entenderá escrita en papel de porte del usado con sello del Estado y con treinta líneas escritas y un promedio de diez palabras por renglón. Por la fracción de página inferior a quince líneas, se cobrará un peso.

Art. 65.—Siempre que los notarios desempeñen funciones correspondientes a otros ministros de fe pública, ganarán los derechos que a dichos funcionarios corresponda, si en la presente ley no le estuvieren asignados especialmente.

Art. 66.—Este decreto-ley comenzará a regir desde su publicación en el “**Diario Oficial**”.

Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Emilio Bello C.**—**C. A. Ward.**—**Pedro P. Dartnell E.**—**José Maza.**

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PRO- YECTO DE DECRETO-LEY SOBRE AUMENTO DE LOS SUELDOS JUDICIALES**

La necesidad de dar al Poder Judicial una situación económica digna de su elevado magisterio, me induce a rogar a la Excm. Junta de Gobierno que preste su aprobación al proyecto de decreto-ley adjunto que aumenta los sueldos de los funcionarios y empleados del orden judicial.

Los sueldos que se han tomado de base para elaborar el proyecto de decreto-ley adjunto son los que actualmente gozan dichos funcionarios y empleados y que alcanzan a la suma de \$ 8.651.385.

El proyecto consulta un aumento en dicha cantidad de cerca de \$ 3.000,000, aumento que no gravará las arcas fiscales porque dicha cantidad se cubrirá con los nuevos ingresos que han de producirse en conformidad a las reformas ya acordadas para la ley de timbres y estampillas en la parte que se relaciona con los actos jurídicos y el uso del papel sellado en los juicios. Los cálculos más moderados permiten asegurar que dichos nuevos ingresos dejarán al Fisco una cantidad superior a esos \$ 3.000,000.

El proyecto gravará, pues, únicamente a los litigantes, o sea, a las personas que requieren los servicios de la administración de justicia y a quienes, por beneficiarse precisamente con ellos, es legítimo exigirles una modesta retribución.

Por las razones expuestas, reitero a la Excm. Junta la conveniencia y necesidad de aprobar dicho proyecto en la forma que os lo propongo.

Santiago, Marzo diecinueve de mil novecientos veinticinco.—(Firmado).—**José Maza.**

### **Decreto-Ley N.º 408**

(Fija los sueldos a los miembros del Poder Judicial)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 23 de Marzo de 1925 y ordenada su publicación por segunda y tercera vez el 29 de Abril y 22 de Julio por decretos N.º 1018 de 25 de Abril y N.º 1864 de 21 de Julio de 1925 respectivamente).

Núm. 408.—Santiago, 19 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

#### **DECRETO-LEY:**

Artículo 1.º—Desde el 1.º de Abril del año en curso los funcionarios y empleados del orden judicial gozarán de los siguientes sueldos:

Los Ministros y el Fiscal de la Corte Suprema, \$ 48,000.

Los Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones, \$ 36,000.

Los Jueces Letrados de asiento de Corte, \$ 30,000.

Los Jueces Letrados de Antofagasta y Magallanes, \$ 30,000.

Los Jueces Letrados de cabecera de provincia, \$ 24,000.

Los Jueces Letrados de los departamentos de Arica, Pisagua, Tocopilla, Taltal, Loa, Ovalle, Coquimbo, Los



Andes, Quillota, Limache, Melipilla, La Victoria, San Antonio, Caupolicán, San Carlos, Bulnes, Rere, Lautaro, Talcahuano, Traiguén, Osorno y Castro, \$ 20,000.

Los Jueces Letrados de los demás departamentos, \$ 18,000.

Los Relatores y el Secretario de la Corte Suprema, \$ 36,000.

Los Relatores y Secretarios de las Cortes de Apelaciones, \$ 30,000.

Los Secretarios de los Juzgados de asiento de Corte, \$ 24,000.

Los Secretarios de los Juzgados de Antofagasta y Magallanes, \$ 24,000.

Los Secretarios de los Juzgados de cabecera de provincia, \$ 18,000.

Los Secretarios de los Juzgados de Arica, Pisagua, Tocopilla, Taltal, Loa, Ovalle, Coquimbo, Los Andes, Quillota, Limache, Melipilla, La Victoria, San Antonio, Caupolicán, San Carlos, Bulnes, Rere, Lautaro, Talcahuano, Traiguén, Osorno y Castro, \$ 15,000.

Los Secretarios de los Juzgados de Letras de los demás departamentos, \$ 12,000.

Los Promotores Fiscales gozarán de un sueldo igual al que corresponda al Secretario del Juzgado de Letras del departamento en que ejerzan sus funciones, excepto en Santiago y Valparaíso donde ganarán \$ 30,000.

Los empleados de Secretarías, oficiales de sala y porteros de Corte y de Juzgados de Letras, los escribientes de los Fiscales de Corte y de los Promotores Fiscales, gozarán de los sueldos que les asigna la Ley de Presupuestos vigente, aumentados en un 25 por ciento los sueldos de \$ 6,000 o más y en un 30 por ciento los sueldos inferiores a esa cantidad.

Art. 2.º—Los funcionarios y empleados del orden judicial de las provincias de Tacna, Tarapacá y Antofagasta y del Territorio de Magallanes, gozarán de una

gratificación de zona equivalente al diez por ciento del sueldo asignado a su respectivo empleo en el artículo anterior.

Quedan abolidas todas las demás gratificaciones de los empleados y funcionarios del orden judicial, excepto la del Presidente de la Corte Suprema.

Art. 3.º—Toda sentencia que dé lugar a un recurso de queja, deberá imponer al funcionario o empleado recurrido una multa a beneficio fiscal que no podrá ser menor de cien pesos ni exceder de dos mil. Esta multa se hará efectiva en los sueldos por el tesorero fiscal que corresponda.

Artículo transitorio.—Los actuales Relatores y Secretarios de los Tribunales Superiores de Justicia y los Secretarios de los Juzgados de asiento de Corte que estén comprendidos en el artículo transitorio del decreto-ley número 173, de 26 de Diciembre de 1924 podrán jubilar en la forma y plazo que ese artículo determina y sobre la base de los sueldos fijados en el presente decreto-ley.

Refréndese, tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Emilio Bello C.**—**C. A. Ward.**—**Pedro P. Dartnell E.**—**José Maza.**

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ACERCA DEL PRO- YECTO DE DECRETO-LEY QUE SUPRIME EL FERIADO JUDICIAL**

La Ley Orgánica de Tribunales, de 15 de Octubre de 1875, establece entre los días feriados para los Tribunales de Justicia el tiempo de vacaciones de cada año, que comenzará el 15 de Enero y durará hasta el 1.º de Marzo. Este feriado paraliza por entero las actividades de los estrados judiciales y contribuye a alargar más todavía, los juicios con grave perjuicio para los litigantes.

Esta situación que pudo explicarse en otras épocas, no se justifica en la hora actual en que todo el mundo exige y necesita mayor actividad. Por otra parte, los funcionarios del orden judicial además del feriado de que actualmente gozan, se acogen al igual que todos los empleados públicos a la ley general de licencias.

La supresión del feriado judicial, sin perjudicar a los funcionarios y empleados de dicho orden, beneficiará en alto grado a los litigantes y a la administración de justicia en general.

Basado en estas consideraciones, someto a la aprobación de esa Excm. Junta y de su Consejo de Secretarios de Estado, el proyecto de decreto-ley que, al efecto adjunto.

Santiago, 19 de Marzo de 1925.

(Firmado).—**José Maza.**

**Decreto-Ley N.º 409**

(Suprime el feriado judicial)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 23 de Marzo  
de 1925)

Núm. 409.—Santiago, 19º de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

**DECRETO-LEY:**

Artículo único.—Suprímese del inciso segundo del art. 149 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, de 15 de Octubre de 1875, la frase “y el tiempo de vacaciones de cada año, que comenzará el quince de Enero y durará hasta el primero de Marzo”.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—  
**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**



## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO-LEY SOBRE ABUSOS DE LA PUBLICIDAD

En una de las sesiones de la Junta de Gobierno y de su Consejo de Secretarios de Estado, se me confió la misión de redactar un proyecto de decreto-ley que viniera a reemplazar a la ley sobre abusos de la libertad de imprenta dictada en 1872.

Interpretando las ideas manifestadas en esa sesión y asesorado por una comisión compuesta del Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, don Gualterio Bianchi, del Director General de Bibliotecas, don Carlos Silva Cruz, y del Secretario de la Cámara de Diputados, don Alejandro Errázuriz, se ha llegado a confeccionar el proyecto que ahora someto a vuestra aprobación.

---

El periodismo desempeña un rol social cuya influencia no puede desconocerse en sociedad alguna; es una función noble y realmente libre, que cada vez debe apartarse más de las groseras pasiones políticas, que se desbordan sin respeto a la urbanidad y a la decencia.

Para que la prensa pueda desempeñar su excelsa misión social, es menester que se aisle en absoluto, o por lo menos hasta donde sea posible, de las bastardas ambiciones de las empresas anunciadoras, del abyecto espíritu de adulación, de la consigna política, del oficialismo esclavizante y de otras condiciones que deprimen la altivez de su misión.

En este concepto, la mayor parte de los pueblos han debido introducir modificaciones sustanciales en lo que antes se estimaba como inacatable conquista del liberalismo. Los demócratas europeos más convencidos se han visto obligados a reconocer que, a causa del desorden general engendrado por la pasada guerra mundial todos los clásicos dogmas liberales se hallan amenazados de disolución y los más respetuosos a este respecto, no han podido negarse a introducir avanzadísimas reformas, aconsejadas por la experiencia recogida.

En el proyecto de Decreto-Ley que os presento, se suprime el jurado, por las razones allí expuestas, y abona también esta supresión, el hecho de que la libertad de pensamiento, expresado por la palabra hablada o escrita, no debe depender del capricho de institución alguna de carácter oficial, sin que pueda olvidarse que el correctivo de la opinión pública, contra los periódicos que abusan de la libertad, es la ley más eficaz que contiene y reprime los errores que se cometen por medio de la prensa.

En modo alguno es censurable la diversidad de criterio de los periódicos, y en rigor, las nuevas legislaciones, manteniendo la más amplia libertad, no aceptan ya para los delitos de imprenta el antiguo concepto del jurado, pues estiman bárbaro e injusto señalar para la corrección de procedimiento de la prensa, una penalidad diferente de la común, por cuanto el derecho de publicar el pensamiento, correlativamente supone la responsabilidad personal.

No sería aceptable en nuestro régimen democrático

la intromisión permanente de la censura en las publicaciones de la prensa, pues, como lo han dicho eminentes pensadores, es repulsivo que la pluma de un censor asalariado injurie con su aprobación la primera página de un escrito. No sería propio que un censor pudiese de una plumada, relegar al olvido y perder para la humanidad, los secretos que el genio del hombre haya arrancado a la naturaleza.

Dentro de estas ideas generales, el proyecto adjunto, consulta la absoluta libertad de la prensa, según el concepto de la responsabilidad personal de los autores.

---

En el proyecto que someto a vuestra consideración, se ha tenido en vista diversas legislaciones extranjeras, como las de Francia, España y Brasil (esta última de 1923); pero naturalmente, no se ha copiado en forma servil ninguna de ellas. Ha sido preciso armonizar las disposiciones con el sistema de nuestros Códigos Penal y de Procedimiento del ramo.

Se han adoptado varias ideas nuevas, no contempladas en otras legislaciones, pero sugeridas por la experiencia de otros países o de Chile.

Como principio fundamental del proyecto, se consagra el derecho de hacer pública toda trasmisión de la palabra o del pensamiento, en cualquiera forma que se efectúe, sin autorización ni censura previa.

Las formalidades que se exigen para ejercitar este derecho, se limitan a la declaración que deberá prestar ante el Gobernador del departamento, el director del diario, revista o escrito periódico que vaya a publicarse. Es indispensable esta formalidad para poder hacer efectivas las sanciones en los casos de abusos delictuosos.

Se mantienen sustancialmente las disposiciones actuales concernientes a la obligación de poner pie de imprenta y hacer un depósito de varios ejemplares de toda impresión.

No ha parecido conveniente eximir de estas obligaciones ni aún a los prospectos, programas u otras pequeñas publicaciones análogas, por que, si bien ellas pueden parecer de ninguna importancia en el momento de su aparición, suelen adquirir con el tiempo gran valor histórico.

Al igual de lo que ocurre en la mayor parte de las legislaciones modernas, se concede, tanto a los representantes de la autoridad como a los particulares, el derecho de exigir gratuitamente una rectificación de cualquiera información periodística en que se les aluda infundadamente. Ha parecido este derecho de gran importancia y eficiencia práctica. La respuesta no podrá ser superior en longitud al artículo que la provoca dentro de un minimum de 50 líneas y de un maximum de 200.

Se señalan reglas adecuadas para que este derecho pueda ejercerse rápida y eficazmente, y para sancionar en igual forma la negativa del diario para publicar la respuesta.

En materia de delitos cometidos por medio de la imprenta u otra forma de publicación, se ha adoptado el criterio general de considerar que estos delitos deben castigarse con las mismas penas con que se castigarían si se cometieran sin publicidad. Indudablemente, la gravedad de los delitos es por lo menos tan grande en el primer caso como en el segundo.

Se clasifican los diversos delitos que pueden cometerse por medio de la publicidad.

En primer lugar se considera la provocación directa a cometer delitos comunes, sea que éstos lleguen a efectuarse; sea, cuando se trate de delitos de excepcional gravedad o que puedan afectar al orden público o



a la seguridad exterior de la República, que el delito no haya llegado a consumarse.

Se castiga también, como en todos los países, la publicación o reproducción maliciosa de noticias o documentos oficiales falsos.

Con especial cuidado se ha tratado el párrafo referente a los delitos contra las buenas costumbres, que tan alarmante desarrollo adquieren en la sociedad moderna. Todas las formas posibles de la odiosa publicidad empleada para esta clase de delitos, han sido consideradas en este proyecto.

Los delitos contra las personas, o sea la injuria o la calumnia hechas en cualquiera forma de publicidad, se castigan con las penas que establece el Código Penal para estos mismos delitos cuando se cometen “por escrito y con publicidad”. Se ha elevado, sin embargo, la cuantía de las multas fijadas en el Código para compensar en parte la atenuación que resulta en la pena con motivo de la depreciación de nuestra moneda.

---

Se ha consignado un párrafo especial para las ofensas contra los Jefes de Estado o agentes diplomáticos extranjeros, cuando ellas no alcanzan a constituir injuria o calumnia, en vista de las complicaciones y perturbaciones a que estas ofensas pueden dar lugar.

Se prohíbe la publicación de los documentos que pertenezcan a un proceso criminal en estado de sumario o de cualesquiera otros cuya publicación estimen conveniente prohibir los Tribunales.

Se prohíbe en especial la publicación de informaciones concernientes a la delincuencia de menores de edad, a menos que el juez correspondiente la haya autorizado.

La inmunidad constitucional parlamentaria para manifestar las opiniones se mantienen, pero se castigan

con las penas ordinarias las injurias o calumnias que profieran los diputados y senadores desde el seno del parlamento.

Respecto al procedimiento que debe seguirse para hacer efectiva la sanción penal o civil de los delitos que se contemplan en esta ley, se mantiene como norma general el procedimiento penal ordinario.

Se introduce una innovación de gran transcendencia con relación a la jurisdicción privilegiada de que hasta ahora gozaba la imprenta; la supresión del jurado.

El conocimiento de los delitos previstos en esta ley se entrega a la justicia ordinaria, eliminando, sí, en todo caso la jurisdicción de los jueces inferiores.

Queda bien en claro la responsabilidad civil que afecta a los que cometieren el delito o se aprovecharen de él, según las reglas generales del derecho; y avanzando un paso más allá del camino trazado en el Código Civil y de acuerdo con la jurisprudencia unánime de las naciones más adelantadas y con la que comienza a afirmarse en nuestro país, se acepta que la indemnización de perjuicios pueda hacerse extensiva a la reparación del daño meramente moral que sufrieren las víctimas de la injuria o de la calumnia.

Se determina con claridad y precisión quiénes son los responsables de los abusos de la publicidad en los diferentes casos que puedan presentarse. Los propietarios de los diarios o periódicos serán siempre responsables civilmente.

Se concede acción pública para el castigo de los delitos, salvas las reglas generales de procedimiento para los casos de injuria o de calumnia.

Al acusado de injuria o de calumnia no se le admite prueba sobre la verdad de sus imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra los empleados públicos, miembros de las corporaciones constituidas u otras personas calificadas.

Durante la instrucción del sumario, el juez no podrá

ordenar que se recoja sino el número de ejemplares indispensables para proseguir la investigación, a menos que el delito perseguido fuere contra las buenas costumbres, la seguridad exterior del Estado, contra Jefes de Estado o diplomáticos extranjeros.

La sentencia condenatoria ordenará necesariamente la destrucción de los escritos, figuras, estampas, objetos o imágenes obscenas.

---

Dentro del breve plazo de que se ha podido disponer para el estudio y redacción de una ley tan delicada, este Departamento ha hecho lo posible por realizar una obra que venga a llenar el lamentable vacío que existe en nuestra legislación en esta materia.

Era el propósito del infrascrito consultar opiniones más ilustradas y competentes; pero la premura del tiempo le ha impedido en absoluto hacerlo.

En sus líneas generales, el proyecto que os presento sigue las mismas normas trazadas por los países que han tenido que renovar el sistema de castigo para los abusos de la publicidad.

La ley de 1872, respetando los preceptos constitucionales, estableció el sistema de los jurados, que en la práctica ha significado una verdadera indemnidad para las personas que abusaban de la libertad de imprenta, a tal punto que aquella libertad garantizada por la Constitución se ha transformado, en numerosos casos, en una verdadera licencia, que es el enemigo mayor de la libertad misma.

Dada la situación transitoria por que el país atraviesa y la supresión de la vigencia de muchos preceptos constitucionales, se ha creído del caso suprimir el jurado, estableciendo en cambio que la sentencia condenatoria de segunda instancia debe ser acordada por

el voto unánime del Tribunal en todos aquellos casos en que la apreciación de la simple mayoría pudiera ser arbitraria.

Si la nueva Constitución que debe dictar la próxima Asamblea Constituyente considerara del caso volver al sistema de jurados, que tan malos resultados ha dado en la práctica, bastaría una pequeña reforma del proyecto que os presento para que éste pudiera continuar en vigencia.

El proyecto mantiene y garantiza en la forma más amplia y liberal la libre manifestación de las opiniones y de las ideas.

La imprenta y en general la publicidad oral o gráfica gozarán de absoluta libertad y sólo serán castigados los que, para cometer delitos comunes, se valgan de esos medios, que constituyen el instrumento más poderoso del progreso.

Santiago, 19 de Marzo de 1925.—(Firmado).—**José Maza.**



## **Decreto-Ley N.º 425**

(Abusos de la publicidad)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 26 de Marzo de 1925 y por segunda vez el 27 del mismo mes)

Núm. 425.—Santiago, 20 de Marzo de 1925.—La Excelentísima Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

### **DECRETO-LEY:**

## **SOBRE ABUSOS DE LA PUBLICIDAD**

### **TÍTULO I**

#### **De la definición del derecho y de las formalidades exigidas para su ejercicio**

Artículo 1.º—La publicación de las opiniones por la imprenta, y, en general, la transmisión pública y por cualquier medio de la palabra, oral o escrita no está sujeta a autorización ni censura previa alguna.

El abuso de este derecho sólo puede castigarse en los casos y formas señalados en la presente ley.

Art. 2.º—Para asegurar la responsabilidad, toda persona que tenga a su cargo o dirección una imprenta, litografía o cualquier otro taller impresor, deberá poner el nombre de ésta, el del lugar y la fecha, en cada

uno de los ejemplares de toda publicación que hiciere.

Cada falta en este deber, que sea debidamente comprobada, será penada con doscientos pesos ( \$ 200) de multa.

Si se comprobare en forma legal que el impresor ha alterado en un impreso el nombre de la imprenta, el lugar o la fecha, se le castigará con una multa de quinientos pesos ( \$ 500).

Se estimará como comprobación suficiente de la falta del pie de imprenta la presentación de un ejemplar que carezca de él.

El Gobernador departamental, el acusador público y el Director General de Bibliotecas harán cumplir las disposiciones de este artículo y harán efectivas las multas que establece.

El Director General de Bibliotecas podrá proceder por medio de mandatarios.

Para la aplicación de este artículo se seguirá el procedimiento que el Código de Procedimiento Penal señala para las faltas, debiendo condenarse al que no pague la multa en el momento de la notificación a un día de prisión por cada diez pesos ( \$ 10) de multa.

Art. 3.º—Todo impresor entregará al acusador público del punto en que el taller esté establecido un ejemplar de los impresos que publique de cualquier naturaleza que sean, al mismo tiempo de su publicación. Deberán también los impresores, simultáneamente, depositar cuatro ejemplares en la Biblioteca Nacional y uno más en la secretaría del respectivo gobierno departamental.

Los impresores cuyo establecimiento esté fuera de Santiago, remitirán los ejemplares correspondientes a la Biblioteca Nacional, por correo, exigiendo certificado escrito de la oficina respectiva, la que estará obligada a darlos sin mayor costo.

Cada infracción de este artículo será penada con cien pesos ( \$ 100) de multa.

Se estimará prueba suficiente de la infracción el certificado, otorgado por quien corresponda, de no haber llegado el ejemplar o ejemplares a la oficina respectiva, y la falta de presentación del certificado de correo en su caso; sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda aducir el inculpado ante la justicia ordinaria a su costa.

Los denuncios por infracciones se harán por escrito al Director General de Bibliotecas el cual, previas las comprobaciones del caso, decretará la entrega de los ejemplares y el pago de la multa en que haya incurrido el infractor.

El condenado por el Director podrá reclamar a la justicia ordinaria dentro del plazo fatal de cinco días después de la notificación del fallo administrativo; pero no se dará curso a la reclamación, que se tramitará breve y sumariamente, sin acompañar testimonio de haberse depositado previamente en arcas fiscales el valor de la multa.

Se tendrá por desistido al reclamante que no hiciere notificar oportuna y personalmente al representante del Fisco, antes de la audiencia que se señale o cuando no concurriere a ella.

La sentencia revocatoria de la resolución pronunciada por el Director General de Bibliotecas será consultada a la Corte de Apelaciones respectiva.

Para hacer efectivo el pago de las multas, tendrá mérito ejecutivo la resolución dictada al efecto por el Director General de Bibliotecas; entendiéndose que en este procedimiento no habrá excepciones y que sólo tendrá por objeto embargar y realizar bienes suficientes para el pago.

Las personas de cualquier naturaleza o sus representantes contra los cuales no fuere posible, por cualquier motivo, hacer efectivas las responsabilidades pecuniaras a que se refiere el inciso anterior, sufrirán un día de prisión por cada diez pesos (\$ 10) del valor total

que ordene pagar la resolución administrativa no pudiendo exceder la prisión de sesenta días.

La Biblioteca Nacional enviará a la del Congreso Nacional un ejemplar de cada obra o impreso que el Bibliotecario de esta última solicite; y otro, en las mismas condiciones, a la Biblioteca Colón de la Unión Pan Americana en Wáshington.

Art. 4.º—Todo diario, revista, o escrito periódico debe tener un Director responsable.

El Director deberá ser persona que no tenga fuero, estar en el pleno goce de sus derechos civiles y, siendo varón, no haber sido condenado a inhabilitación para derechos políticos.

Art. 5.º—No podrá iniciarse la publicación de ningún diario, revista o escrito periódico, sin que previamente la persona que deba ser su director responsable lo declare por escrito ante el Gobernador del departamento respectivo. Esta declaración irá firmada por el Director y contendrá las siguientes enunciaciones:

- a) El título del diario, revista o periódico, e indicación de los períodos que mediarán entre un número y otro;
- b) El nombre y domicilio del Director;
- c) El nombre y domicilio del propietario;
- d) La indicación de la imprenta en que va a hacerse la impresión.

Una copia de la declaración se enviará por correo en carta certificada, al Director General de Bibliotecas.

Cualquier cambio que se produzca en las condiciones ya enunciadas, será objeto de una declaración que deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes.

El Gobernador dará recibo de estas declaraciones sin que pueda excusarse de hacerlo, ni aún a pretexto de ser ellas falsas o inexactas.

Art. 6.º—La infracción de las obligaciones impuestas en los dos artículos anteriores será penada con cuatrocientos pesos (\$ 400) de multa. En los casos del ar-



título 5.º, serán responsables tanto el Director como el Impresor.

Si después de ejecutoriada la sentencia que ordena el pago de la multa, continuare publicándose el diario, revista o escrito periódico, sin haber cumplido las formalidades prescritas, la publicación de cada nuevo número será penada con multa de cien pesos (\$ 100) que afectará por entero tanto al Director como al Impresor.

Art. 7.º—El Gobernador departamental, el Promotor Fiscal y el Director General de Bibliotecas harán cumplir las obligaciones de los artículos 4.º y 5.º, y harán efectivas las multas que establece el artículo anterior.

El Director General de Bibliotecas podrá proceder por medio de mandatario.

Se seguirá el procedimiento que el Código de Procedimiento Penal señala para las faltas, debiendo condenarse al que no pagare la multa en el momento de la notificación, a un día de prisión por cada diez pesos (\$ 10) de multa.

## TÍTULO II

### De las rectificaciones y del derecho de respuesta

Art. 8.º—Todo diario o periódico está obligado a insertar gratuitamente las aclaraciones o rectificaciones que les sean dirigidas por cualquier funcionario, corporación o particular que se creyeren ofendidos o infundadamente aludidos por alguna publicación hecha en el mismo.

Las rectificaciones deberán circunscribirse en todo caso al objeto de la aclaración; y no podrán tener una extensión superior a la del artículo que las motiva, si

son de particulares, o al doble si son de funcionarios o corporaciones, pero no podrá exigirse que tengan menos de cincuenta líneas ni más de doscientas.

El escrito de aclaración o rectificación deberá publicarse, sin intercalaciones, en la misma edición y páginas y con los mismos caracteres que el artículo que lo ha provocado, y se insertará en el primer número siguiente al de éste, siempre que el aludido entregue los originales a lo menos doce horas antes de aquella en que sale a luz el diario o periódico.

El diario o periódico no podrá negarse a insertar la respuesta, sin perjuicio de la responsabilidad del autor de ésta.

En caso de infracción a lo dispuesto en este artículo, el Director del diario o periódico será penado con multa de ciento a mil pesos.

Si el diario o periódico agregare a la respuesta del aludido nuevos comentarios, tendrá éste derecho a réplica, bajo las mismas reglas anteriores.

Art. 9.º—El requerimiento dirigido al diario o escrito periódico para que inserte la respuesta, puede probarse por cualquiera de los medios legales, y los receptores públicos están obligados a notificarlo, a petición del interesado, sin mayor dilación y sin más trámite.

Presentada la denuncia por no haberse publicado oportunamente la respuesta, el tribunal, con el mérito de las pruebas acompañadas o que se agregaren breve y sumariamente y después de oír al Director o en su rebeldía se pronunciará sobre ella dentro de tercero día. Si en el fallo se condenare al Director, podrá ordenar el tribunal que se lleve a efecto desde luego, no obstante cualquier recurso que se haya interpuesto.

Art. 10.—El derecho a que se refieren los artículos anteriores, podrá ejercitarse por los cónyuges, padres, hijos o hermanos de la persona agraviada o aludida o por su mandatario, en caso de fallecimiento, enfermedad, ausencia o autorización expresa.

Art. 11.—No se podrá ejercer el derecho de respuesta con relación a las apreciaciones personales que se formulen en artículos de crítica literaria, histórica, artística o científica, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su publicación se cometiere alguno de los delitos penados en la presente ley.

### TÍTULO III

#### De los delitos cometidos por medio de la imprenta u otra forma de publicación

##### I.—Provocación a los delitos

Art. 12.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Código Penal serán castigados como cómplices de un crimen o simple delito, los que, sea por medio de discursos, conferencias, gritos o amenazas pronunciadas o proferidos en lugares o reuniones públicas, transmitidos por la radiotelefonía u otro procedimiento análogo; sea por medio de escritos, impresos o no, que se vendan, distribuyan o expongan en lugares o reuniones públicas; sea por medio de carteles exhibidos al público, hayan provocado directamente al autor o autores a la ejecución del hecho punible, siempre que éste llegue a efectuarse.

La disposición del presente artículo es aplicable aún en el caso de que el hecho punible efectuado constituya sólo un delito frustrado o una tentativa.

Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de que pueda castigarse como autor al que ha provocado públicamente la ejecución de un delito, cuando le fuere aplicable la disposición del número 2.º del art. 15 del Código Penal.

Art. 13.—El que por alguno de los medios enunciados en el artículo anterior incite directamente a la ejecución de los delitos de homicidio, robo, incendio, algunos de los previstos en el art. 480 del Código Penal, o en los Títulos I y II del Libro II del mismo Código, será castigado, aunque el delito no llegue a consumarse, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientos a tres mil pesos.

Con igual pena será castigado el que, por alguno de los medios enunciados en el artículo anterior, haga la apología de los delitos de homicidio, robo, incendio o alguno de los contemplados en el artículo 480 del Código Penal.

Art. 14.—El que por alguno de los medios enumerados en el art. 12, induzca a uno o varios miembros de la fuerza armada a infringir sus deberes militares o a desobedecer a sus superiores jerárquicos en lo concerniente a las leyes y reglamentos del ramo será castigado, aunque la infracción o desobediencia no llegue a producirse, con reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientos a tres mil pesos.

Art. 15.—El que profiriere gritos o cantos sediciosos en lugares o reuniones públicas, será castigado, no concurriendo las circunstancias de los artículos anteriores, con la pena de prisión en su grado mínimo a medio y multa de veinte a quinientos pesos, o con una de esas dos penas únicamente.

Art. 16.—Lo dispuesto en este párrafo se entiende sin perjuicio de aplicarse preferentemente, cuando fueren pertinentes, las disposiciones de los arts. 122, 123, 125 y 127 del Código Penal.



## II.—Noticias falsas o no autorizadas

Art. 17.—La publicación o reproducción de noticias falsas, de documentos supuestos, adulterados o atribuidos inexactamente a otra persona, por alguno de los medios señalados en el art. 12, será castigada con reclusión menor en su grado mínimo y multa de ciento a mil pesos, o con una de esas penas únicamente, siempre que la publicación o reproducción haya sido hecha de mala fe.

Igual pena tendrán los que maliciosamente publiquen disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que deban mantenerse reservados por su naturaleza.

## III.—Delitos contra las buenas costumbres

Art. 18.—El que cometiere el delito de ultraje a las buenas costumbres, por alguno de los medios enunciados en el art. 12, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo y multa de ciento a diez mil pesos.

Se considerará en especial que cometen ultraje público a las buenas costumbres y serán castigados con la pena establecida en el inciso anterior:

1) Los que vendieren o pusieren en venta, ofrecieren, distribuyeren, hicieren distribuir o exhibieren públicamente escritos, impresos o no, figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas, objetos o imágenes obscenas o contrarias a las buenas costumbres.

La venta, oferta o distribución a menores de veinte años, será punible aunque no se efectúe públicamente.

La distribución a domicilio de los escritos u objetos enumerados será castigada también con la misma pena; pero el simple hecho de entregarlos al correo o a alguna empresa de transporte o distribución sólo será, pesquisable cuando la entrega se hiciere bajo faja, o

en sobre abierto. En todo caso serán pesquisables después de llegar a poder del consignatario.

2) Los que profirieren o hicieren proferir en público canciones obscenas o contrarias a las buenas costumbres.

3) Los que publicaren avisos o correspondencias contrarias a las buenas costumbres.

La pena se elevará al doble si el ultraje a las buenas costumbres en cualquiera de las formas enunciadas, tiene por objeto la perversión de menores de veinte años.

#### IV.—Delitos contra las personas

Art. 19.—Los delitos de injuria o calumnia cometidos por cualquiera de los medios enumerados en los arts. 12 o 18 serán castigados con las penas señaladas al efecto en los arts. 413, 418 inciso 1.º y 419 del Código Penal.

Pero la cuantía de la multa será de quinientos a cinco mil pesos en los casos del número 1.º del art. 413 y del art. 418; de doscientos a dos mil pesos en el caso del número 2.º del art. 413 y de doscientos a mil pesos en el caso del art. 419.

Art. 20.—Al que se acusare de haber causado injuria o calumnia por alguno de los medios señalados en los arts. 12 y 18 no se le admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos, miembros del Congreso o de las Municipalidades, Ministros de un culto permitido en la República, sobre hechos concernientes al desempeño de su cargo, mandato o ministerio; contra algún testigo en razón de la deposición que haya prestado, contra directores o administradores de empresas industriales, comerciales o financieras, que soliciten públicamente capitales o créditos.

Art. 21.—Los que por medio de la imprenta, litografía u otro medio de publicación divulguen maliciosamente hechos relativos a la vida privada que, sin ser injuriosos o calumniosos puedan producir perjuicios o graves disgustos en la familia a que la noticia se refiera, serán penados con multa de ciento a mil pesos.

Art. 22.—Las penas establecidas en el párrafo 1.º el título VI del Código Penal para los que cometan desacatos contra la autoridad, injuriándola, se aplicarán también cuando el desacato se cometa por cualquiera de los medios enumerados en los arts. 13 y 18.

Pero la cuantía de la multa será de \$ 500 a \$ 5,000 en los casos del inciso 1.º del art. 263 y primera parte del artículo del referido Código; de \$ 300 a \$ 2,000 en el caso del inciso 2.º del art. 263 y de \$ 300 a \$ 1,000 en el caso contemplado en la segunda parte del art. 265.

#### **V.—Delitos contra los Jefes de Estado o agentes diplomáticos extranjeros**

Art. 23.—La simple ofensa o ultraje contra un Jefe de Estado extranjero, cometida por alguno de los medios enumerados en los arts. 12 y 18, cuando no fueren aplicables las disposiciones del párrafo anterior, será castigada con reclusión menor en su grado mínimo y multa de \$ 100 a \$ 3,000, o simplemente con una de esas dos penas.

Art. 24.—La simple ofensa o ultraje por los mismos medios contra los embajadores y demás agentes diplomáticos extranjeros acreditados ante el Gobierno de la República será castigada, cuando no fueren aplicables las disposiciones del párrafo precedente, con prisión en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a mil pesos o simplemente con una de esas dos penas.

## VI.—Publicaciones prohibidas y casos de inmunidad

Art. 25.—Se prohíbe la publicación de los documentos y piezas que formen parte de un proceso criminal en estado de sumario, bajo multa de ciento a mil pesos.

Se prohíbe bajo la misma pena la publicación de cualesquiera informaciones referentes a juicios que se sigan o hayan seguido por injurias y calumnias en los casos en que no se admita probar la verdad de las expresiones injuriosas o calumniosas.

Pero el ofendido podrá siempre hacer publicar la sentencia en que se condene a su ofensor.

Art. 26.—Se prohíbe bajo la pena señalada en el artículo precedente, la publicación de cualesquiera informaciones relativas a delitos cometidos por menores; pero cuando hubiere juicio pendiente podrá hacerse la publicación con permiso del juez de la causa.

Art. 27.—Los tribunales podrán prohibir siempre la publicación de informaciones concernientes a determinado juicio de que conozcan, bajo pena de la multa fijada en los artículos anteriores.

Art. 28.—Se prohíbe abrir o anunciar públicamente suscripciones que tengan por objeto indemnizar a cualquiera persona por las multas, daños o perjuicios a que haya sido condenada judicialmente y que provengan de la ejecución de un delito.

La infracción a esta prohibición será penada con prisión en sus grados medio a máximo y multa de ciento a mil pesos.

Art. 29.—Se prohíbe, bajo multa de cincuenta a dos mil pesos, la publicación de noticias sobre hechos delictuosos y de informaciones gráficas sobre los mismos, cuando de ella pudiere resultar verosíblemente daño grave para las buenas costumbres y para la tranquilidad pública.



El juez fijará la cuantía de la pena, según parezca la magnitud del daño que pueda causarse.

Art. 30.—Se prohíbe, bajo multa de ciento a mil pesos, la publicación de avisos e informaciones sobre medicamentos que hayan sido declarados nocivos por la Dirección General de Sanidad.

Art. 31.—Los senadores y diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos; pero serán responsables de las injurias o calumnias que profirieren en el seno del Parlamento.

No darán lugar a acción penal las reseñas fieles que hagan los diarios de las discusiones habidas en las Cámaras legislativas o de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia, ni los informes u otros documentos que por su orden se impriman.

#### TÍTULO IV

##### Del procedimiento y reglas generales

Art. 32.—Son especialmente responsables y considerados como principales autores de los delitos penados en el título III de esta ley:

- 1) El Director, si se trata de algún diario, revista o escrito periódico;
- 2) A falta de Director, el Impresor;
- 3) A falta de Director y de Impresor, los vendedores, repartidores, colocadores de carteles, escritos, figuras, estampas, dibujos, grabados, objetos, emblemas o imágenes.

Los autores serán también considerados responsables, a menos que prueben que la publicación, hecha en cualquier forma, se ha efectuado sin su consentimiento ni aquiescencia.

Del artículo que se publicare en ejercicio del derecho de respuesta, será responsable solamente su autor.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que afecta a todas las personas respecto de quienes se compruebe su participación, como autores o cómplices de los delitos penados en esta ley, según las reglas generales del Código Penal.

El autor y el impresor podrán excusar su responsabilidad presentando a la persona que les hubiere garantizado el escrito, siempre que ésta pueda ser habida y sea justiciable sin trámite previo.

Art. 33.—Los propietarios de diarios, revistas o escritos periódicos, serán civilmente responsables de los delitos cometidos por medio de esas publicaciones, en conformidad a lo establecido en el art. 2320 del Código Civil.

Art. 34.—Los delitos penados en esta ley dan lugar a acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios, según las reglas generales.

Art. 35.—La indemnización de perjuicios proveniente de los delitos de injuria o calumnia causado por algunos de los medios señalados en esta ley, podrá hacerse extensiva al daño pecuniario que sea consecuencia de la depresión moral sufrida con motivo de la injuria o calumnia por la víctima, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos y aún a la reparación del daño meramente moral que sufriere el ofendido.

El tribunal fijará la cuantía de la indemnización, tomando en cuenta las facultades del ofensor y de la víctima y cualquiera otra circunstancia que parezca digna de considerarse.

Art. 36.—Salvo el caso contemplado en el art. 3.º de la presente ley, serán competentes para conocer en primera y segunda instancia, de los delitos provistos en ella, los jueces a quienes el Título I del Código de Procedimiento Penal entrega el conocimiento de las causas seguidas por razón de crímenes o simples delitos.

Habrá lugar a los recursos de casación o revisión según las reglas generales.

Art. 37.—Tratándose de los delitos penados en los párrafos I y II, en los arts. 22 y 29 del Título III de la presente ley, de injurias o calumnias contra algunas de las personas mencionadas en el art. 20 o de ultraje a las buenas costumbres inferido en libros o representaciones teatrales, la sentencia condenatoria de segunda instancia, tanto en la acción penal como en la civil, no puede ser acordada sino por el voto unánime del tribunal. Si ninguna pena fuere unánimemente aceptada, el acusado se entenderá absuelto.

Si en el juicio figuraren varios inculpados, este privilegio sólo favorecerá a los que lo fueren por delitos cometidos por alguno de los médicos que se señalan en los arts. 12 y 18.

Art. 38.—Los delitos penados por la presente ley dan lugar a acción pública, salvo las derogaciones y limitaciones establecidas en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, para los casos de injuria y calumnia. Los delitos penados en el art. 21, sólo dan lugar a acción privada.

Art. 39.—La acción pública sólo puede ser ejercitada por el Ministerio Público, el ofendido, sus herederos o representantes legales; su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, legítimos o naturales, y sus parientes colaterales legítimos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El juez competente podrá también instruir sumario de oficio, en conformidad a lo dispuesto en el art. 126 del Código de Procedimiento Penal.

Art. 40.—Las personas mencionadas en el art. 20 no podrán ejercitar la acción civil proveniente del delito de injuria o calumnia, sin que, previa o simultáneamente, ejercitaren la acción penal.

Art. 41.—Sin perjuicio de las reglas especiales prescritas para las infracciones contenidas en los Títulos I

y II de esta ley, el procedimiento para la investigación y juzgamiento de los delitos previstos en ella, se regirá por las reglas trazadas en el Código correspondiente.

En segunda instancia el Tribunal, procediendo como jurado, fallará en conciencia.

Art. 42.—En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 135 del Código de Procedimiento Penal, el juez sumariante podrá ordenar que se recojan no más de cuatro ejemplares de los escritos, impresos, carteles o dibujos, que hayan servido para cometer el delito. Pero esa medida podrá hacerse extensiva a todos los ejemplares de la obra abusiva, si se tratare de delitos contra las buenas costumbres o contra la seguridad exterior del Estado, de los señalados en los arts. 14, 23 y 24, de la provocación a los mencionados en el inciso 2.º del art. 13 de la apología de estos últimos.

En la sentencia condenatoria podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o la destrucción de los escritos, impresos, carteles o dibujos abusivos que se vendieren, distribuyeren o exhibieren públicamente, o bien sólo su destrucción parcial.

La sentencia condenatoria por delitos contra las buenas costumbres, ordenará necesariamente la destrucción de los escritos, dibujos, estampas y demás objetos enumerados en el art. 18 o cualquiera otro que haya servido para cometer el delito.

Art. 43.—Aunque el hecho delictuoso fuere penado con multa superior a mil pesos, será considerado simple delito para los efectos legales, salvo que por otro capítulo merezca ser calificado de crimen.

Art. 44.—Tanto la acción penal como la civil, provenientes de los delitos previstos por esta ley, prescriben en el plazo de tres meses, contados desde la fecha en que se haya dado a la publicidad, en cualquier forma, la producción abusiva. Pero si ésta fuere un libro, la acción prescribirá en un año.



Si la producción abusiva ha sido dada a la publicidad en el extranjero, los tres meses o el año se contarán desde la fecha de su introducción en el territorio nacional.

Art. 45.—Las multas impuestas en los Títulos I y II de esta ley se aplicarán a beneficio fiscal y el Tesorero respectivo será parte para reclamar su pago.

Las multas impuestas en el Título III se aplicarán a beneficio de la Municipalidad respectiva.

Art. 46.—Derógase la ley de 17 de Septiembre de 1872, la número 2,911 de 5 de Agosto de 1924 y el decreto-ley 281 de 28 de Febrero de 1925.

Art. 47.—La presente ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el “**Diario Oficial**”.

Artículo transitorio.—Los actuales directores, propietarios, editores e impresores de diarios, revistas o escritos periódicos, deberán hacer la declaración prescrita por el art. 5 de esta ley, dentro del plazo de treinta días a contar desde su promulgación.

Si no lo hicieran incurrirán en las multas que fija el art. 6.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—**Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**

### **Decreto-Ley N.º 446**

(Crea diversos Juzgados de Letras de Menor Cuantía en las ciudades que indica)

(Publicado en el “Diario Oficial” de 1.º de Abril de 1925)

Núm. 446.—Santiago, 20 de Marzo de 1925.—La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente

#### **DECRETO-LEY:**

Artículo 1.º—Créase, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4.º del decreto-ley N.º 363, un Juzgado de Letras en Iquique, Huara, Antofagasta, Pueblo de Unión, Sewell, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Talcahuano, Coronel, Curanilahué, Lebu, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Natales, para ejercer las funciones que señala el decreto-ley número 363, de 17 de Marzo en curso.

Art. 2.º—Los jueces y secretarios de estos Juzgados tendrán la remuneración indicada en el art. 66 del decreto-ley número 363 y los de los Juzgados de Iquique, Huara, Antofagasta, Pueblo de Unión y Puerto Natales, gozarán, además, de una gratificación equivalente al veinticinco por ciento del sueldo respectivo.

Art. 3.º—Las respectivas Cortes de Apelaciones informarán al Gobierno sobre los límites que deberán comprender cada uno de los Juzgados creados por la presente ley, y llamarán a concurso a las personas que se interesen en servir dichos cargos, procediéndose, en lo demás, conforme al citado decreto-ley número 363.

Art. 4.º—Autorízase al Presidente de la República

para invertir hasta la suma de quinientos mil pesos (\$ 500.000) en los gastos que demanden la instalación y funcionamiento de los Juzgados que se crean por el presente decreto-ley y por el número 363, de 17 de Marzo en curso.

Art. 5.º—El presente decreto-ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el “**Diario Oficial**”.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—

**Emilio Bello C.—C. A. Ward.—Pedro P. Dartnell E.—José Maza.**

---

No se hizo exposición de motivos porque es un simple complemento del decreto-ley que organiza los Juzgados de Menor Cuantía.

---

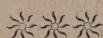




## ÍNDICE

	Págs.
Decreto-Ley N.º 233 (Concede amnistía a todos los procesados por cuestiones sociales, políticas y electorales) .....	5
Decreto-Ley N.º 301 (Orgánico del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones). Exposición de motivos.....	7
Texto del Decreto-Ley.....	11
Decreto-Ley N.º 302 (Gratificación al personal civil de las prisiones). Exposición de motivos.....	18
Texto del Decreto-Ley.....	20
Decreto-Ley N.º 321 (Establece la libertad condicional). Exposición de motivos.....	22
Texto del Decreto-Ley.....	25
Reglamento .....	29
Decreto N.º 689 sobre solicitudes de indulto.....	44
Decreto-Ley N.º 328 (Capacidad legal de la mujer). Exposición de motivos.....	45
Texto del Decreto-Ley.....	50
Decreto-Ley N.º 344 (Reforma sobre mérito ejecutivo de la letra de cambio). Exposición de motivos.....	52
Texto del Decreto-Ley.....	54
Decreto-Ley N.º 361 (Suprime en la Corte de Apelaciones de Talca la tercera plaza de relator y la agrega a la de Concepción). Exposición de motivos.....	55
Texto del Decreto-Ley.....	57

	Págs.
Decreto-Ley N.º 363 (Aprueba el proyecto de Ley Orgánica de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía).	
Exposición de motivos.....	58
Texto del Decreto-Ley....	59
Informe .....	60
Texto de la Ley.....	64
Decreto-Ley N.º 406 (Crea los Colegios de Abogados).	
Exposición de motivos.....	92
Texto del Decreto-Ley.....	95
Decreto-Ley N.º 407 (Organiza el servicio notarial en la República).	
Exposición de motivos....	104
Texto del Decreto-Ley.....	108
Decreto-Ley N.º 408 (Fija los sueldos a los miembros del Poder Judicial).	
Exposición de motivos.....	125
Texto del Decreto-Ley.....	126
Decreto-Ley N.º 409 (Suprime el feriado judicial).	
Exposición de motivos....	129
Texto del Decreto-Ley.....	130
Decreto-Ley N.º 425 (Abusos de la publicidad).	
Exposición de motivos....	131
Texto del Decreto-Ley....	139
Decreto-Ley N.º 446 (Crea diversos Juzgados de Letras de Menor Cuantía).	
Texto del Decreto-Ley.....	156









UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL  
LIBRARY

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL



00035559092